

DMFN
2112

FLACSO - Biblioteca

45.00
x
2

INSTITUTO LATINOAMERICANO
DE INVESTIGACIONES SOCIALES
(I L D I S)



PODER POLITICO Y TRANSICION AL SOCIALISMO
Tres años de la Unidad Popular

Jaime Ruiz-Tagle P.

Caracas, septiembre 1973

S.129 PER 1659

Redacción de la serie: María Teresa Medina A.

Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS)
Calle Dieciocho 229, 4º piso Teléfonos: 82575-6
Casilla 14580 - Correo 21
Santiago de Chile

En Caracas:

Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS)
Plaza la Castellana
Edificio Parsa 1er. piso - Teléfonos: 333741-4
Apartado 61712 Chacao
Caracas

En Alemania:

Instituto de Investigaciones de la Friedrich - Ebert - Stiftung
Koelner Strasse 149
53 Bonn - Bad Godesberg I
República Federal Alemana

INDICE

| | |
|--|-----|
| PREFACIO | 1 |
| INTRODUCCION | 3 |
| Poder Político y Transición al Socialismo | 5 |
| La Elección de Allende | 19 |
| De la Reforma Industrial al Conflicto de Poderes | 22 |
| Tensiones de la Unidad Popular | 29 |
| Elecciones, Economía y Cambio Social | 36 |
| ¿Una Nueva Política económica? | 43 |
| "A tres Bandas" y la Libertad de Expresión | 51 |
| Vía Legal y Transición al Socialismo | 59 |
| Una Extraña Lucha de Clases | 67 |
| El Viaje de Allende y la Independencia Nacional | 80 |
| La Experiencia Chilena Frente a las Elecciones | 89 |
| Las Elecciones Parlamentarias: Un Desempate Sorprendente | 101 |
| El Transfondo del Reajuste | 110 |
| Huelga en "El Teniente" | 121 |
| Violencia y Guerra Civil | 130 |
| Las Fuerzas Armadas y el Poder Popular | 139 |
| Los Obispos, el Diálogo, la "Vía Chilena" | 148 |
| Algunos Problemas de la Transición al Socialismo | 157 |
| APENDICE | 159 |
| Bibliografía Sobre el Proceso Chileno | |

P R E F A C I O

Un libro se presenta por sí solo. Y mucho más cuando su claridad, su sentido de matices, su objetividad cautivan desde las primeras páginas. Y es el caso de esta pequeña obra.

Pero para responder a la costumbre aquí van unas pocas palabras.

En los momentos de escribir estas líneas vivimos un estado de crisis política - que fácilmente puede significar un golpe de Estado; con el consiguiente derramamiento de sangre. Ciertamente el poder popular no dejaría que la derecha retomase impunemente el poder.

¿Cómo hemos llegado a esta situación volcánica?

Creo que la culpa es del gobierno y de la oposición; intolerancia e incomprensión mutua.

Habiendo logrado el triunfo de Allende con el apoyo de la Democracia Cristiana, la Unidad Popular y el Presidente pudieron contar con los sectores más amplios de dicho partido y establecer así una plataforma mayoritaria de gobierno tras la meta de cambios estructurales profundos de corte socialista. En realidad el programa de Allende y de Tomic eran compatibles y presentaban más bien similitudes que discrepancias.

Pero confiando en una división masiva de la Democracia Cristiana el Presidente Allende y la Unidad Popular adoptaron una política dura y sectaria. Con esto lograron simplemente que los sectores más derechistas de la Democracia Cristiana hicieron ver - la imposibilidad de colaborar con el Gobierno de Allende. Así este partido que pudo colaborar en la construcción de un régimen no capitalista pasó a ser oposición cerrada e intransigente con la excepción de uno que otro dirigente. Los sectores que apoyaban la política abierta de Tomic quedaron reducidos a una ínfima minoría.

Evidentemente en todo este conflicto ha jugado un importante papel el sector - capitalista defendiendo sus intereses y también el imperialismo extranjero, v. gr. la - ITT. El partido Nacional y los sectores derechizantes de la Democracia Cristiana, cada vez mayores, han influido para que este partido que en principio está por un socialismo democrático diga no a toda iniciativa del gobierno. Inconscientemente la Democracia Cristiana ha caído en la trampa que les tendía el capitalismo.

Lo grave es que ahora se ha perdido toda confianza. Ni la Unidad Popular confía en la Democracia Cristiana, ni esta en aquella. Es esta tremenda crisis de -

confianza la que ha roto todo diálogo, ha bloqueado la vida política y nos lleva al borde de la guerra civil.

Se miente descaradamente en los periódicos, radios y televisiones derechistas e izquierdistas; se fragmentan, mutilan y omiten noticias; se las distorsiona y deforma hasta lo increíble; se usan los acontecimientos con descarados fines políticos y electorales; se interpreta contradictoriamente ya sea la letra ya sea el espíritu de la ley en defensa de intereses ideológicos; se celebran acuerdos que en el último minuto se hacen fracasar; se otorgan públicamente garantías y se dan promesas que luego no se cumplen.

Este es el clima que vivimos; aire cargado, violento, intolerante que fomenta y ahonda la incomprensión y la desconfianza. Todo se polariza y radicaliza. O se es de oposición o se es de gobierno, o se ve blanco o se ve negro. Se ignoran los matices.

Por eso este libro se nos presenta como un oasis en un clima de pasión política enconada. A lo largo de sus páginas nos entrega un juicio sobre el acontecer nacional: juicio fundado sereno, matizado, objetivo.

Creemos que el gran mérito del libro es éste: su serenidad, su objetividad. Si normalmente cuesta ser objetivo, en los momentos que vivimos es casi imposible, pero el autor ha escapado a la tentación del simplismo fácil y ha sabido juzgar la realidad política ecuanimamente sin caer tampoco en un eclecticismo desleído.

Así recomendamos calurosamente la lectura del libro. Es el resultado del más noble de los anhelos: el anhelo de la verdad. No se dice lo que se quiere o teme sino lo que es; sin maquillajes ni mordazas; simplemente lo que es.

Hernán Larrain Acuña SJ.

Director de Mensaje

Santiago, 3 de septiembre

INTRODUCCION

El presente volumen está formado básicamente por una serie de artículos que han ido apareciendo mensualmente en la revista Mensaje durante los años 1972 y 1973. A ellos se ha añadido un artículo publicado en la revista Estudes y un capítulo introductorio que pretende sintetizar en torno al tema del poder la problemática central tratada en esos artículos. Se ha agregado también como apéndice una bibliografía, que creemos puede ser útil para los científicos sociales que estudian el proceso chileno. Esperamos también que los mismos artículos, aunque están dirigidos fundamentalmente a un público culto no especializado, puedan aportar informaciones y elementos de reflexión a los científicos sociales.

Si bien los artículos han sido escritos durante los dos últimos años, pensamos que el sub-título "Tres años de la Unidad Popular" se justifica en la medida que con frecuencia se han hecho retrospectivas que alcanzan hasta los inicios del Gobierno actual. Por otra parte, en una u otra forma, todos los elementos que actúan en el proceso chileno han ido apareciendo: las clases y grupos sociales, los poderes del Estado, los partidos políticos, las Fuerzas Armadas, los medios de comunicación de masas, la Iglesia, los factores ideológicos y culturales.

La información recogida proviene en parte de la prensa diaria y semanal, pero lo central de ella ha sido recogido directamente de labios de actores importantes del proceso: Ministros y ex-Ministros, Parlamentarios, dirigentes políticos y sociales. Las expresiones textuales de estos informantes no fueron retenidas ni sus nombres fueron mencionados, lo que les permitió expresarse con mayor libertad. Con frecuencia otros miembros del equipo de Mensaje, aparte del autor, participaron en esas entrevistas, colaborando con sus preguntas y reflexiones. A todos ellos van dirigidos nuestros sinceros agradecimientos, así como también a los que contribuyeron posteriormente a mejorar los textos con sus críticas constructivas.

Por último, queremos señalar claramente que estos artículos no pretenden ser neutros ideológicamente. Nos hemos esforzado por ser objetivos tratando de escuchar a los grupos en conflicto y de valorizar sus argumentos, sin dejarnos llevar por slogans o calificaciones simplistas. Sin embargo, a través de estas páginas se podrá discernir una posición política, que es la del autor y básicamente también la de Mensaje. Frente al actual proceso chileno se ha tomado una posición de apoyo crítico, sin compromisos

partidistas. En algunos casos resalta más el apoyo, en otros se destaca la crítica, pero ambos elementos están siempre presentes. La opción subyacente es la de un socialismo democrático, que favorezca prioritariamente a los más pobres y en general a todos los que viven de su trabajo, un socialismo que se construya apoyándose en las fuerzas vivas que intervienen en un proceso revolucionario y que sin embargo no quiebre la convivencia nacional, un socialismo que cree una nueva sociedad a partir de lo mejor de nuestra historia.

Jaime Ruiz-Tagle P.

Santiago, septiembre 1973

PODER POLITICO Y TRANSICION AL SOCIALISMO

El problema del poder

En un proceso Revolucionario el problema del poder, que toma cuerpo en el problema del Estado, es el problema central. Así lo afirmaba Lenin, así lo han entendido los dirigentes e ideólogos de la Unidad Popular en el proceso chileno. Se ha afirmado que "en 1970 la clase obrera conquistó el Gobierno, pero no el poder", y que "sólo se puede hablar de una transición al socialismo desde el momento en que el poder pasa a la clase obrera" (1). Para la izquierda la tarea fundamental consiste en determinar cómo utilizar el Gobierno para llegar al poder.

Por nuestra parte, ya en el primero de los artículos de este volumen, escrito en abril de 1972, señalábamos como detrás del conflicto institucional de poderes y de la oposición entre dos modelos de socialismo, se podía detectar una lucha política por el poder entre los Partidos de Gobierno y de oposición, más concretamente entre la Unidad Popular y la Democracia Cristiana. Ambos grupos políticos pretenden representar, y de hecho representan, a las capas populares, de modo que la lucha por el poder se plantearía entre diversos sectores de trabajadores, a través de la mediación de los grupos políticos. Es cierto que la composición social de los partidos marxistas y del PDC no es la misma: aunque todos son pluriclasistas, en los primeros la proporción obreros es más importante mientras que la D.C. reúne una proporción mayor de sectores medios. Esto no es más que el reflejo de la orientación ideológica de estos partidos: mientras los que integran la Unidad Popular propician una alianza de clases, en la que se incorporen aun miembros de la burguesía, bajo la hegemonía del proletariado, la D.C. no privilegia a ningún sector de los trabajadores y declara estar al servicio de todos ellos, del "pueblo" sin más explicitaciones. De aquí que la lucha por el poder pueda plantearse de hecho entre los sectores hegemónicos dentro de cada grupo político: el proletariado y los sectores medios. Pero la observación anterior constituye más una pregunta que una constatación de hechos. En efecto, cabe preguntarse quién es el más auténtico representante del proletariado, quién defiende mejor los intereses (a corto y largo plazo) de los obreros, campesinos y en general de los grupos más pobres y desfavorecidos de la población. La pregunta lleva consigo el problema de la mediación ya que los partidos políticos no son las clases sociales; el problema del poder conserva su autonomía relativa frente al conflicto de clases.

La conquista del poder Ejecutivo

Entre las diferentes formas de poder que existen en el sistema político chileno, parece evidente que el poder institucional es el más fuerte. Se podrá dar mucha importancia al poder económico, al poder popular y aun al poder de los estudiantes o de las mujeres, pero no cabe duda de que todas estas formas de poder son secundarias con respecto al control del aparato estatal. Ahora bien, la Constitución chilena es eminentemente presidencialista, de manera que la conquista del Poder Ejecutivo constituye sin duda el paso central en el control del poder. No quiere decir esto que el poder de las fuerzas sociales sea irrelevante, ni mucho menos: como señalamos más adelante, la confirmación de Allende por el Congreso se debió - entre otras razones - al convencimiento de la D.C. de que si no se respetaba la mayoría electoral se lanzaría a la izquierda hacia la vía violenta. El poder del pueblo organizado permitió que la victoria electoral se consolidara, pero sin un triunfo electoral cualquier movilización habría sido de poca importancia.

Probablemente ciertos sectores calificarían este punto de vista como "electoralismo", insistiendo en que lo fundamental del problema del poder en Chile está en la capacidad de acumular fuerzas sociales y militares. Opinan que "en Chile es innegable que existe una alta legitimidad del triunfo electoral, que fuerza porque se le respete . . . Sin embargo, en la medida en que el proceso avance y se realice, esta situación tenderá a alterarse . . ." (2) Creemos que la opinión de estos sectores de la UP desconoce la realidad nacional: no sólo la opinión pública y las fuerzas sociales organizadas se opondrían violentamente a que "se jugara sucio", quebrando las reglas del juego, sino que las Fuerzas Armadas intervendrían para imponer el respeto a la Constitución. Más aun, el solo hecho de que sectores de la UP como los señalados declaren abiertamente que llegado el momento estarían dispuestos a no respetar "la voz de las cifras", nos parece una clara desviación de la "vía chilena" propuesta en el Programa de la UP, desviación que contribuye a radicalizar las posiciones y a hacer que esta vía se empantane, o vuele en pedazos.

El Gobierno tiene en Chile no sólo atribuciones en el campo administrativo, sino que posee un importante rol de co-legislador: si cuenta con un tercio de los parlamentarios (el "tercio constitucional") puede incluso imponer siempre su criterio al Congreso. Además, el Presidente goza de la potestad reglamentaria, lo que le propor-

ciona una nueva fuente de influencia en la aplicación de las leyes. En fin, el control directo de las fuerzas de orden es un arma más en manos del Ejecutivo para influir en los movimientos sociales; ya que puede aplicar la permisividad o la represión, dentro de ciertos límites, conforme a su orientación política.

Pero lo señalado no es todo. A través de sus luchas, a través de las concesiones que han debido hacer los grupos dominantes, los sectores populares han tenido acceso - limitado, pero indiscutible - al aparataje jurídico. Es por eso que, si el Gobierno es controlado por una coalición de clara orientación popular, "el derecho se transforma en un arma política, social y económica del pueblo y no sólo en instrumento monopolístico de la burguesía" (3). La ilustración más clara de esto es el famoso DFL 520, tan utilizado - como se verá más adelante - en las intervenciones y requisiciones de empresas.

Lo que hemos destacado respecto al poder Ejecutivo nos parece suficiente para rechazar como superficial la afirmación de ciertos teóricos de la UP en el sentido de que "para nadie es un secreto que el Estado de Chile es un Estado burgués, un Estado al servicio de la burguesía chilena como clase dominante" (4). Nos parece mucho más acertado el planteamiento del dirigente comunista que afirmaba: "Hoy en día la legalidad, si bien tiene doble carácter, juega en Chile principalmente en favor del movimiento popular, dado que, como hemos dicho, el sector del poder estatal que hemos conquistado es el que tiene mayores atribuciones. Usando bien y audazmente este poder es posible modificar radicalmente la sociedad chilena, a condición de hacer pesar sobre las estructuras estatales, donde influyen fuerzas reaccionarias y conservadoras, la fuerza del pueblo movilizado" (5).

El poder del Parlamento

Si bien es cierto que el Presidente puede imponer su criterio por sobre el Congreso a través del "Tercio constitucional", no lo es menos que sin el Congreso no puede legislar. La circunstancia de que la elección presidencial de 1970 estuviera muy separada de la más próxima elección parlamentaria constituyó desde el comienzo un problema para la UP. Ante la mayoría opositora en el Congreso quedaban dos posibilidades: o bien buscar acuerdos parciales con el PDC, ya que el programa de Tomic tenía muchas coincidencias con el de Allende, y la democracia

crisiana - tanto en la base como entre los dirigentes - tenía buenas disposiciones para colaborar; o bien alcanzar la mayoría electoral y luego llamar a plebiscito para constituir una Cámara Unica. La UP optó por la segunda alternativa. Lo importante, sin embargo, es que no se trataba de una opción táctica más, sino de una opción fundamental. En las elecciones municipales de abril de 1971, gracias a la dinámica del triunfo, a las armas que da el poder y las primeras medidas netamente populares, la UP estuvo a punto de obtener la mayoría absoluta del electorado. Según algunos dirigentes del PC ese fué el momento en que se debía haber llamado a un plebiscito. Según otros, llamar a un plebiscito habría sido un error, no solamente porque se habría perdido, sino porque se habrían puesto en evidencia las divisiones internas de la coalición marxista. En realidad, esa cuasi-mayoría absoluta se había logrado incluyendo los votos del Partido Radical, y los análisis electorales más elementales respecto a la elección de 1970 mostraban que la clientela radical no había votado por Allende en la elección presidencial. Como quiera que sea, si no se contaba con la mayoría el único camino para hacer viable el proceso era volver inmediatamente a la primera opción y buscar ciertos acuerdos con la DC. En ese momento ya era más difícil lograrlos porque el sectarismo naciente había comenzado a endurecer a la oposición progresista, pero todavía era posible, como lo manifestaron abiertamente varios dirigentes del PDC. Sin embargo la UP prefirió avanzar por el camino de los "resquicios legales", postergando indefinidamente el envío de proyectos de la ley respecto a materias tan importantes como la nacionalización de los bancos y la determinación de "las tres áreas de la economía."

Durante un tiempo, hasta comienzos de 1972, la UP pudo avanzar sorteando la barrera parlamentaria, pero poco a poco los problemas fueron aumentando y los "resquicios" se hicieron más estrechos. El diálogo iniciado en junio de ese año para llegar a un acuerdo en torno al problema de "las tres áreas", no prosperó debido a que en la DC se impuso el sector duro y en la UP hubo sectores que continuaron actuando por la vía de los hechos consumados. Desde entonces la dialéctica de la polarización no ha dejado de agudizarse. A la política de hechos consumados o de uso discriminado de las fuerzas de orden, el Parlamento ha respondido con la destitución de Ministros e Intendentes. El "enroque" ministerial (6), ha paliado sólo en parte los problemas que genera la rotativa ministerial. Por lo demás, ante esta maniobra, el Parlamento se ha negado a legislar sobre iniciativas del Ejecutivo, como en el caso del delito económico y más recientemente el problema del terrorismo. El sistema

político chileno, concebido para que exista un contrapeso entre los poderes del Estado, se ha deformado de tal modo que los poderes se han inmovilizado mutuamente, llevando al país a un "impasse".

Sin embargo, donde el Parlamento ha manifestado más evidentemente su poder ha sido en la asignación de fondos para el presupuesto nacional y para las leyes de reajuste. La falta de un financiamiento adecuado ha venido a sumarse a los enormes déficits de las empresas del área social, constituyéndose así en poderoso estímulo de las empresas del área social, constituyéndose así en poderoso estímulo para la inflación. Por su parte el alza de los precios, el deterioro general de la economía y en particular el deterioro de los ingresos de los asalariados, han debilitado terriblemente al Gobierno.

En fin, el Parlamento afianzó su legitimidad después de las elecciones de marzo (1973), de manera que la mayoría opositora podía justamente reivindicar la representación de la mayoría ciudadana. Como la UP jamás puso en duda la importancia de esa elección - lo que contribuyó a darle peso - no parecía muy sensato considerar al poder parlamentario como un "tigre de papel". Sin embargo muchos dirigentes políticos de izquierda consideraron que el éxito obtenido en esa elección era suficiente para seguir adelante sin cambiar de rumbo, que se podía "avanzar sin transar". Con todo, al cabo de pocos meses se percibió que era indispensable transar, y se buscó el apoyo ministerial de las Fuerzas Armadas. Pero entonces los militares ya habían sido impactados por las declaraciones opositoras en el sentido de que el Gobierno había caído en la ilegalidad, lo que no los inclinaba a colaborar, por decir lo menos. Por último, el reciente acuerdo de la Cámara de Diputados que declara enfáticamente que el Ejecutivo ha conculcado la Constitución y la Ley, ha puesto una vez más de manifiesto el poder del Parlamento: en la práctica está exigiendo al Gobierno que rectifique su política so pena de un bloqueo total, que abre las puertas naturalmente a una intervención militar. En política no hay mayor error que sobrevalorar la propia fuerza o mirar en menos la fuerza del adversario.

El Poder Judicial y la Contraloría

Dentro del equilibrio de poderes que caracteriza al sistema chileno el Poder Judicial juega un rol importante, que limita las atribuciones del Ejecutivo. A pesar de que es el Presidente de la República quien nombra a los magistrados, su elección está condicionada por la terna o quina que le propone el propio Poder Judicial. Es

por esto que los magistrados, y en particular la Corte Suprema, pueden constituirse en freno de un proceso revolucionario. De hecho, la Corte Suprema "puede declarar inaplicable a un caso particular un precepto legal que estima contrario a la Constitución. Cuando esto ocurre, si bien es cierto que el fallo sólo produce efectos entre los litigantes, en los hechos la disposición legal declarada inaplicable pierde valor jurídico". (7) Como la legalidad goza en el país de un alto grado de legitimidad, hasta el punto de convertirse a veces en un fetiche, la importancia de esos fallos es significativa; los conflictos suscitados entre el Gobierno y el poder judicial en torno a la aplicación de sanciones a las radios han sido una de sus manifestaciones más relevantes.

Los Tribunales, y en particular la Corte Suprema, se han caracterizado por su orientación conservadora, que en la práctica favorece a los sectores económicos más poderosos. Su tendencia a ceñirse a la letra de la ley, o a un "espíritu" ya sobrepasado, no puede menos de entrar en conflicto con un proceso revolucionario orientado a favorecer a los proletarios y a hacer de la movilización popular un arma de combate para conquistar una nueva legalidad. Pero en este plano, como en otros, ha surgido el problema de la mediación: con frecuencia el Gobierno ha negado la fuerza pública para hacer cumplir los fallos judiciales por el hecho de que serían afectados sus partidarios, reprimiendo en cambio con fuerza a sus adversarios. No se trata en esos casos de un conflicto directo entre el Poder Judicial y el proletariado, sino de la colisión entre las disposiciones de los Tribunales y los intereses partidarios. La confusión de planos, la identificación de la clase con el Partido, ha producido choques entre el Gobierno y el Poder Judicial que han puesto obstáculos en la "vía chilena".

En muy pocos países existen organismos semejantes a la Contraloría General de la República. Su función de fiscalizar la administración, que le permite no dar curso a los decretos que excedan - a su juicio - las atribuciones legales, la convierten en una institución tan importante que ha sido llamada "el cuarto poder del Estado". Aunque en los casos conflictivos el Gobierno puede imponer su criterio mediante "decretos de insistencia" (que llevan la firma de todos los Ministros), este procedimiento crea la imagen de ilegalidad y está sometido al juicio político del Congreso. La Contraloría puede pasar casi desapercibida en un gobierno de administración, pero cuando se pretende realizar cambios revolucionarios su rol fiscalizador puede convertirse en un freno importante. De hecho, la elección del camino de los "resquicios legales" ha provocado frecuentes roces entre el Gobierno y la Contraloría. En cambio, en otros casos,

como la nacionalización del cobre, que siguió un proceso legal en el Parlamento, la intervención de la Contraloría constituyó una colaboración con el proceso.

El papel de las Fuerzas Armadas.

Si la Contraloría es llamada "el cuarto poder" las Fuerzas Armadas podrían ser el quinto. Dentro del esquema de división formal de poderes, las Fuerzas Armadas no ocupan ningún lugar: se trata de una organización profesional, no deliverante, sujeta al poder Ejecutivo. Sin embargo, en la práctica su rol es tan importante que todo proceso revolucionario debe considerarlo como uno de los elementos fundamentales. La estrategia revolucionaria ha considerado tradicionalmente a las FF.AA. como el brazo armado de la burguesía y por lo tanto en sus planes siempre se incluía su división para lograr que al menos una parte de ellas apoyara la insurrección del proletariado.

Aunque ciertos sectores de la UP han tenido en consideración esta estrategia, el programa de Allende contaba más bien con su neutralidad e incluso con su apoyo al proceso de cambios revolucionarios. Se suponía - con razón - que la oficialidad no está ligada directamente a los intereses económicos capitalistas y que su posición de clase tiende a coincidir con los intereses de los sectores medios asalariados "no productivos". La colaboración o al menos la neutralidad de las FF.AA. eran perfectamente posibles dentro del cuadro de alianza de clases en que se estructuró la estrategia de la "vía chilena". En la práctica, el Gobierno ha tratado de atraerlos entregándoles ventajas económicas, honores y responsabilidades. Mientras la coyuntura económica fue favorable esta táctica tuvo éxito, y fue así como en el "paro de octubre" de 1972 las Fuerzas Armadas colaboraron con el Gobierno manteniendo el orden y cerrando el paso a los intentos de golpe. Pero el deterioro económico producido a partir del segundo año de gobierno afectó gravemente a estos sectores medios tanto en sus niveles de vida como en sus aspiraciones. Por otra parte, el uso creciente de los "resquicios legales" y de la "vía de los hechos consumados" provocado por la falta de diálogo entre el Ejecutivo y el Parlamento - fue enfriando las relaciones entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas: la ideología institucionalista de éstas, su orientación al orden y la disciplina, entraban en conflicto con las inorgánicas acciones de masas promovidas por ciertos sectores de la UP. Ciertos sectores de izquierda - que en la

práctica no han creído en la "vía chilena" - aparecían frente a las FF.AA. como promotores de una estrategia diferente de la que planteaba oficialmente el Gobierno. Esta duplicidad de estrategias tenía que desconcertar primero y alejar después a aquellos elementos militares más dispuestos a colaborar. Más aún, la estrategia de los que se autodenominaban "revolucionarios" y "socialistas" - por oposición al "reformismo" y al "centrismo" con que calificaban a los comunistas - tenía por objeto no la transformación del Estado actual, sino la utilización del Gobierno a fin de acumular fuerzas populares que permitieron un cambio radical del sistema político. Dentro de este cambio, naturalmente, las FF.AA. deberían perder su carácter autónomo y profesional y ponerse al servicio de la revolución proletaria. Para este tipo de estrategia era absurdo, por supuesto, pretender que se pudiera contar con algún grado de colaboración o neutralidad por parte de las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, la tradición no intervencionista de los uniformados, la gravedad misma de la situación económica y su conocimiento - que forma parte de la cultura política nacional - del apego del chileno a la legalidad y de la importancia de las fuerzas sociales en presencia, han contribuido sin duda a que no hayan caído hasta ahora en la tentación golpista.

En definitiva, la falta de coherencia en la aceptación de la "vía chilena" por parte de la UP, el mismo rechazo al camino del consenso que hizo alejarse progresivamente a la DC, ha sido el factor determinante en el distanciamiento producido entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas. Siendo prácticamente imposible en Chile un proceso revolucionario que no cuente al menos con la neutralidad de las Fuerzas Armadas, siendo imposible la organización de grupos armados paralelos capaces de hacerles frente, (especialmente ahora que se está aplicando masivamente la ley de control de armas), toda estrategia que provoque el distanciamiento de los uniformados parece condenada al fracaso y a la represión sangrienta.

El poder económico

Es evidente que por grande que sea en Chile la importancia del poder institucional, por mucho que los poderes del Estado gocen de una "legitimidad" que les otorga una autonomía relativa, la influencia del poder económico sigue siendo fundamental. Y no se trata simplemente del poder económico de la burguesía, tanto nacional como internacional, que constituye el adversario principal de la UP, sino también de la

fuerza económica del Estado y de los otros grupos o clases sociales.

La influencia del poder económico internacional sobre el proceso chileno se ha hecho sentir particularmente en el "bloqueo invisible" que los Estados Unidos han realizado respecto a los créditos solicitados por Chile. Sin embargo en otros aspectos, como la renegociación de la deuda externa y las relaciones comerciales, la política norteamericana ha sido flexible, de tal modo que no ha generado dificultades especiales al proceso. Los demás países capitalistas han mantenido líneas de cooperación bastante activas con el Gobierno marxista de Chile, conservando las relaciones tradicionales, de manera que no han hecho valer su poder económico para influir notablemente en el proceso. Los acuerdos con España, Francia y Japón referentes a la industria automotriz son significativos en esta materia. En cuanto a los países socialistas, su colaboración financiera y económica ha sido bastante limitada, de tal modo que su influencia tampoco se ha hecho sentir notablemente en la consolidación o aceleración del proceso. Se podría por lo tanto afirmar, en términos generales, que el poder económico internacional no ha tenido una influencia notable en el desarrollo del proceso chileno.

No ha sucedido lo mismo, evidentemente, en el caso de la burguesía nacional: ella ha empleado todo su poder económico - como podía preverse - para detener el avance hacia el socialismo. Su acción no se ha limitado a la suspensión de las inversiones - lo que debía darse por descontado - sino que se ha manifestado también en el desarrollo de la especulación y el mercado negro, contribuyendo a desquiciar la actividad económica nacional. La transformación del capitalismo industrial y agrario en capitalismo comercial especulativo parece no haber sido prevista por los dirigentes de la UP. Lo más notable ha sido que el aumento desorbitado de la demanda ha provocado la proliferación de actividades especulativas también en las capas medias y aun entre elementos de los sectores populares; paradójicamente, estos sectores, que deberían haber sido favorecidos con las transformaciones estructurales promovidas por la UP, han contribuido con su acción a minar la marcha de la economía, disminuir el poder de compra de los asalariados y debilitar la base de sustentación del Ejecutivo.

Pero es evidente que la crisis económica ha sido provocada también por las medidas económicas tomadas por el Gobierno y muy en particular por los déficits del fisco y de las empresas del área social. Sin ahondar en el análisis de la crisis económica, quisiéramos señalar que ella nos parece uno de los factores más determinantes en las dificultades que ha encontrado la "vía chilena": los desaciertos en la conducción y los

errores en la gestión han creado un caldo de cultivo capaz de alimentar toda clase de movimientos de protesta - políticos, gremiales o sindicales - que en otras circunstancias, podrían haber sido enfrentados sin problemas excesivos. Todo parece indicar que el Gobierno ha utilizado su poder económico para realizar transformaciones estructurales y extender su influencia política, pero no para mantener el proceso de producción y distribución en un cauce normal. Así, un Ministro de Economía afirmaba: "Lo que se plantea en la política económica es un problema de poder, es un problema de fuerzas sociales, de correlación de fuerzas, a la que tiene por lo tanto que subordinarse la política económica" (8) Pero esta subordinación de la política económica al problema del poder puede provocar, y de hecho ha provocado, la "revancha" de la economía: por un efecto de "boomerang" la crisis ha venido a golpear las bases del poder de la UP. En el caso de la producción agrícola esto es particularmente visible; así lo han observado algunos técnicos que han hecho un balance de la reforma agraria: "La rápida transformación hacia el socialismo en Chile es posible aunque persistan durante varios años muchas relaciones no socialistas en las áreas rurales. Pero es difícil de imaginar en el caso de que una escasez de alimentos tenga como resultado la pérdida de apoyo al programa del Gobierno por parte de la mayoría de los trabajadores urbanos organizados . . ." (9)

En fin, el peso del poder económico se ha hecho sentir también en forma importante en el control de los medios de comunicación de masas. Mientras el Gobierno ha utilizado no sólo su poder institucional, sino también su poder económico para avanzar en este terreno, los partidos de oposición han movilizado su poder económico para sostener sus órganos de prensa, radio y televisión. Cada grupo, cada Partido, de uno y otro bando, controla ciertas empresas y medios de comunicación, de tal modo que se ha llegado a hablar de nuevos "grupos" económico-políticos, semejantes a los que se conocen a nivel del capitalismo internacional. En este aspecto, tal vez más que en ningún otro, se observa el problema de la mediación: son los partidos políticos quienes, utilizando su poder económico, controlan la opinión pública, la opinión de los trabajadores. Los intereses económicos quedan subordinados a la lucha política, a la pugna por el poder.

El poder de las "fuerzas sociales"

Dentro del cuadro de la lucha por el poder en la transición al socialismo que hemos venido presentando falta uno de los elementos fundamentales. Ya hemos señalado que en el proceso chileno nos parece que es el poder institucional el más importante, pero también creemos que sin el apoyo de las fuerzas sociales organizadas el poder institucional sería muy débil, casi puramente formal. En los casos de la reforma agraria y de la creación del área social esto ha sido patente: gracias a la colaboración de los campesinos el Gobierno ha podido exceder en muchos casos los límites legales o proceder a expropiaciones claramente injustas; mediante el apoyo de los obreros, ha podido hacer valer "resquicios legales" para estatizar o intervenir empresas. Por eso se ha llegado a afirmar que "el estado de derecho que rigió en Chile hasta 1970, en la parte en que tal estado de derecho se aplica a la propiedad privada, viene siendo sustituido por una legalidad distinta: la legalidad que otorga validez a la propiedad solamente por el trabajo, sea del propietario directamente o del propietario con el apoyo de sus trabajadores" (10).

Para que los ciudadanos de un país constituyan fuerzas sociales, para que conquisten una cuota de poder, deben estar organizados. El poder político es función de la organización. Entre las organizaciones sociales que han intervenido en el proceso chileno, las más importantes han sido ciertamente los sindicatos y gremios. Desde la llegada al Gobierno de la Unidad Popular el número de trabajadores organizados sindicalmente ha aumentado en forma notable: de 800.000 a 1.000.000 - según algunas estimaciones - cifra ésta que representa el aproximadamente 30% de la fuerza de trabajo. El movimiento sindical, especialmente a través de la Central Unica de Trabajadores, ha constituido sin duda el principal apoyo del Gobierno, tanto para avanzar en las reformas estructurales como para defener los intentos golpistas. Sin embargo, la crisis económica y la politización excesiva de la vida sindical han ido gastando y desmovilizando a las fuerzas adictas a la UP. Los Comités de Producción y los Consejos de administración creados en las empresas del área social sólo pueden ser instrumentos de participación en la medida en que las reivindicaciones sindicales sean satisfechas razonablemente. Con todo, los intentos golpistas de la derecha y en particular el llamado "tancazo" del 29 de junio (1973) han revitalizado a estas fuerzas sociales y han hecho que otras como los "cordones industriales" se desarrollen notablemente.

Sin embargo, paralelamente al crecimiento del movimiento sindical obrero y campesino se ha producido el robustecimiento de las organizaciones "gremiales" provocado por la "proletarización de la clase media". "Por proletarización se entiende en este caso el desarrollo del sindicalismo en sectores de clase media, que en esta forma adoptan los métodos de lucha propios de la clase obrera y adquieren un cierto sentido de clase que les otorga identidad propia y los dota de capacidad para adelantar la defensa de sus intereses." Contrariamente a lo previsto en la estrategia de la UP, los sectores medios han ido quitando cada vez más su apoyo al Gobierno. Los pequeños propietarios, y en particular los transportistas y los comerciantes, se han visto atacados y/o amenazados por la política de estatización. Como sus medios de producción son accionados por los mismos propietarios o por personas estrechamente ligadas a ellos, han contado con un poder social y político considerable, muy superior al de los latifundistas o grandes industriales. Su fuerza ha llegado a ser tal que han podido dejar al país semi-paralizado. Solamente una política de apoyo y estímulo a los pequeños propietarios así como una clara delimitación del área social habría hecho posible la colaboración, o al menos la neutralidad, de estos sectores medios, que amenazan con hacer fracasar la "vía chilena".

En fin, la organización y movilización popular ha sido especialmente importante en el plano del consumo; los Centros de Madres y las Juntas de Vecinos han adquirido nueva vida en la lucha por el abastecimiento de productos esenciales, al mismo tiempo que nacían y se desarrollaban - promovidas por el Gobierno - las Juntas de Abastecimientos y precios (JAP). En la medida en que estas organizaciones constituyen un instrumento de defensa de los consumidores contra la especulación y el mercado negro, se convierten en base de apoyo para el Gobierno y en una manifestación importante de un socialismo de participación; en la medida en que se estilizan como organismos de proselitismo político corren el riesgo de transformarse en focos de descontento y de presión. Pero hay algo aun más importante: por más que se supere la politización, estas organizaciones populares pueden llegar a tener un poder explosivo si ni siquiera se alcanza a asegurar el abastecimiento de los bienes esenciales de consumo. Sin un mínimo de eficiencia, toda la fuerza del poder popular se convierte en freno de la transición al socialismo.

Una extraña lucha de clases.

A través de las páginas de este capítulo en que hemos analizado las diversas facetas que reviste el problema central de la transición al socialismo han ido apareciendo ciertos puntos relevantes. En primer lugar, creemos que la eficiencia no es un tema secundario en el camino al socialismo. Un gobierno puede legitimarse por sus transformaciones revolucionarias, puede pedir sacrificios durante un período, pero no contará con un amplio y dinámico apoyo popular si no va dando respuesta a las necesidades de las grandes masas. La utopía de la sociedad sin clases, de la sociedad de la abundancia, constituye sin duda un poderoso motor de la revolución; pero hace falta también que la nueva sociedad vaya construyéndose "aquí y ahora", sobre todo si el pueblo está llamado a juzgar a través de un proceso electoral.

En este sentido, es importante también que el adversario principal sea claramente identificado y que se busque la colaboración o la neutralidad de los otros sectores. Todo maniqueísmo que tienda a calificar a los adversarios de absolutamente "malos" constituye una simplificación desastrosa, opuesta a la ya famosa consigna: "la primera tarea revolucionaria es reunir fuerzas." El proletariado sólo puede conseguir el apoyo de otros sectores en la medida en que se asegure a éstos, respetando las etapas del proceso, que sus intereses serán defendidos.

Por otra parte, la constatación de que el poder institucional no es un mero poder opresor debe presidir los análisis y la acción. Las luchas de los trabajadores están presentes en la institucionalidad chilena: sólo desarrollando sus mejores elementos se puede avanzar por un camino democrático. Cualquier intento de dar una gravitación tal al poder de masas que ponga en cuestión las instituciones hará que éstas se cierren y bloqueen totalmente el camino al socialismo.

Por último, es evidente que la transición al socialismo implica una lucha de clases, pero sería absurdo identificar la lucha de clases y la lucha política. Por más ligadas que están, son cualitativamente diferentes. Tanto es así, que los grupos políticos emergentes pueden llegar a convertirse en nuevas "clases dominantes". Sólo un permanente esfuerzo para discernir los verdaderos intereses de las clases oprimidas, más allá de la ambición de poder que caracteriza a los partidos políticos, podrá hacer que la transición al socialismo se convierta en un verdadero camino de liberación.

N O T A S

- (1) Theotonio dos Santos, "Problemas de la transición al socialismo y la experiencia chilena", in L. Basso et alii "Transición al socialismo y experiencia chilena", CESO-CEREN - PLA, Santiago, 1972, p. 186.
- (2) Fernando Castillo, Rafael Echeverría, Jorge Larraín, Las masas, el Estado y el problema del poder en Chile, Cuadernos de la realidad nacional, N° 16, abril 1973, p. 67.
- (3) José Rodríguez Elizondo, Revista de la U.T.E., N° 4, citado por José Antonio Viera-Gallo, Problemática Institucional de la experiencia chilena, en Lelio Basso et al. "Transición al socialismo y experiencia chilena, CESO - CEREN - PLA, Santiago, 1972, p. 80.
- (4) F. Castillo et al., op. cit., p. 24
- (5) Jorge Insunza, "Nuevos Problemas tácticos" en revista Principios. Cit. por VIERA-GALLO op. cit., p. 81.
- (6) Así se ha llamado la designación de un Ministro destituido en una nueva cartera, intercambiando sus funciones con otro miembro del Gabinete.
- (7) VIERA-GALLO, op. cit., p. 91.
- (8) Pedro Vuskovic, La experiencia chilena: problemas económicos, in Lelio Basso, Transición ... op. cit., p. 101.
- (9) Solon Barraclough - Almino Affonso, Diagnóstico de la reforma agraria chilena, Cuadernos de la Realidad Nacional, N° 16, abril 1973, p. 76.
- (10) José Vera, Moralejas del paro de octubre: propiedad real y propiedad simbólica, in Panorama Económico, N° 275, febrero 1973, p. 20.
- (11) José Vera, op. cit., p. 22.

LA ELECCION DE ALLENDE

El 4 de septiembre de 1970 un marxista es elegido en Chile Presidente de la República. El acontecimiento, sin precedentes en la historia del mundo occidental, provoca cierta conmoción a nivel internacional: se plantea una vez más el problema de la división del mundo en dos bloques. Al interior del país, las reacciones van del terror de la extrema derecha a la incredulidad de la extrema izquierda.

Allende llegó al poder como candidato de la Unidad Popular (UP), formada por su propio partido (socialista), los partidos comunista y radical, así como por otros partidos muy pequeños, entre los cuales se contaba una fracción disidente de la democracia cristiana (DC).

A partir de los datos de las elecciones parlamentarias de 1969, se podía suponer que estas fuerzas darían a Allende alrededor de un 37% de los votos; de hecho, gana con 36,3%, contra 34,8% de la derecha y 27,8% del centro (DC). Ya en 1956 Allende había estado a punto de conquistar la presidencia con 28,9% de los votos (socialistas y comunistas), contra 31,6% del candidato derechista. Y en 1964 - cuando triunfó el demócrata cristiano Frei - había recibido el 38,6% de los sufragios. En otros términos, no se trataba de una "sorpresa de la historia", como afirmara Régis Debray.

Si uno se remonta todavía más lejos, habría que recordar que el partido comunista chileno fue fundado en 1922 y que el partido socialista (inspirado en Marx y Lenin) lo fue en 1933; estos dos partidos constituyeron el Frente Popular en 1938 (bajo la dirección del partido radical). En 1941 habían alcanzado ya un 30% de los votos. La unidad socialista comunista - que desde 1957 se institucionalizó en el FRAP (Frente de acción popular) - tiene por lo tanto en Chile una larga historia.

Además del apoyo de los partidos marxistas, el triunfo de Allende se debió a la alianza del partido radical, aunque su ala más conservadora se había desprendido antes de 1970. Gastado por su alianza con la derecha durante el período 1958-64, sobrepasado por la DC. en cuanto representante de la clase media, dejado a un lado

* N.B. Este texto fue escrito en diciembre de 1972 y corresponde a la introducción de un artículo titulado "L'expérience chilienne face aux élections", publicado en la Revista Etudes (Paris), en febrero de 1973.

durante el gobierno de Frei (1964-70) a causa del "purismo" demócrata-cristiano, este partido laico que se proclamaba social-demócrata, no podía sino apoyar el programa de la U.P. En fin, otros partidos pequeños, tanto neo-marxistas como social-demócratas, aportaron algunos votos preciosos que hicieron posible la victoria de Allende.

La presencia de los partidos no-marxistas al interior de la UP. fue el fruto de una estrategia elaborada por el partido comunista, que sigue de cerca las orientaciones de Moscú. Se trataba de proponer un programa anti-imperialista, anti-latifundista y anti-monomólica, que pudiera unir a todas las fuerzas dispuestas a combatir la burguesía nacional e internacional, así como a la oligarquía de los grandes propietarios. No se trataba por lo tanto de un programa marxista, ni siquiera de un proyecto socialista, sino de un proceso de reformas estructurales que permitieron avanzar hacia el socialismo. Se planteaban tres sistemas de propiedad en la economía: uno de propiedad "social", otro de propiedad mixta y un tercero de propiedad privada. Allende no vacilaba en afirmar que sólo un 10% de la población sería afectado por su programa. Más concretamente, se daban garantías a los pequeños y medianos empresarios, comerciantes y agricultores: se buscaba una alianza entre el proletariado y las clases medias.

Sin embargo, la fuerza de esta alianza habría sido insuficiente si el adversario hubiera formado un bloque, como en 1964. ¿Por qué la derecha (el Partido Nacional, la Democracia Radical y los Independientes) no renunció a favor de Tomic, que pretendía suceder a Frei? Por una parte, porque había encontrado un excelente candidato en la persona de Alessandri, presidente de 1958 a 1964. Sobre él podía proyectar la tendencia a la personalización del poder, tan frecuente en América Latina; en él se encarnaba un deseo tanto de orden y seguridad como de alojamiento de una politización extrema, que se había desarrollado debido a las reformas introducidas durante la administración de Frei. Por otra parte, aunque las reformas estructurales emprendidas durante el período precedente no habían sido de gran envergadura, la derecha había reaccionado en forma violenta. En fin, las bases demócratacristianas, que no estaban satisfechas con el reformismo de Frei, apoyaron un programa anticapitalista no muy diferente del modelo propuesto por los marxistas. En estas condiciones la derecha no podía renunciar a un candidato que (según ella) podía triunfar, para apoyar a un candidato "socialista".

La Llegada al poder

En Chile, aunque no existe una "segunda vuelta", no basta obtener la mayoría relativa de los votos populares para ganar una elección presidencial: el Parlamento tiene derecho a elegir entre los que han obtenido los dos primeros lugares. Después de las elecciones, la derecha - espantada por la elección de un marxista - halló un medio jurídico que habría podido bloquearle el camino: pidió a la D.C. que votara en el Parlamento por Alessandri; éste renunciaría inmediatamente, a fin de que pudieran tener lugar nuevas elecciones, lo que habría dejado abierto el camino a un candidato demócratacristiano. La operación era inatacable desde el punto de vista jurídico-político.

Sin embargo, la madurez política de los dirigentes demócrata-cristianos les hizo comprender que si se impedía la llegada de Allende al poder se lanzaría al país a un caos, ya que según la tradición chilena el Parlamento había confirmado siempre al candidato que lograba la mayoría de los votos: más de un tercio de la población no habría creído en las elecciones; la mayor de la clase obrera urbana habría elegido el camino de la guerrilla urbana, que propiciaban algunos dirigentes socialistas. Por otra parte, la tentación de aceptar era grande para la D.C.: no se trataba solamente de asegurarse un nuevo período presidencial, sino también de evitar el riesgo de ver barrida la democracia en Chile, ya que los marxistas chilenos no habían abandonado la tesis de la dictadura del proletariado. A pesar de las presiones de los norteamericanos, los demócratacristianos se contentaron con condicionar su apoyo a Allende a un "estatuto de garantías constitucionales", a fin de preservar el ejercicio de ciertas "libertades": información, elecciones, reunión, etc.

La U.P. y la D.C. alcanzaron su más alto grado de unión cuando Allende fue elegido por el Parlamento. En ese momento, dirigentes de la D.C. propusieron al nuevo Presidente formar parte del Gabinete, lo que habría dado a la coalición una amplia mayoría parlamentaria. Los marxistas no quisieron aceptar esta alianza porque, aunque el programa de Tomić se asemejaba al de Allende, temían que la poderosa ala derecha de la D.C. no compartiera verdaderamente este programa: ella estaría demasiado ligada a los intereses de la clase media y aun a los del sector más progresista de la burguesía. A partir de este rechazo, la D.C. se orientará cada vez más hacia la derecha. Más adelante volveremos a este punto.

DE LA REFORMA INDUSTRIAL AL CONFLICTO DE PODERES

El escándalo levantado por el descubrimiento de los documentos secretos de la ITT y la presencia en Chile de los delegados a la UNCTAD III han dejado en segundo plano el grave conflicto que desde hace varios meses opone al Ejecutivo y al Parlamento.

Hechos

Junto con la aceleración del proceso de Reforma Agraria, el Gobierno se ha propuesto la realización de una Reforma Industrial que permita un cambio estructural en la propiedad de los medios de producción; más concretamente, la creación de las llamadas áreas social y mixta. Careciendo de una ley - equivalente a la ley de Reforma Agraria dictada durante el gobierno de Frei - se ha procedido a utilizar mecanismos legales vigentes, especialmente el Decreto-Ley 520, del 30 de agosto de 1932 (1) y la compra de acciones por parte de la CORFO.

El Partido Nacional reaccionó violentamente contra esta política y en septiembre del año pasado se propuso acusar constitucionalmente al Ministro de Economía, P. Vuskovic. El Partido Demócratacristiano (PDC) no se plegó a la acusación, bajo el compromiso del Gobierno de congelar las estatizaciones y enviar al Parlamento un proyecto de ley sobre las tres áreas.

Como este proyecto de ley no llegó, el PDC elaboró un proyecto de Reforma Constitucional, presentado por los senadores Hamilton y Fuentealba, que fue aprobado por el Congreso Pleno el 20 de febrero de este año. Lo esencial de esta Reforma se reduce a dos puntos: 1º) La creación del área social de la economía debería hacerse por medio de nuevas leyes, excluyéndose cualquiera interpretación o aplicación de leyes anteriores en el sentido de permitir al Estado "nacionalizar, estatificar o incorporar a las áreas social o mixta empresas productoras de bienes o servicios o derechos en ellas". 2º) Aparte de las empresas que producen bienes o servicios estratégicos o de utilidad pública - cuya gestión quedaría en manos del Estado - las demás empresas estarían sometidas a la gestión de los trabajadores.

Posteriormente los demócratacristianos han aclarado que estas empresas no serían "propiedad" de los trabajadores, sino del Estado, y que los excedentes que produjeran serían destinados a tres fines: a un Fondo de las "empresas de trabajadores" (una segunda CORFO), a la capitalización de las propias empresas y a beneficio de los trabajadores que laboran en ellas.

Por su parte el Gobierno siguió adelante con su política de creación del área social: el 15 de febrero la CORFO abrió un poder comprador para las acciones de 91 grandes empresas. La compra de estas acciones permitiría al Estado controlar el 55% de la producción industrial, lo que sumado al 25% que ya está en sus manos extendería su control al 80% de la industria nacional. Además, se anunció un veto presidencial a la Reforma Fuentealba-Hamilton y se afirmó que este veto sólo podría ser rechazado por los dos tercios del Congreso; en caso de que el Parlamento no admitiera esta interpretación de la Constitución, el conflicto debería ser llevado al Tribunal Constitucional.

La oposición protestó enérgicamente, afirmando que basta la mayoría de los parlamentarios en ejercicio para rechazar los vetos presidenciales y negando la competencia del Tribunal Constitucional para dirimir el litigio; según la oposición, al Presidente no le quedaría más alternativa que promulgar la Reforma Constitucional o llamar a un plebiscito.

Estamos a comienzo de marzo; se multiplican las polémicas, foros y artículos en que los juristas defienden los argumentos de cada una de las partes. Paralelamente se intenta llegar a un acuerdo directo, estableciéndose contactos entre el Gobierno, representado por el Ministro de Justicia, miembro del Partido de Izquierda Radical (PIR), y la democracia cristiana. Las conversaciones dan fruto y se llega a un principio de acuerdo que permite establecer ciertos puntos comunes: 1º) El traspaso de las empresas al área social se haría en adelante por nuevas leyes, generales o especiales, pero no se derogaría el Decreto-Ley 520; con todo, la aplicación de este decreto debería ser transitoria y los afectados podrían apelar ante un tribunal. 2º) Las empresas ya requisadas o intervenidas no volverían a su antiguo estatus. 3º) Se crearían "empresas de trabajadores", distintas de las estatales. El desacuerdo subsistía, sin embargo, en torno a la magnitud de importancia que tendrían estas empresas de trabajadores y en cuanto a la posibilidad de que la CORFO pudiera conservar sus atribuciones para comprar acciones. El PDC se manifestaba incluso dispuesto a aceptar este último punto, a condición de que todas las empresas compradas por la CORFO pasaran a ser empresas de autogestión.

Este principio de acuerdo no fue ratificado por el Presidente ni por la directiva de la Unidad Popular. Poco después, a comienzos de abril, el PIR se retira del Gobierno y de la Unidad Popular, señalando que está dispuesto a seguir apoyando el programa de Allende con tal que sea realizado por medio de la ley.

Hasta aquí una breve síntesis de los hechos, necesaria para extraer lo fundamental de entre la maraña de las informaciones cotidianas.

Reflexiones

A través de este conflicto institucional se han ido precisando dos concepciones del socialismo, y de la vía para llegar a establecerlo. A pesar de que ni la ideología ni la práctica del gobierno de Frei hayan sido "socialistas", no se puede excluir la posibilidad de una evolución de la doctrina demócratacristiana en Chile, que no busca ya una "tercera vía" - en la cual la propiedad privada de los medios de producción conservarían un rol relevante - sino una forma peculiar de socialismo. Esto se caracterizaría fundamentalmente por la descentralización, antídoto contra la burocracia, y por la participación creciente de los trabajadores en la gestión de las empresas. Este tipo de socialismo evitaría la formación de un Estado omnipotente, rígido y opresor; el rol del Estado, aunque importante, se limitaría a garantizar el bien común por medio de la planificación general y de los mecanismos de control. La forma de llegar a esa participación sería el traspaso inmediato de la gestión empresarial de sus antiguos dueños a los actuales trabajadores.

Frente a esta concepción se distingue el tipo de socialismo que promueve el Gobierno. Según la Unidad Popular las empresas de autogestión no transforman radicalmente la mentalidad capitalista, ya que la movilización de los trabajadores se logra estimulando en ellos el afán de obtener más beneficios económicos. La tendencia a la maximización de los beneficios podría además tener graves consecuencias sociales, como el aumento de la cesantía. En fin, en caso de que se estableciera este tipo de empresas - teniendo en cuenta que difícilmente se podrá prescindir de una cierta dosis de estímulos materiales - la Unidad Popular considera que convendría hacerlo sólo cuando se hubiera terminado de cambiar la estructura capitalista de la propiedad privada de los medios de producción. De no procederse así, la extraordinaria flexibilidad del capitalismo podría hacer caer a estas empresas en todos los vicios de la economía de mercado. Existiría, por lo tanto, una etapa intermedia en la cual la gestión estaría principalmente a cargo del Estado. Eso no impediría fomentar desde ya mecanismos de participación en la gestión que fuera expresión de las exigencias de la clase trabajadora, de su deseo de contribuir a la creación y al control en la producción de bienes y servicios.

Sin embargo, más allá de estas dos concepciones del socialismo, este conflicto permite detectar una dura lucha por el control del poder político. Los demócratacristianos estarían dispuestos a admitir que en Chile la concentración del poder económico

en manos del Estado podría no traer consigo características tan opresoras como las que se han observado en ciertos regímenes socialistas, dados los controles institucionales a que está sometido el Estado chileno. Pero temen que el control del poder económico permita al Gobierno el control de la totalidad del poder político, lo que llevaría a su partido a la desaparición. De hecho, aunque no creen que en Chile pueda establecerse un régimen de Partido único, los partidos marxistas de la Unidad Popular no han ocultado que para ellos el respeto a la legalidad burguesa y la renuncia a la dictadura del proletariado constituyen sólo una opción táctica. Al exigir que el traspaso de las empresas al área social se haga por medio de nuevas leyes, el PDC se asegura el control de una parte del poder político, ya que en el Parlamento la oposición es mayoritaria. Igualmente, al rechazar la gestión estatal y propiciar empresas de autogestión, los demócratacristianos intentan evitar que el Gobierno - a través del aumento de su poder económico - consolide su poder político. El PDC puede dudar de la factibilidad de su proyecto socialista en alianza con la derecha, pero ve en esa alianza una garantía de subsistencia.

Para la Unidad Popular las vías legales ya vigentes que permiten la Reforma Industrial son un medio importante para la realización de su programa; sólo renunciaría a ellas si nuevas leyes le abrieran nuevos caminos. Los demócratacristianos prometen apoyar esas leyes, así como apoyaron la nacionalización del cobre. Pero el Gobierno considera que en el caso del cobre existía ya un consenso nacional que aun no existe en el plano de lo que hemos llamado Reforma Industrial; la democracia cristiana podría, por lo tanto, bloquear los proyectos de la Unidad Popular en el Parlamento insistiendo en que el área social esté formada fundamentalmente por empresas de autogestión. Además el Gobierno tiene conciencia de las posibilidades políticas que le abre el control estatal del poder económico: no se trata sólo de orientar la producción, sino también de que al estatificar las industrias los representantes de la Unidad Popular se consolidan en ellas, llegando a ocupar puestos claves que les aseguran un gran influjo político. Sin embargo estas posibilidades de influencia política podrían provocar, si no son bien administradas, reacciones adversas de parte de la clase dirigida.

En fin, el conflicto en torno a las tres áreas ha relevado las debilidades, y tal vez las incoherencias, de la Reforma Constitucional de 1970. Sin entrar a tomar posición frente a la interpretación de los textos - tarea propia de expertos en Derecho Constitucional - se puede señalar tres grandes orientaciones de esa Reforma: dar mayores poderes al Presidente de la República, facilitar la manifestación de la voluntad popular a

través del plebiscito y crear un Tribunal que dirima los conflictos entre el Parlamento y el Ejecutivo en una materia tan importante como la forma de cambiar la Carta Fundamental. Por otra parte, si la tesis del Gobierno fuera válida, el llamado a plebiscito sería sumamente raro: sólo se daría si el Ejecutivo no contara con el apoyo de un tercio del Congreso y en cambio contara con la mayoría absoluta del electorado.

Especulaciones

Ante la gravedad del conflicto la opinión pública se pregunta si existe algún camino de salida. Hasta se ha llegado a mencionar la posibilidad de una guerra civil, como la que terminó con el régimen de Balmaceda en 1891.

Nos parece que pronosticar una guerra civil es promover una alarma injustificada. Este tipo de enfrentamiento no se puede concebir en Chile sin una intervención de las Fuerzas Armadas que tomaran partido, divididas, por uno y otro bando. Pero la tradición y la conciencia profesional de nuestro Ejército hacen poco verosímil esta alternativa. Es cierto que los militares tienen la misión de velar por el cumplimiento de la Constitución, pero como ambas partes han dado buenos argumentos en su favor y los militares no son peritos en Derecho Constitucional, difícilmente podrían sentirse justificados para imponer un determinado punto de vista.

Se ha mencionado también la posibilidad de que el Parlamento insista en la obligación del Presidente de promulgar la Reforma o llamar a plebiscito; si el Presidente no tomara una de estas dos alternativas, el Parlamento podría entablar una acusación constitucional contra él. Pero esta acusación sólo podría prosperar si consiguiera el apoyo de los dos tercios del Congreso, lo que en la actualidad es imposible. Además, el Ejecutivo podría retrucar acusando a su vez al Parlamento de salirse de la Constitución. El resultado de esta batalla de acusaciones mutuas sería probablemente una pérdida de legitimidad de ambos Poderes, lo que abriría el camino a soluciones aventureras y antidemocráticas, que no convienen a ninguna de las dos partes.

Es evidente que si el Gobierno llamara a plebiscito en torno a la Reforma Constitucional estaría aceptando la tesis de la oposición y tendría las manos atadas para el resto de su mandato. Ante la insistencia de la oposición, segura de contar con la mayoría del electorado, para que de una u otra forma se recurra al plebiscito, el Presidente ha anunciado que lo convocaría para que el pueblo se pronuncie sobre la disolución del Congreso. El "agregado" que algunos políticos de oposición pretenderían

hacer en el sentido de que, en caso de perder el plebiscito, el Presidente deba renunciar, carece de fundamento y tendría sin duda pocas posibilidades de ser incluido. En todo caso ha pocas dudas de que un plebiscito en las actuales circunstancias favorecería a la oposición; los resultados de la elección de O'Higgins y Colchagua son significativos al respecto; de una leve mayoría en las elecciones de abril de 1970, la Unidad Popular pasó al 46,4% de la votación. El Gobierno pudo haber realizado con éxito un plebiscito inmediatamente después de las elecciones de 1970; en ese momento actuaba a su favor la "dinámica del triunfo". Más adelante cualquiera podía prever que el "desgaste del poder" intervendría, como en los gobiernos anteriores, minando las posibilidades de la Unidad Popular. Esto lleva a pensar que el Gobierno no ganaría nada con llamar a plebiscito, y que anunciarlo sin ponerlo en práctica sólo contribuye a una pérdida de prestigio. Por su parte la oposición, consciente de su poder electoral, no cesará sin duda de insistir en que se debe consultar al pueblo; logrará así, si no un plebiscito, al menos una vía de asedio permanente al Gobierno y cierto aumento de prestigio ante la opinión pública.

Nuestra opinión - ya que estamos al nivel de las especulaciones - es que el conflicto de poderes permanecerá sin solución, en suspenso, y que no habrá más plebiscito que las elecciones parlamentarias, sea que se realicen en marzo de 1973, sea que se adelanten, como proponen algunos personeros de la oposición. Por otra parte, para contribuir a la solución del conflicto, el Gobierno podría enviar al Parlamento - como ya lo anunció en septiembre del año pasado - un proyecto de ley de Reforma Industrial, sin renunciar a los mecanismos legales vigentes que permiten el traspaso de las empresas al área social o mixta. Contando con el veto y el "tercio constitucional" en el Parlamento, el Presidente podría conseguir la aprobación de una ley que no sea incoherente con su programa y le permita recuperar el apoyo de los grupos que propugnan un socialismo "democrático", evitando así posibles intervenciones golpistas o aventureras.

Mayo 1972

NOTAS

- (1) Cf. Eduardo Novoa Monreal, "Vías legales para avanzar hacia el socialismo", Mensaje, nº 197, marzo-abril 1971, pp. 84-90.

TENSIONES EN LA UNIDAD POPULAR

El 12 de mayo murió en Concepción el estudiante de 17 años Eladio Caamaño, militante del MIR. No fue un accidente más, sino el resultado de un conflicto que tiene hondas raíces.

Antecedentes inmediatos

Los partidos de la oposición habían decidido a comienzos de mayo realizar una marcha de protesta en Concepción. Representantes de la Unidad Popular y del MIR se propusieron realizar otras dos marchas el mismo día, "paramedir fuerzas", aunque posteriormente el MIR prefirió integrarse a la manifestación de la UP. Entretanto llegaron a la Intendencia informes señalando la existencia de preparativos para un enfrentamiento directo entre la ultra-izquierda y la ultra-derecha: laques, piedras, etc. Con anticipación, el Intendente suspendió la autorización de la marcha de la UP y a última hora el Presidente de la República pidió a los partidos políticos de oposición que no movilizaran a su gente; las marchas podrían realizarse posteriormente por separado. Los dirigentes políticos "no tuvieron tiempo" (¡ni siquiera el MIR y la UP!) para controlar la situación: grupos de oposición marcharon hacia la sede del PDC, mientras los partidarios del Gobierno (excepto el PC) y el MIR se reunían en la Ciudad Universitaria. La policía intervino para evitar los choques, reprimiendo duramente a los más exaltados. Hubo heridos y un muerto. Ante estos hechos las directivas regionales del PS, PR, MAPU e IC publicaron un violento manifiesto contra el Intendente y contra el PC.

De Concepción al "cónclave"

Aunque las directivas nacionales de los demás partidos desautorizaron el manifiesto y el Presidente de la República confirmó en su cargo al Intendente, se temió que este conflicto regional entre los partidos de Gobierno pudiera extenderse a todo el país. Se propuso entonces la realización de una reunión política de alto nivel - que la prensa llamó "conclave" - para analizar el camino recorrido y trazar líneas para el futuro.

Plantear la posibilidad de que el conflicto interno de la UP pudiera extenderse a todo el país significaba reconocer que se estaba en presencia de dos estrategias y de dos tácticas opuestas. El PC apoyado generalmente por el PR y el API, insistía en la necesidad

de cumplir el programa de la Unidad Popular respetando la legalidad y omitiendo acciones aventureras y oportunistas. Sectores del PS y de la IC - alentados sin duda por los éxitos del MIR - se proponían en cambio acelerar el proceso revolucionario mediante tomas de predios agrícolas, ocupaciones de industrias, de caminos, etc. Los comunistas insistían en que una de las cualidades fundamentales de un revolucionario y de un marxista debe ser el realismo: de nada sirve el voluntarismo si no se dan las condiciones objetivas para que un proceso de cambio avance. Sus compañeros de ruta ponían el énfasis en el valor de la movilización popular, condición indispensable para realizar una revolución social. Se podría pensar que se repite hoy, en otras circunstancias, la polémica entre Lenin y Rosa Luxemburgo sobre "centralismo" y "espontaneismo" en la lucha revolucionaria. Esta subdivisión de la UP no incluye, ciertamente muchos matices, imposibles de presentar en este comentario. La posición del MAPU es significativa al respecto, mientras la directiva y las bases disciplinadas se habían mantenido dentro del programa del Gobierno, ciertos grupos marginales o disidentes adoptaban prácticas "voluntaristas".

Pero además de las diferencias estratégico-tácticas, la UP se hallaba dividida en su posición frente al MIR. Mientras el PC considera al MIR como "adversario objetivo", los grupos voluntaristas tendían a considerarlo como aliado o amigo. Para los comunistas el MIR es un heredero de Bakunin, es un movimiento anarquista de esos que surgen y se agotan rápidamente, logrando éxitos ocasionales brillantes, pero entorpeciendo - a largo plazo - el proceso de cambios. El PC se opone a las acciones represivas contra el MIR porque está consciente de que esto provocaría fuertes protestas en numerosos grupos revolucionarios. Sin embargo considera que el MIR sirve objetivamente a los intereses de la derecha; una prueba de ello sería que El Mercurio se ha convertido en el mejor "propagandista" de la ultra-izquierda. Más aún, la simplificación mercurial tiende a culpar al PC de todos los desbordes extra-legales. Su si-logismo parece ser este: el Gobierno, al no reprimir, tolera las acciones ilegales. La prensa de derecha logra así utilizar toda la carga afectiva existente en el público contra el "comunismo", fruto de recuerdos del stalinismo, de años de propaganda norteamericana y de varias "campañas del terror". Esta prensa no obtendría sin duda el mismo impacto si pretendiera responsabilizar al Presidente de la República, ya que la función del Jefe de la Nación ha sido tradicionalmente mirada con respeto y afecto por los chilenos.

Los grupos voluntaristas de la UP consideran que el MIR no puede ser calificado como adversario en la misma categoría de la ultra-derecha, y conciben posibles acciones - conjuntas con ellos. Si bien no comparten su táctica de promover en Chile la revolución armada, participan de su estrategia de poner énfasis en la movilización popular más que en las organizaciones centralizadas y burocráticas. El resultado objetivo de la acción del MIR - según ellos - ha sido una benéfica puesta en evidencia de los errores de la UP y - la aceleración del proceso revolucionario.

¿Consolidar o avanzar?

Las diferencias estratégicas entre el PC y los grupos más "voluntaristas" de la UP han cristalizado en el dilema planteado por estos: "consolidar o avanzar". Como la transición al socialismo está recién iniciada en Chile, no se podría comenzar la etapa de - consolidación; no quedaría más alternativa que "avanzar".

Para el PC la frase del subtítulo es un falso dilema, ya que no se trata de términos incompatibles. Hay que seguir avanzando dentro del programa de la UP, pero es indispensable consolidar lo realizado, asimilar el avance. Avanzar dentro del programa significa luchar preponderantemente contra los adversarios principales, ya que "sería funesto seguir ampliando el número de los enemigos". En efecto, las transgresiones al programa de la UP (tomas y ocupaciones de pequeños predios e industrias y hasta de un restaurant) convertían en enemigos del Gobierno no sólo a los latifundistas y grandes empresarios - lo que - es inevitable - sino también a numerosos pequeños y medianos agricultores, la cantidad - de pequeños y medianos comerciantes e industriales. Asimilar el avance significa - entre otras cosas - mejorar la producción agraria, lograr que las empresas del área social produzcan excedentes, obtener la participación de los trabajadores a todos los niveles. De lo - contrario, las consecuencias podrían ser desastrosas para la revolución chilena; la falta - de alimentos produciría mayor escasez y descontento popular; los déficits de las empresas estatizadas deberían cubrirse con nuevas emisiones de papel-moneda, provocando más inflación y un mayor deterioro del nivel de vida de los asalariados; sin participación organizada los trabajadores percibirían la estatización como un simple cambio de patrones.

Pero detrás de estas reflexiones prudentes, los grupos voluntaristas de la UP ven - surgir el monstruo del "reformismo", la pérdida del ímpetu revolucionario, y acusan al - PC de asumir posiciones conservadoras. El "respeto a las leyes de la economía" no sería más que un falso realismo, una pérdida del coraje necesario para llevar adelante la revolución.

Pareciera que uno y otro grupo pusieran el acento en dos dimensiones distintas del proceso revolucionario. Los "voluntaristas" insisten en la supresión del orden antiguo, tratando de avanzar lo más posible ya que el proceso es irreversible: los fundos y las fábricas ya no volverán a sus antiguos dueños. Este momento de "ruptura" en una revolución puede ser obra de una minoría con tal que ésta sea audaz y clarividente; "cuando las uvas están maduras" un puñado de valientes puede derrocar a los detentores del poder político y económico. Pero existe también la dimensión creadora de una revolución, la que constituye una sociedad nueva; este momento revolucionario sólo puede ser obra de todo un pueblo, de las masas que apoyan en número cada vez mayor a los líderes revolucionarios. Es ésta la dimensión que parece preocupar a los comunistas: ellos estarían conscientes de que un gobierno "popular" no puede permitirse el lujo de que grupos populares cada vez más importantes pasen a la oposición. Si esto sucediera se estaría construyendo sobre arena: la revolución socialista sólo puede consolidarse si cuenta con la adhesión del pueblo. Ya que esta construcción dura largo tiempo, el PC elabora una estrategia a largo plazo. Ahora bien, si el pueblo recordara el Gobierno de la Unidad Popular por la escasez de alimentos, los records de inflación, la disminución de producción en los grandes centros mineros y los déficits en las industrias estatizadas, las posibilidades de establecer el socialismo en Chile quedarían hipotecadas por largos años. Para consolidarse no le basta al socialismo con mostrar que es un sistema más humano y más justo; debe también probar que es más eficiente, al menos a largo plazo.

El control de los grupos armados

El PC ha sostenido que en Chile - a diferencia de otros países latinoamericanos - no se dan las condiciones para una revolución violenta, por lo cual ha rechazado la estrategia de la vía armada, propiciada por el MIR. Como, además, en el caso chileno la estrategia de la vía legal resulta ser también la más humanitaria, debido a su menor costo social, los comunistas se han opuesto a la confrontación directa criticando el uso indiscriminado de armas por ciertos grupos extremistas de derecha o de izquierda. El proyecto demócratacristiano de entregar el control de las armas de fuego a las Fuerzas Armadas ha venido a fortalecer la posición comunista. Según ciertas estimaciones, habría actualmente en Chile alrededor de 400.000 armas de fuego en manos de particulares; si la violencia se desencadenara, el odio se convertiría en carnicería. Pero no es

sólo el deseo de evitar una masacre lo que ha movido al PDC a presentar este proyecto; este partido, como el comunista, está consciente de que un enfrentamiento armado le dejaría pocas posibilidades de recuperar el poder, favoreciendo en cambio a grupos extremistas antidemocráticos.

El Gobierno ha dado su aprobación a la idea de legislar respecto al control de armas, y se sabe que tanto el PC como el PR están de acuerdo en poner fin al armamentismo privado. Sin embargo el problema se sitúa al nivel de los medios para lograr este objetivo: quitar las armas es ya un tipo de represión, sobre todo si se opone resistencia. Aunque el PDC propone liquidar los grupos armados sólo en cuanto tienen armas (sin perseguir a las personas), ¿cómo podría el PC apoyar el proyecto sin aparecer propiciando una legislación represiva?

Se vuelve a plantear aquí - con más agudeza y gravedad - el mismo problema de la supresión de las tomas y otras acciones ilegales. El PC sostiene que deben terminar y el presidente de la República ha prometido en diferentes ocasiones que "no habrá más tomas". Pero ¿pueden impedir las "fuerzas de orden" sin llegar a algún tipo de represión? La solución sólo podría venir de la clase trabajadora organizada, capaz de orientar las energías revolucionarias hacia las metas más fundamentales del proceso de cambios.

¿Acercamiento a la Democracia Cristiana?

En la lucha por mantener la política del Gobierno dentro del marco del programa de la Unidad Popular, la reciente elección en la Central Unica de Trabajadores (CUT) - cuyos resultados definitivos no se conocen todavía en el momento en que se escriben estas líneas - ha significado sin duda un fortalecimiento de la posición comunista.

Cualesquiera que sean los cómputos finales, todos los grupos políticos reconocen que la votación obtenida por la ultra-izquierda (FTR) ha sido muy pequeña (alrededor de un 2%) y ciertamente mucho menor que la que esperaban sus partidarios. Esta derrota en el medio laboral viene por lo demás a sumarse a la ya sufrida en el medio estudiantil, en las elecciones de la Universidad de Chile. La ultra-izquierda, que cifra su fuerza en su movilidad y audacia, habría cometido - una vez más - el error de dejarse contar.

Al interior de la Unidad Popular el partido que ha obtenido un mayor apoyo de los trabajadores parece ser el comunista, lo que muestra que aun entre los partidos de Gobierno las tendencias "ultras" no han logrado un eco importante en la clase trabajadora.

En fin, la alta votación de la Democracia Cristiana (alrededor de un 30%) confirma también los análisis comunistas. El PC se ha negado sistemáticamente a tratar sin distinción a todos los adversarios del Gobierno. Partiendo del principio de que hay adversarios principales y secundarios, ha ubicado a los demócratacristianos entre estos últimos, reconociendo que numerosas bases de la DC pertenecen a las clases populares. De ahí a admitir la afirmación de Tomic: "sin la democracia cristiana no hay unidad popular", la distancia no es tan grande.

Llegamos así al interrogante final de este comentario: ¿es posible un acercamiento entre la Unidad Popular y la Democracia Cristiana? La creciente polarización de las fuerzas políticas que se ha producido en lo que va de este Gobierno hace poco plausible la hipótesis de que se pudiera ofrecer al PDC responsabilidades ministeriales. Por su parte la DC, que ha obtenido grandes beneficios electorales en la oposición, no estaría dispuesta a poner en peligro sus avances y preferirá sin duda seguir capitalizando apoyo popular a medida que el Gobierno se desgasta.

Entonces, ¿qué tipo de acercamiento es posible? Solamente aquél que convenga a ambas partes. Parece que la fórmula comunista - "consolidar y avanzar" - puede convenir también a los demócratacristianos. "Consolidar", porque en la perspectiva de un posible retorno de la DC al poder a ella no le interesa recibir un país con sus bases económicas destruidas. "Consolidar", porque ello implica que numerosos profesionales y técnicos demócratacristianos - que hoy esperan la "resurrección" sepultados en la "huesera" - deberían ser incorporados al proceso productivo. "Consolidar", en fin, porque este proceso llevaría a la participación, efectiva de las bases de trabajadores demócratacristianos. "Avanzar", porque - según la fórmula comunista - se trata de un avance dentro del marco de la ley y esto garantiza el futuro de la DC; cualquier desborde extralegal sería fatal para los partidos democráticos.

¿Qué puede significar - concretamente - este tipo de acercamiento? Por de pronto, la deposición de ciertas armas "negativas"; ataques personales, acusaciones a ministros o altos funcionarios, deformación de las informaciones, dilaciones obstruccionistas. Estas armas sólo sirven para escaramuzas distractivas e ineficaces, totalmente opuestas al lema de "consolidar y avanzar". Por otra parte, se pueden descubrir formas "posi-

tovas" de acercamiento en la acción sindical, en las organizaciones populares y en las actividades de los gremios estudiantiles. Pero el acercamiento más importante puede darse en torno a la constitución del "área social", a lo que ya nos referimos en un comentario anterior (cf. Mensaje, mayo 1972). Según algunos demócratacristianos, su posición al respecto es forzosamente flexible, ya que en varios sindicatos donde la DC ha triunfado los trabajadores presionan por la estatización.

En las recientes conversaciones entre la DC y el Gobierno parece haberse logrado un principio de acuerdo que podría resumirse así: 1º) La gestión de las empresas que producen bienes o servicios estratégicos o de utilidad pública corresponderían constitucionalmente al Estado. 2º) Se reglamentará la intervención y requisición de las empresas. 3º) Se dictará una ley para expropiar la mayor parte de las empresas cuyo capital sea superior a 14 millones de escudos. 4º) En ciertas ramas industriales se crearán, por ley, empresas de autogestión.

Si el acuerdo se confirma, el acercamiento entre el Gobierno y la DC - tantas veces iniciado y frustrado - podrá convertirse en una realidad estable. En este caso la situación de la derecha sería difícil: o bien abandona sus aliados demócratacristianos, con lo cual permite al Gobierno enfrentar una oposición dividida (lo que tendría especial importancia en las elecciones parlamentarias de 1973); o bien abandona la defensa de los monopolios, conservando así su amistad con la DC. Tal vez muchos derechistas no se interesan por defender los monopolios en sí mismos, pero ven en ellos "la gran muralla China" que protege la empresa privada, de modo que la segunda alternativa parece poco plausible. Se se diera la primera - el alejamiento de la DC - sin duda el canto de sirena de la derecha susurraría a los demócratacristianos: "Regresen a una oposición dura y lograrán triunfos electorales."

En una y otra alternativa, el acuerdo significaría la superación de las tensiones en la Unidad Popular y la posibilidad de que Chile siga avanzando hacia el socialismo por la vía legal.

Julio 1972

ELECCIONES, ECONOMÍA Y CAMBIO SOCIAL.

A PROPOSITO DE COQUIMBO

La reciente elección complementaria de Coquimbo ha sido uno de los hechos más destacados de la actualidad nacional durante el último mes. Su importancia no estribaba en la elección de un diputado más, ya que el color del elegido no tendría ninguna influencia fundamental en la composición de la Cámara. Hace pocas semanas el Partido Comunista había renunciado sin pena a dos sillones parlamentarios al dar el pase para que dos diputados, Mireya Baltra y Orlando Millas, aceptaran cargos ministeriales. Lo que sí tenía relevancia era este encuentro entre el Gobierno y la oposición "para medir fuerzas" o, más precisamente, para manifestar fuerzas, para hacer ver al país el grado de apoyo con que cuenta cada uno de los bandos.

Antes de las cifras

Antes de comentar los resultados vale la pena señalar que la realización de estos comicios fue un mentis más para los agoreros que desde septiembre de 1970 han anunciado que "ya no habrá más elecciones" o que "éste será la última". Las elecciones se han sucedido ordenadamente y sin tropiezos desde que el gobierno de la UP asumió el poder, y nada inclina a pensar que en el futuro no vayan a realizarse en forma regular. El interés y la seriedad con que la ciudadanía sigue las elecciones, el tradicional respeto a los resultados y el bajo porcentaje de abstenciones, parecen indicar que la participación electoral se ha constituido en elemento integrante del ser nacional.

Los extranjeros difícilmente llegan a comprender por qué los chilenos se apasionan tanto por las elecciones, y los chilenos que salen al exterior no logran explicar suficientemente la fiebre electoral que vive el país. Tal vez una de las razones de fondo sea que Chile es uno de los pocos países del mundo donde los resultados electorales pueden provocar cambios fundamentales. En los Estados Unidos las administraciones demócratas y republicanas se suceden sin que termine la guerra de Viet Nam, sin que cambien las relaciones con América Latina, sin que avance a la Gran Sociedad. En Europa Oriental los "candidatos" son elegidos por la cuasi unanimidad de

los sufragios. En Inglaterra los laboristas promueven la adhesión al Mercado Común como uno de los puntos principales de su política, y cuando son derrotados por los conservadores éstos se apresuran a promover la integración al "Continente". Hasta en los países occidentales en que los partidos marxistas son fuertes, las elecciones son poco relevantes: en Italia porque el régimen parlamentario exige la mayoría absoluta para que un gobierno de izquierda sea posible; en Francia - sistema mixto parlamentario-presidencial - porque la tradicional división de la izquierda le ha quitado cualquier esperanza de conquistar el poder. La situación en América Latina no es muy diferente: Brasil y Argentina han vivido "tranquilamente" sin elecciones durante largos períodos de su historia contemporánea; En México el PRI y sus predecesores se han instalado cómodamente en el poder desde hace más de medio siglo; en Colombia el pacto entre conservadores y liberales ha hecho que el abstencionismo avance como una marea. Hasta en Uruguay - tantas veces comparado con Chile - las elecciones se han desprestigiado por el tradicional reparto del poder entre blancos y colorados. En Chile, en cambio, las elecciones se han convertido en un camino revolucionario. El país ha vivido un proceso de democratización creciente y poco a poco se han ido extirpando los vicios electorales. Este reflejo creciente de la voluntad popular en las elecciones ha llevado a que personeros de la UP caractericen el acto de Coquimbo como una manifestación más de la "tradicional democracia chilena". En otros términos, ellos parecen considerar que la "democracia burguesa" chilena no es tan burguesa, al menos en su aspecto electoral, y que - aunque deba ser corregida y mejorada - no se la puede descartar con la facilidad con que se desecha una opción puramente fáctica.

Las cifras

Los comentaristas se han dividido cuando se ha tratado de analizar los resultados: mientras los partidarios del gobierno tomaban como punto de referencia la elección presidencial de 1970, los opositores se referían a las elecciones municipales de 1971. Pero antes de las comparaciones hay que destacar que el triunfo de la UP constituyó un bonito "gol" en el match de las elecciones complementarias: el gobierno que perdía 3 x 1 - descontó un tanto, llevando la cuenta a 3 x 2. Este "gol" contribuirá sin duda a levantar el ánimo de sus partidarios y a disminuir la seguridad de sus contrincantes. El "tanto" viene por lo demás a sumarse a otros triunfos electorales del

gobierno: en la CUT, en la Universidad Técnica del Estado y en la FECH. No hay duda de que estos éxitos tendrán influencia en las próximas elecciones parlamentarias; el campeonato político - en Chile la política constituye un deporte nacional - conserva toda su emoción.

Pasemos ahora a las cifras. Presentamos los porcentajes sin considerar los votos - nulos y blancos. La candidata del PC y de la UP, Amanda Altamirano, obtuvo 50.482 votos (54.5%); Orlando Poblete, candidato del PIR y de la oposición consiguió 42.309 votos (45.5%). En las elecciones parlamentarias de 1969 - considerando 2/3 de la votación del Partido Radical - la izquierda obtuvo un 51,8% frente a un 48,2% de los demás partidos (incluyendo 1/3 del PIR). En la elección presidencial de 1970 - Allende obtuvo un 44%, frente a 30,8% de Alessandri y 25,2% de Tomic. En fin, - en las elecciones municipales de 1971, la UP (incluyendo el PR, del que ya se había - desprendido la Democracia Radical) consiguió 62,9% y la oposición 37,1%. De la comparación de estas cifras pueden desprenderse algunas constataciones:

- 1° La UP, que se constituyó como tal para la elección presidencial, ha obtenido en Coquimbo un apoyo bastante más grande que en 1970; la fuerza del Gobierno sería ahora alrededor de un 25% mayor que en esa ocasión. Proyectada a nivel nacional, esta fuerza corresponde a un 45% del electorado.
- 2° Con relación a las elecciones de enero - cuando la proyección a nivel nacional indicaba un 47% para la UP - se observa un leve descenso.
- 3° Con relación a las elecciones municipales de 1971, el gobierno pierde 8,4 puntos (en %), lo que representa un 13% con respecto a su propia votación, en un período de 16 meses. Como punto de referencia se puede señalar que el PC perdió aproximadamente un 15% de su votación en 24 meses, de 1965 a 1967.
- 4° En fin, con respecto a las elecciones parlamentarias de 1969 la izquierda avanza 2,7 puntos en Coquimbo, lo que representa un progreso de 5,2%.

Más allá de las cifras

El análisis de las cifras sugiere varias observaciones de orden general.

- 1° El acceso de la UP al poder le ha permitido, como a gobiernos anteriores, fortalecer su posición electoral. Este fortalecimiento se debería a las nuevas posibilidades que da el poder y a la voluntad popular de hacer viable los gobiernos le-

gítimamente elegidos.

- 2° El apoyo electoral que se obtiene inmediatamente después de una elección presidencial tiende a ser inestable; una parte importante de esa fuerza se pierde rápidamente.
- 3° Las elecciones parlamentarias - que no son afectadas ni por el personalismo de las elecciones presidenciales ni por el excesivo localismo de las municipales - muestran que el electorado chileno es bastante estable, lo que constituye un indicador de conciencia política.

A estas observaciones pueden agregarse otras que se refieren a circunstancias particulares.

- 1° Las cifras indican que en Coquímbo 7.500 electores pasaron a la oposición desde las elecciones municipales. Como se puede suponer que no todos ellos dan su voto al Partido Radical, quiere decir que la clientela radical - que representaba 14.000 votos - apoya mayoritariamente el gobierno y no el PIR. Esta hipótesis se vería confirmada por los resultados en la elección de la CUT, donde el PIR obtuvo una votación muy inferior al PR.
- 2° Ya que la experiencia muestra que las coaliciones electorales más exitosas son aquellas en que los extremos apoyan al centro, y no viceversa, la coyuntura habría sido más favorable a la alianza opositora que a la UP. Más aún, la candidata del PC tuvo que avanzar contra el sentimiento anticomunista de los radicales de antiguo cuño.
- 3° La "catástrofe" que afectó a Coquímbo favoreció sin duda al Gobierno; por lo tanto, si se desea efectuar una proyección a nivel nacional habría que considerar este factor, ya que es imposible declarar a todo el país "zona de catástrofe".

Un intento de explicación

No nos interesa tanto explicar el triunfo de Amanda Altamirano, como otros dos hechos incluidos en los resultados: el crecimiento de la alianza gobiernista con relación a la votación de Allende y su desgaste respecto a las elecciones municipales.

No insistiremos en las explicaciones que ya hemos insinuado: a favor de la UP actúan las posibilidades que da el poder y la voluntad ciudadana de hacer posible su gobierno; en contra juega la inestabilidad del electorado que se encarama al carro de la victoria después de la carrera. Nos parece que este electorado inestable es muy sensible a la coyuntura económica y que sería esta coyuntura la explicación principal tanto

de los progresos de la UP como de su desgaste. Aunque parezca paradójico se podría afirmar que la coyuntura económica que atraviesa el país es a la vez favorable y crítica. Favorable, porque se ha logrado aumentar notablemente el producto nacional bruto (PNB): según las cifras provisionales de la CEPAL el índice de crecimiento económico en 1971 fue de 8,5% con respecto al año anterior (el segundo de América Latina, después de Brasil). Se ha conseguido también una importante redistribución del ingreso, llegando los asalariados a percibir un 59% de la renta nacional. Ha disminuido la cesantía, llegándose a un 3,7% en el Gran Santiago, el índice más bajo de los últimos 15 años. Evidentemente los grupos favorecidos con mayores ingresos o mejores posibilidades de trabajo están dispuestos a apoyar el Gobierno. De la crisis económica ya se ha hablado en el número anterior (cf. Mensaje, N° 210). Los éxitos económicos se han obtenido gracias a un fuerte aumento de la demanda, sustentado en grandes emisiones de papel moneda. Las emisiones excesivas han desencadenado el proceso inflacionario (27,5% de aumento de precios en el primer semestre), perjudicando a vastos sectores populares. En 1969 Raúl Ampuero afirmaba: "La inflación . . . ofrece anchas perspectivas políticas y revolucionarias" (cf. "La izquierda en Punto Muerto", p. 145); se podría ahora pensar que cuando un Gobierno revolucionario controla el poder la relación se invierte: la inflación ofrece anchas perspectivas reaccionarias. El exceso de circulante ha generado escasez, desabastecimiento, causando descontento en los consumidores. En fin, para simplificar, la crisis de divisas ha provocado una escasez aún mayor tanto de productos importados como de los que dependen de las importaciones.

Lo que nos parece importante señalar es que para el futuro próximo los aspectos críticos podrían prevalecer sobre los favorables. La capacidad instalada de la industria se acerca a su máxima utilización posible y las inversiones han disminuido. Esta ha sido sin duda una de las causas que han llevado a ODEPLAN a predecir - con optimismo un aumento del PNB de sólo un 6% para 1972. La redistribución de los ingresos puede dar marcha atrás a causa de la inflación. La cesantía puede volver a aumentar a causa de la baja en las inversiones. La renegociación de la deuda externa - que permite una mayor disponibilidad de divisas - constituirá un alivio a lo más hasta fines de 1973. El electorado flotante se verá ciertamente afectado por esta coyuntura desfavorable.

Posibles consecuencias

El triunfo de Amanda Altamirano ha mostrado que el Gobierno sigue siendo fuerte, a pesar de su desgaste. La filiación comunista de la candidata puede haber contribuido a fortalecer la posición de su partido al interior de la UP. Estos antecedentes podrían facilitar la reanudación de las conversaciones con la democracia cristiana en torno a la constitución del área social, interrumpidas tan abruptamente a comienzos de mes. Es posible que una oposición dura no sea útil ni siquiera electoralmente para el PDC; en efecto, el electorado dispuesto a oponerse cerradamente al Gobierno debería sentirse mejor representado por un partido de derecha. La elección de la FECH, realizada durante las "conversaciones", dió como resultado un mayor descenso en la votación derechista que en la demócratacristiana; esto podría indicar que una oposición dúctil puede ser más rentable para un partido de centro.

A pesar de las versiones de la prensa de derecha, las conversaciones no fueron un fracaso: no sólo se llegó a un virtual acuerdo, sino también se hizo patente a la opinión pública que el conflicto de poderes puede ser superado por medio de un compromiso aceptable por ambas partes. Si el PDC debió trasladar el diálogo al Parlamento ello se debió únicamente a que su directiva prefirió que un grupo más amplio de dirigentes políticos corroborara el acuerdo. Si la votación sobre los vetos del Ejecutivo no fue postergada, como deseaba la DC, esto se debió a una maniobra de los senadores del PIR que dieron el quorum necesario para votar. Los sectores progresistas del PDC consideran que el diálogo debe proseguir en alguna forma. En cuanto a los partidos de la UP, aunque todos manifiestan el mismo interés por este diálogo, están dispuestos a proseguirlo; no fueron ellos quienes lo desahucieron.

Una sombra

Así como la coyuntura económica condiciona los resultados electorales y la factibilidad del cambio social, así también la frecuente realización de elecciones parece influir en forma importante en las posibilidades de progreso social. Aunque las elecciones constituyen un medio de movilización popular, lo que favorece los cambios, nos parece que su excesiva frecuencia resulta negativa, convirtiéndose en distracción y freno. Durante meses los parlamentarios y altos dirigentes políticos dedican una buena parte de su tiempo a las campañas electorales, descuidando así la atención de los problemas fundamentales. En el caso de Coquimbo un senador se ufana de haber pasado casi dos meses en la zona, ¡en pleno período de sesiones parlamentarias! Estas distorsiones podrían reducirse si se suprimieran las elecciones complementarias. Se perdería

así la ocasión de que regiones desfavorecidas del país sean objeto de toda clase de ayudas y promesas (hay provincias que sueñan con una elección complementaria para solucionar sus problemas), pero el país entero podría distraerse menos y progresar más. Los partidos ya no buscarían tanto el apoyo popular mediante discursos y campañas bien orquestadas como a través de contribuciones eficaces al bienestar de la nación. A largo plazo, estas realizaciones son el mejor argumento para que los partidos consigan el apoyo electoral que necesitan.

Ante el importante problema de la constitución del área social, es posible que las pretensiones electorales más o menos inmediatas hayan empujado a ciertos sectores de la DC a mirar con recelo las "conversaciones" favoreciéndose así un enfrentamiento que puede tener funestas consecuencias para el país.

Si "después de Coquimbo" el diálogo se reanuda se habrá comprobado que esta escaramuza electoral puede haber tenido varios ganadores, pero tuvo ciertamente un perdedor: el pueblo que espera.

Agosto 1972

¿UNA NUEVA POLITICA ECONOMICA?

La devaluación del escudo provocada por alzas del dólar que fluctúan entre el 58,2 y el 220%, los fuertes aumentos de muchos precios controlados oficialmente y el anuncio de reajustes de salarios a partir del 1º de octubre, son los principales indicadores de importantes cambios en la política económica del Gobierno. Tal como se había previsto, los relevos ministeriales realizados recientemente en las Carteras de Hacienda y Economía no fueron puramente cambios de nombre.

Mientras el Presidente Allende anuncia una "hora de sacrificios", la oposición lo fustiga señalando que la "catarata de alzas" afectará sobre todo a los asalariados de menores ingresos. Y sin embargo todos - Gobierno y oposición - coinciden en que es necesario un "reordenamiento económico y financiero".

La historia reciente

Para comprender los cambios actuales es indispensable volver la vista hacia atrás, y particularmente a los primeros meses de este Gobierno. La variable explicativa de la estrategia económica ha sido la estrategia política. En noviembre de 1970, al asumir el poder dos meses después de ser elegido, Allende se encuentra con el país semiparalizado, en un ambiente de gran inseguridad, con una cesantía creciente debido al clima de terror al marxismo que desató su elección. Resulta indispensable echar a andar la máquina; si pasan los meses y no se reactiva la producción, no sólo se perjudica al pueblo sino que se corre el riesgo de un intento golpista.

Pero no se trata solamente de hacer marchar la industria y el comercio, sino de iniciar el cumplimiento del programa: avanzar en las grandes reformas estructurales y redistribuir el ingreso. Se acepta pagar un precio caro: ampliar el déficit fiscal y emitir gran cantidad de papel moneda. El aumento de los salarios permitirá mejorar los ingresos de los sectores más pobres y aumentar la demanda, reactivando así la economía. Paralelamente se establece un estricto control de precios, para evitar que los asalariados pierdan los beneficios obtenidos. En marzo de 1971 esta política comienza a dar sus frutos: aumenta notablemente la producción industrial, y disminuye la cesantía; la inflación es lenta.

Sin embargo, ya a fines de 1971 se observa que el exceso de demanda ha provocado escasez y una gran presión sobre los precios, particularmente de productos alimen-

tiños y sobre todo de alimentos perecibles, que escapan a cualquier control. La inflación rompe sus amarras y más allá de los precios oficiales comienza a extenderse el mercado negro. El Gobierno reacciona organizando las Juntas de Abastecimientos y Precios (JAP), intentando proteger el poder de compra de los grupos de menores ingresos a través de un control de precios ejercido por los mismos consumidores. Pero la organización de las JAP es lenta y sus realizaciones son limitadas. Más aún, ellas tropiezan con la oposición de grupos populares que ven en ellas un arma política de la UP.

A partir de enero de 1972 la inflación comienza a galopar: los precios suben en 10,4% en los primeros dos meses; en 33,2% al cabo de siete meses. Los desequilibrios económicos son tan grandes que pueden tener un costo político elevado. Por otra parte los cambios estructurales más "espectaculares" del programa de la UP ya se han realizado: nacionalización de las riquezas básicas, reforma agraria masiva, estatización de los bancos y de muchas grandes industrias. Fuera de la expropiación de algunas industrias importantes, los otros cambios exigen ritmos más lentos; puesta en marcha de la participación de los trabajadores, aumento de las inversiones, reorientación de la producción y del consumo, etc. Se hace patente entonces que es a la vez necesario y posible rectificar la política económica.

Desequilibrio entre oferta y demanda

Una manera de limitar el desequilibrio generado por la expansión de la demanda sería aumentar la oferta, producir más. Sin embargo parece evidente que la producción no puede aumentar en forma importante en 1973, porque faltan inversiones, se han agotado las reservas de divisas y han disminuido los stocks de materias primas. Es cierto que se procurará aumentar la producción dando seguridades a los pequeños y medianos agricultores (los predios de menos de 40 hectáreas básicas serán inexpropiables) y a la mediana y pequeña industria. En cuanto a las industrias del área social, se tratará de reorganizar su gestión de modo que se consigan aumentos importantes de la producción. Pero estos proyectos, lo mismo que los efectos de las nuevas inversiones planeadas, tardarán en madurar. La nueva política económica tiende, por lo tanto, a limitar la demanda, a "quemar circulante". Sin embargo, no se trata de volver atrás en la redistribución de los ingresos, sino de quitar poder comprador a los que disponen de más medios. El Ministro de Economía ha sido muy claro al respecto: "Se discriminará en todo cuanto sea posible, para que paguen más aquellos que más tienen ... En la política de precios se va a ver claramente el efecto redistributivo."

Dentro de esta política redistributiva hay que situar una serie de medidas que afectarán particularmente a los grupos de ingresos altos. Desde el punto de vista tributario, se unificará el impuesto patrimonial y las contribuciones, insistiéndose en la progresividad; el impuesto a los sueldos y salarios (2ª categoría) se hará también progresivo, fundiéndose con el global complementario. El estanco automotriz ha permitido fijar altos precios a los automóviles particulares y nuevos estancos permitirían seguir igual política con los televisores y la "línea blanca". El valor de los pasajes internacionales ha sido aumentado en 100%, siguiendo la misma suerte que el "dólar para viajeros". Se establecerían seguros obligatorios para los automóviles y se alzaría notablemente el precio de la bencina. Ciertos servicios - como los teléfonos - ya tienen tarifas discriminadas, debiendo pagar más caro los habitantes de las comunas más acomodadas. En fin, todas estas medidas serían acompañadas de un nuevo esfuerzo en la lucha contra la evasión tributaria.

Esta nueva forma de redistribución de los ingresos viene a sumarse a las modalidades ya puestas en marcha anteriormente: los aumentos de sueldos y salarios, por una parte, y la entrega gratuita (caso de la leche) o venta subsidiada (carne) de ciertos bienes.

El salto de los precios

Esta política redistributiva parece chocar contra una serie de medidas que se están tomando simultáneamente: fuertes aumentos de precios, que llegan a veces a un 100%. Como estas alzas afectan particularmente a los asalariados se podría pensar que ellas van a provocar una marcha atrás en la redistribución, lo que siempre tiende a suceder en los procesos inflacionarios. ¿Como explicar estas alzas? Los economistas sostienen que los desequilibrios entre la oferta y la demanda, unidos a un control parcial de precios, han llegado a ser tan grandes que, si no se producen rectificaciones, pueden llevar desajustes incalculables. En la práctica, el control de precios ha afectado particularmente a las empresas del área social, que se han convertido en generadoras de enormes déficits, haciendo imposible todo control efectivo de la productividad. Lo que se intenta ahora es llegar a precios más adecuados a la oferta y la demanda, sin excluir la política discriminatoria a la que nos referíamos anteriormente.

Esta discriminación se dirigirá también a las empresas, favoreciendo especialmente a las ya incorporadas al área social y poniendo serias restricciones a las alzas

de precios solicitados por "las 91" grandes empresas que aún no se han integrado a esta área. El manejo de los precios se convertiría, por lo tanto, en un instrumento más para avanzar en las reformas estructurales.

Reajustes adelantados

Para que los aumentos de precios no afecten más gravemente a los asalariados, la nueva política económica se propone adelantar los reajustes en tres meses: del 1º de Enero de 1972 al 1º de Octubre de 1973. Además a fin de restituir a los trabajadores parte del poder de compra perdido, se les otorgará un "bono compensatorio" de E° 700 en septiembre. Los reajustes corresponderían a un porcentaje igual al índice de precios al consumidor en los nueve primeros meses del año (excepto en los casos de altos ingresos, que serían reajustados en menor proporción). De esta manera, después de las alzas de agosto y septiembre, los trabajadores recuperarían el poder adquisitivo que tenían en enero de 1972. Por el momento el Gobierno no se propone realizar una nueva redistribución de los ingresos por medio de los aumentos salariales, ya que las condiciones económicas y políticas no le permitirían; se trata simplemente de consolidar lo ya realizado.

Paralelamente el adelanto de la fecha, se trataría de centralizar y unificar todos los reajustes, a fin de ir poniendo en práctica el principio "a igual trabajo, igual remuneración".

Como este reajuste va a generar un nuevo aumento de la demanda, muchos se preguntan si será posible - como se propone el Gobierno - establecer un efectivo control de precios a partir de Octubre. Los propulsores de la rectificación económica responden que - dadas las limitaciones que se aplicarán a la demanda - lo normal será que el ritmo inflacionario tienda a disminuir.

La devaluación del escudo.

Pero las presiones inflacionarias no provendrán solamente del aumento de la demanda, sino también del alza de los productos importados ¿Cómo explicarse entonces que se pretende frenar la inflación al mismo tiempo que se realiza una devaluación monetaria? La explicación es la misma insinuada anteriormente: se trata de tender a la estabilidad a partir de un punto de equilibrio más alto. Aunque la deva-

luación constituye un "remedio" económico clásico cuando un país sufra una crisis de divisas, el Gobierno sostiene que la situación chilena es ahora diferente: controlando el Estado el 90% de las exportaciones, será el pueblo el gran beneficiado y no las grandes compañías extranjeras, como sucedió anteriormente. La devaluación favorecerá sobre todo a la minería del cobre, hierro y salitre, así como a la industria de la celulosa y papel. La medida tiende a favorecer también a los pequeños y medianos exportadores, otorgándoles un "reajuste" de precios, lo que podría permitir una recuperación de las exportaciones de productos agrícolas y manufacturados.

Escollas y dudas

Hasta aquí nos hemos limitado a exponer, en la forma más sintética posible, las grandes líneas de la nueva política económica. Quisiéramos ahora agregar algunos comentarios críticos:

1. Las "rectificaciones" que se han impuesto como un imperativo económico manifiestan que ciertos dirigentes de la UP, responsables de la gestión económica, descuidaron o menospreciaron los factores financieros sin tener en cuenta las leyes de la circulación monetaria, que el mismo Marx analizó rigurosamente. Probablemente ellos confiaron también excesivamente en la "disciplina" de la clase trabajadora, olvidando el arraigo de la conciencia economicista y reivindicativa, especialmente en los gremios más poderosos y organizados.
2. La fuerte inflación, las devaluaciones del escudo y los compromisos que el país ha tomado para aliviar su balanza de pago han mostrado que muchos proyectos económicos del programa de la UP debieron ser abandonados. Esto podría llevar a los responsables a ser más mesurados en el futuro de sus declaraciones y proyectos, lo que les reportaría sin duda un aumento de apoyo popular.
3. La política de re-equilibrio de precios parece una condición indispensable para lograr una marcha eficiente de las empresas del área social. Pero a partir de este nuevo equilibrio sería necesario usar con gran cautela los subsidios estatales, si no se quiere acrecentar la avalancha del déficit fiscal, que constituye una de las principales fuentes de la corriente inflacionaria.
4. El "bono compensatorio" que se entregará en septiembre no compensará sino una pequeña parte de la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, aun de aquellos que reciben remuneraciones más bajas. Valdría la pena que los responsables dejaran bien en claro que este bono es insuficiente (y quizás harían mejor en deno-

minarla "aguinaldo de fiesta patrias") si quieren que los trabajadores no se sientan defraudados.

5. Los reajustes adelantados constituyen ciertamente un beneficio para los asalariados. En principio, cuanto más frecuentes sean los reajustes, menor será la pérdida de su poder adquisitivo. Sin embargo, si las alzas de precios son muy fuertes en los tres últimos meses del año, los reajustes perderían rápidamente una parte importante de su efecto. Según algunos expertos, la devaluación tarda por lo menos tres meses en hacer sentir todas sus consecuencias; los meses de agosto y septiembre serían insuficientes como plazo para que el índice registre todas las alzas que ella ocasiona.

6. Los reajustes de salarios realizados en forma proporcional (a mayor ingreso, menor reajuste) pueden constituir un buen instrumento redistributivo, pero aún así es posible que los grupos más pobres resulten desfavorecidos. En primer lugar porque el índice de precios al consumidor no suele representar el alza real del costo de la vida, y luego porque los aumentos de precios más fuertes se han registrado en el rubro alimentación, que es proporcionalmente mucho más importante en el presupuesto de los grupos de menores ingresos. Para obviar esta dificultad habría que abandonar la antigua práctica de "manipular" el índice por medio del control de precios a ciertos productos supuestamente "populares" (como ciertas marcas de cigarrillos, por ejemplo), y procurar en cambio que él refleje el alza general de los precios. Sería necesario considerar no solamente los precios oficiales, sino los que de hecho se cobran en el "mercado negro", cada vez más generalizado. Paralelamente, se podría estudiar el alza real del costo de la vida para los diferentes estratos de la población, a fin de poder discriminar mejor en los reajustes y no perjudicar a los sectores más pobres.

7. A mediano y largo plazo los reajustes resultan ineficaces si la inflación mantiene su ritmo galopante, ya que ella vuelve a corroer los ingresos de los asalariados. Ahora bien, es evidente que los reajustes van a crear nuevas presiones inflacionarias; por otra parte se han autorizado fuertes alzas en los precios de productos agrícolas, que comenzarán a regir a partir del próximo año. Por lo tanto las posibilidades de que el ritmo inflacionario decretezca son ilimitadas, lo que ha llevado a que la actual política sea calificada como un "valeroso riesgo". Ante la imposibilidad de aumentar a corto plazo la oferta de bienes, los esfuerzos para detener la inflación tendrían que dirigirse a atacar algunas de sus causas: la escasa producción agropecuaria, los déficits fiscales, las dificultades del comercio exterior, etc.

8. La nueva política de remuneraciones permitirá sin duda a los trabajadores organizados recuperar su nivel de ingresos, pero conviene recordar que el "proletariado" industrial - el sector más organizado de la clase obrera - no corresponde totalmente al grupo de menores ingresos. Por el contrario, ciertos estudios indican que el 50% de los obreros industriales se sitúan en la mitad más rica de la población. Los grupos más pobres siguen siendo los "marginales" - a menudo cesantes o semi-cesantes - del campo y de la ciudad. Basta recordar que en el medio rural el área reformada representa el 50% de la tierra arable y sólo da trabajo al 20% de las familias campesinas; el 80% restante una gran parte son minifundistas o "afuerinos" sin organización y de bajos ingresos. Para estos grupos marginales habría que desarrollar otros aspectos de la política redistributiva, particularmente la entrega gratuita, o fuertemente subsidiada, de bienes que les permitan satisfacer sus necesidades básicas.

9. La devaluación del escudo favorecerá ciertamente a los exportadores, mejorando el "retorno", pero si los precios internos vuelven a subir después de octubre el ali-ciente a la exportación será de poca duración. Por otra parte, el alza del dólar "de viajes" ha traído como secuela un salto importante del dólar "negro"; como la mayor parte del contrabando hacia el exterior se realiza aprovechando esta "tasa" de cambio, es probable que la "exportación" de toda clase de productos aumente, contribuyendo a acentuar la escasez. Gracias al cambio negro, Chile constituye hoy el paraíso de los turistas, que pueden adquirir toda clase de bienes a precios 5 ó 10 veces más bajos que en sus propios países.

10. La discriminación en los precios de bienes y servicios constituye el aspecto más nuevo en la actual política económica. Como medio de "quemar circulante" y de redistribuir los ingresos puede resultar eficaz. Con todo sería necesario utilizarlo en forma coherente y aceptar sus riesgos.

No parece coherente aumentar los precios de las citronetas en mas de 200% en un año, partiendo del hecho que sólo una minoría (10 ó 15% de la población) tiene acceso al automóvil particular, y luego afirmar - como lo ha hecho cierta prensa de Gobierno - que "el próximo año se fabricarán 20.000 automóviles populares". Es importante también tener en cuenta que en ese 10 ó 15% que posee automóvil se incluyen no pocos obreros industriales (de MADECO, MEDEMSA, INSA, etc.) y que muchos de sus compañeros que aspiraban a tener un vehículo propio se hallan en los estratos inmediatamente inferiores; si ellos forman parte de la "minoría privilegiada", no parece coherente hacer de ellos la vanguardia de un proceso revolucionario que busca como uno de

sus objetivos fundamentales la redistribución de los ingresos. Muchos de estos trabajadores no se auto-identifican como "proletarios" sino como "clase media", y sus aspiraciones de consumo tienden a asimilarse a los sectores medios.

Por otra parte, habría que aceptar las consecuencias de la política discriminatoria de precios. Los "sectores medios" se verán sin duda afectados por diversas medidas. Todos los que aspiraban a poner un pie más allá de nuestras fronteras se verán frustrados, ya que el costo de las divisas ha subido en 700% en 21 meses. Los que pretendían tener un vehículo propio, los que deben pagar cuentas telefónicas elevadas por el sólo hecho de vivir en cierto barrio (aun teniendo a veces menores ingresos que algunos residentes de otros sectores), los fotógrafos y aficionados a la fotografía que han visto "volar" los precios del material fotográfico, etc., no acentuarán ciertamente su adhesión al Gobierno. Como estos grupos no siempre se superponen, se puede pensar que no constituyen solamente la cúspide de la pirámide social, sino también una buena parte de los estratos medios. Aceptar las consecuencias de la "discriminación" significa aceptar que amplias capas de los sectores medios se alejen del Gobierno

La UP ha decidido correr un "valeroso riesgo". Si el alejamiento de algunas capas medias fueran compensado por un mayor apoyo de los grupos más pobres, habría obtenido un éxito importante no sólo en el plano social sino también al nivel político.

Septiembre 1972

"A TRES BANDAS" Y LA LIBERTAD DE EXPRESION

A fines de Agosto el Directorio de "Televisión Nacional" (canal 7) acordó suprimir el programa de debate político "A tres bandas". En las semanas que siguieron, esta decisión ocupó la primera plana y los editoriales de los diarios, fue objeto de comentarios radiales, de disputa en el Parlamento y hasta de una mención especial del Presidente de la República en su discurso del 5 de Septiembre. Nunca un cambio de programa había provocado tanto revuelo.

Algunas aclaraciones

El Directorio de "Televisión Nacional" está compuesto por 7 miembros: 1 representante del Poder Ejecutivo (cuya designación requiere la aprobación del Senado); 1 representante personal del Presidente de la República; 2 del Congreso Nacional; 2 del Consejo Nacional de Televisión, y 1 de los trabajadores del Canal 7. Por lo tanto, si se da un equilibrio de fuerzas en el Congreso Nacional y en el Consejo Nacional de Televisión, el Ejecutivo puede fácilmente controlar el Directorio. En la actualidad, hallándose vacante el cargo que representa al Ejecutivo, la correlación de fuerzas favorece a la Unidad Popular en la proporción 4 x 2.

El Consejo Nacional de Televisión está integrado por 16 miembros: el Ministro de Educación, que lo preside; 1 representante del Presidente de la República; 3 representantes del Senado; 3 de la Cámara de Diputados; 2 de la Corte Suprema; 4 que representan a las máximas autoridades de los canales: los rectores de las universidades de Chile, Católica de Santiago y Católica de Valparaíso y el Presidente del Directorio de Televisión Nacional; en fin, dos representantes de los trabajadores: 1 a nombre de los canales universitarios y 1 a nombre del canal nacional. Actualmente existen dos cargos vacantes: el del Presidente del Directorio de Televisión Nacional y el del representante de los trabajadores de los canales universitarios. Aunque no todos los miembros tienen militancia política, la actual correlación de fuerzas tiende a ser de equilibrio entre Gobierno y oposición. Es importante también señalar que el Consejo no tiene sólo atribuciones consultivas sino también prescriptivas: puede dictar normas generales obligatorias para todos los canales, exigir ciertos tipos de programas, fijar porcentajes mínimos y máximos en determinadas materias.

La clara distinción entre estos dos organismos - el Directorio de "Televisión Nacional" y el Consejo Nacional de Televisión - permitirá comprender mejor las peculiaridades de "A tres bandas".

Tres bandas, dos bandas, ¿una banda?

El programa "A tres bandas" había sido creado el 10 de Septiembre de 1970, como una forma de prolongar los debates políticos que precedieron a la elección presidencial. Paulatinamente, y sobre todo a partir de las elecciones municipales de 1971, el programa pasó a ser a dos bandas, enfrentando a representantes del Gobierno y la oposición. Dada su naturaleza, no faltaron las crisis y los desbordes, lo que sirvió de fundamento para que representantes de la U.P. propusieran en el Directorio la supresión del programa. Se optó, sin embargo, por mantenerlo, reglamentándolo en forma más rígida. A mediados de Agosto se había designado una comisión para introducirle nuevas reformas. Pero esta comisión no alcanzó a actuar: con ocasión de la puesta en marcha de los programas de cultura política, que se transmiten por cadena nacional de TV, el Directorio de "Televisión Nacional" decidió suprimir el programa "A tres bandas". En adelante sólo existiría una banda, o si se quiere dos bandas alternadas: en los programas de cultura política cada partido expone independientemente sus puntos de vista, sin debate, sin polémica.

Sintonía y seguridad interior

Las razones que se adujeron para suprimir el programa aludieron a dos problemas: la escasa sintonía y el hecho de que representantes de la oposición aprovecharan esta tribuna para injuriar a funcionarios y sembrar la alarma pública. Estas razones no carecían de cierto fundamento: las encuestas mostraban que en Santiago "A tres bandas" tenía una sintonía bastante menor que "A esta hora se improvisa", programa del mismo género del Canal 13; por otra parte, era evidente que en no pocas ocasiones los participantes se habían excedido en sus expresiones.

Sin embargo, presentados simultáneamente, estos dos argumentos carecen de coherencia: si un programa tiene poca sintonía, si el público no le presta atención, difícilmente puede causar grandes alarmas y atacar contra la seguridad interior del Estado.

Por otra parte la oposición también esgrimía sus razones. En primer lugar, no había constancia de que la sintonía fuera baja en las provincias, donde Televisión

Nacional no tiene competidores. Además, la sintonía de un programa dirigido a un público selecto, especializado, no puede compararse con la de otros programas dirigidos al gran público; "Tugar, tugar, salir a bailar" tiene más televidentes que todos los programas políticos juntos, pero eso no justifica la supresión de estos programas. En cuanto al peligro de caer en injurias o afirmaciones que atenten contra la seguridad interior, la oposición mantenía que se trata de un riesgo inherente a la libertad de expresión; la medida justificada debería hacer sancionar los responsables, pero no acallar a priori a los que tal vez podrían extralimitarse. Si se mantuviera el principio de "evitar riesgos" habría que establecer una censura previa generalizada; las autoridades de Gobierno se convertirían en jueces de la verdad, cayendo en la extraña situación de ser al mismo tiempo juez y parte.

El costo político

Pero los problemas de sintonía y seguridad interior no constituyeron ciertamente la verdadera causa de la supresión de "A tres bandas". Lo que preocupaba a la UP era el costo político que le significaba este programa: su efecto sobre la opinión pública era desfavorable al Gobierno, especialmente en las provincias. Cuando en Enero los polemistas que representaban a la oposición se convirtieron en candidatos al Parlamento y fueron elegidos con cómodas mayorías, se tuvo una comprobación casi segura de que el programa desfavorecía a la UP. ¿Por qué? Se han dado diversas explicaciones. En primer lugar, la UP tiene a sus representantes más calificados sumergidos en las tareas de Gobierno y administración; sus mejores polemistas no pueden dedicarse por entero - como los de la oposición - a la preparación de los programas de debate político. En segundo lugar, resulta siempre más fácil atacar a un gobierno que defenderlo (los errores y accidentes llaman más la atención que la marcha normal de un país). Por otra parte, la UP tiene que luchar contra la ideología dominante, que le es adversa. En fin, los representantes del Gobierno habrían carecido de coordinación, de una línea única, actuando como franco tiradores y favoreciendo los ataques del adversario.

Como quiera que sea, el costo político de mantener "A tres bandas" era reconocido en las filas de izquierda. Pero también la supresión del programa entrañaba un costo político, ya que la oposición no lo dejaría morir sin presentar este hecho como una manifestación más del totalitarismo marxista. Sin embargo, en Agosto,

dada la crítica situación económica y la ocasión que ofrecía el inicio de los programas de cultura política, se estimó que el costo de la supresión no sería tan grande.

Lo que tal vez no se previó fue la reacción del Consejo Nacional de Televisión. Este organismo no podía ordenar la reposición de "A tres bandas", ya que sus atribuciones no son tan específicas, pero dictaminó que todos los canales de televisión debían dedicar por lo menos el 2% de su programación a debate político, con participación simultánea y equitativa de las diversas tendencias ideológicas. Ya que los demás canales cuentan con este tipo de programas, la medida afecta directamente a Televisión Nacional. Su Directorio tiene plazo hasta fines de Septiembre para poner en marcha un sustituto de "A tres bandas".

En definitiva, el costo para la UP habrá sido bastante elevado: ha aparecido ante la opinión pública como rehuendo la discusión con sus adversarios y deberá retornar a esa discusión. Además, esto de "sacarle el cuerpo" a la polémica en el canal 7 resultaba particularmente chocante ya que los demás canales mantenían sus programas de debate político. Para colmo de males, en las polémicas en torno a este problema los representantes de la izquierda no dieron siempre los mismos argumentos, llegando al extremo de que un diputado del Partido Radical afirmó públicamente que su partido se oponía a la supresión del programa.

¿Diálogo o monólogo?

Las quejas de la derecha, en el sentido de que al clausurar este programa se cerraba la única ventana de que disponía la oposición para dirigirse a los televidentes de todo Chile, carecen de fundamento. En los programas de cultura política todos los partidos pueden dirigirse a todo el público chileno. Lo cierto es que al suprimirse el debate, que favorecía a la oposición, ésta contaría con menos posibilidades de conquistar la adhesión popular. Por otra parte, se podía prever - con razón - que los monólogos carecerían del atractivo de las polémicas, lo que disminuiría notablemente la sintonía de los programas políticos.

Pero más allá de los puntos que pueda ganar o perder cada uno de los contendores, se plantea el problema del mejor camino para transmitir cultura política. En frecuentes ocasiones los representantes de los trabajadores han manifestado que el pueblo quiere conocer correcta y honestamente la opinión de sus adversarios; el pueblo no quiere ser manipulado. Ahora bien, los medios de comunicación de masas -

tanto de la oposición como del Gobierno - han tendido a dar versiones cada vez más parciales de los hechos; al leer la prensa de uno y otro bando un extranjero creería hallarse ante publicaciones que provienen de países distintos. Esta tendencia a la parcialidad y a la deformación puede ciertamente acentuarse en los "monólogos"; el diálogo, el debate, la polémica (a pesar de los "avisos" que se introduzcan al pasar) obliga a los participantes a presentarse correctamente la opinión de los adversarios y a no deformar los hechos.

El debate político en la televisión puede constituir un buen instrumento de formación política y un medio de democratización del poder. A través de estos programas el público puede tener acceso a discusiones que equivalen, en forma sintética y selecta, a los debates parlamentarios (lo que valdría también para la "Cámara Unica" o la "Asamblea del Pueblo"). En los debates los "representantes del pueblo" deben dar cuenta de su gestión ante la opinión pública y responder a las críticas. Por otra parte, las polémicas públicas exigen respeto al adversario, disposición al diálogo, rechazo del enfrentamiento por la vía violenta, y esta actitud es sin duda conveniente para la gran mayoría de los partidarios del Gobierno y de la oposición democrática.

Libertad de expresión y lucha política

El incidente que comentamos se prestó para que diversos órganos de prensa y radio levantaran sus voces para protestar contra "un nuevo atentado a la libertad de expresión", relacionado este hecho con la clausura de Radio Agricultura de Los Angeles y las amenazas pendientes contra Radio Minería de Valparaíso. Se mencionaba asimismo que a través de los precios se estaba ahogando a la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, la mayor empresa privada del país y proveedora de papel de diarios para la prensa escrita.

Estas protestas suscitan al menos dos preguntas: quien controla en Chile los medios de comunicación de masas y qué se entiende por libertad de expresión. La situación de la Televisión es la más conocida. Ya hemos señalado que la alta dirección está en manos del Consejo Nacional de Televisión, entidad pluralista que puede dictar normas con carácter imperativo. En la práctica el canal nacional y el de la Universidad de Chile están controlados por la UP, mientras que en los canales de las universidades católicas - si bien están dirigidos por simpatizantes DC - se da un equilibrio (relativo) de fuerzas, lo que se manifiesta en una tendencia a la neutralidad.

La prensa escrita y las radios están controladas fundamentalmente por sus propietarios. Desde el punto de vista de su orientación política - teniendo en cuenta la difusión o sintonía - se puede afirmar que en materia de prensa escrita la oposición es más fuerte en Santiago y mucho más fuerte en provincias; en cuanto a las radios, se da un equilibrio en Santiago y un desequilibrio en provincias, también a favor de la oposición. Sólo a partir de esta realidad se puede empezar a discutir sobre la libertad de expresión en Chile.

Tanto el Colegio de Periodistas como en los diarios serios de oposición han reconocido que en Chile existe libertad de prensa. Por eso resulta chocante que algunos periodistas, a través de una red nacional de televisión y en un programa recién creado, protesten porque en Chile se está ahogando la libertad de expresión.

¿Cómo explicar, entonces, el revuelo que ha suscitado el caso "A tres bandas"? Nos parece que el incidente debe ser situado dentro de la lucha por el poder que se libra actualmente en Chile. La UP ha utilizado su control del poder ejecutivo para ampliar su campo de influencia en los medios de comunicación de masas. Este avance se ha notado especialmente en la orientación de Televisión Nacional, en las ediciones de Quimantú y en el reparto de la publicidad de las instituciones estatales y de las empresas estatizadas. Por su parte la oposición, especialmente la derecha, ha tratado de afianzar sus órganos de prensa y radio, recurriendo incluso a erogaciones voluntarias. Dentro de esta política se ha presentado un proyecto de ley para ayudar al financiamiento de todas las radios del país a través de un impuesto sobre el consumo de energía eléctrica; este proyecto, promovido por la oposición, permitiría a las radios de oposición paliar las dificultades generadas por la baja de la publicidad. En resumen, uno y otro bando trata de hacer avanzar sus líneas: el Gobierno aprovechando el poder ejecutivo; la oposición aprovechando su poder económico y su mayoría parlamentaria. El resultado parece indicar un cierto avance del Gobierno a partir de sus posiciones en 1970, lo que ha significado una tendencia al equilibrio de fuerzas en el campo de las comunicaciones de masas.

Tres ideologías, en píldoras

Los diversos grupos políticos participan en la batalla por el control de las informaciones a nombre de sus respectivas ideologías. Para la derecha, que en este aspecto es la fuerza más importante de la oposición, la libertad de expresión tiende

a coincidir con la libertad de empresa. El que tiene los medios para montar una empresa periodística puede expresar sus opiniones ante la opinión pública, formar esa opinión y orientarla conforme a sus intereses. Por supuesto que estos principios no se afirman directamente: se insiste más bien en que el lector (o radio-escucha, o televidente) es libre para elegir el órgano de difusión que prefiera. Y no se tiene en cuenta que esa "libertad" está terriblemente condicionada por los medios económicos de que dispone el propietario de los medios de información. Por otra parte, la ideología liberal pone gran énfasis en la objetividad de las informaciones, sin aceptar fácilmente que detrás de esa presentación de "hechos objetivos" se oculten orientaciones valóricas.

Frente a la corriente liberal se puede distinguir la ideología social-demócrata. En ella podrían inscribirse amplios grupos del PDC y de la UP; dentro de ella se situaría también el programa de Gobierno de la UP (el Presidente Allende ha insistido en frecuentes ocasiones en que su programa no es marxista). Para esta ideología la libertad de expresión es un derecho de los trabajadores y no del dinero, de modo que los medios de comunicación de masas deberían reflejar las diversas corrientes de pensamiento que existen en la ciudadanía. Para democratizar las informaciones habría que crear órganos representativos (como el Consejo Nacional de Televisión) y dar facilidades de expresión a las organizaciones populares (a la CUT, por ejemplo). La destrucción del poder periodístico del dinero debería ser la consecuencia de la socialización de la economía y no el fruto de un ataque directo, ya que se correría el riesgo de silenciar a órganos que expresan las opciones de una parte de la opinión pública. La ideología social-demócrata, aun reconociendo la existencia de hechos objetivos, está consciente de que la presentación de los hechos puede cargarse de orientaciones valóricas; para enfrentar este problema se propone distinguir claramente entre informaciones y comentarios, manifestando así su respeto al lector. En fin, los que defienden esta ideología creen que, si bien es necesario informar para que todos los ciudadanos conozcan el medio en que viven, no toda información es conveniente: el bien de la patria, o de algún grupo o institución particular, puede primar sobre las ventajas de una información exhaustiva. En otras palabras, se considera que la libertad no es una posesión, una cosa, sino una relación a un objetivo, a un bien de los demás hombres; así como el desarrollo sin adjetivos se convierte en desarrollismo, así también la libertad sin adjetivos se convierte en liberalismo, aun la libertad de expresión.

La ideología marxista-leninista, por último, va más allá que la ideología social-demócrata. Para los que sostienen esta doctrina la lucha contra el poder económico de la burguesía sólo puede tener éxito acentuando el poder del proletariado. Esto significa, concretamente, que sólo deberían tener derecho a expresarse los que asuman el punto de vista del proletariado; si se hacen concesiones a los adversarios, esto se debe únicamente a imperativos estratégicos o tácticos. Es cierto que la estrategia podría convertirse en algo permanente: hay marxistas que consideran la confrontación ideológica como un requisito indispensable para el desarrollo del marxismo. Para el marxismo-leninismo los hechos brutos, lo estadístico, lo cuantificable, tiene una importancia muy escasa; lo que realmente importa en los hechos sociales es el método mediante el cual los hechos son observados, analizados, explicados. Seguros de contar con el mejor método para conocer la realidad social, los marxistas estiman inútil toda comunicación de masas que utilice otro método. El método marxista hará que la prensa, la radio y la televisión se conviertan en instrumentos de movilización popular y colaboren a la realización del único valor que debe orientar estos medios: el éxito de la revolución proletaria.

Lo que caracteriza la situación chilena es que estas tres ideologías no se dan puras. Todos los grupos políticos actúan como "liberales", tratando de comprar o ampliar radioemisoras y periódicos. Todos tienden a ser "totalitarios" excluyendo a sus enemigos políticos de los medios que controlan. Los "liberales" utilizan la ideología social-demócrata, invocando el derecho a la expresión de todos los chilenos, aunque no hacen esfuerzos por democratizar los medios de comunicación y presentan ciertos hechos en tal forma que dañan gravemente la imagen de Chile en el exterior. Los marxistas, que sostienen en principio el programa de la UP, parecen hallar cada día más difícil poner en práctica una ideología social-demócrata; así como se han levantado voces para afirmar - como lo hizo el presidente de la FECH - que "la calle es de la izquierda", no faltan otras que estarían tentadas de sostener que "la Televisión Nacional es de la izquierda".

En fin, es importante señalar que el conflicto en torno a la libertad de expresión tendrá repercusiones en el enfrentamiento electoral. Ante las elecciones de marzo, Gobierno y oposición tratarán de ampliar o mantener su control de los medios de información. Mientras la UP tiene en su mano la aplicación de leyes y reglamentos, la oposición cuenta con el arma de "exigir garantías", sin las cuales podría no presentarse a las elecciones, quitando así legitimidad al Gobierno. Las fuerzas parecen hallarse equilibradas; el caso "A tres bandas" habrá servido para constatarlo.

VIA LEGAL Y TRANSICION AL SOCIALISMO:
DOS AÑOS DE GOBIERNO DE LA U.P.

En las últimas semanas varios senadores de oposición han afirmado que "el Gobierno está definitivamente en el terreno de la ilegalidad" y que "este Gobierno se ha convertido en ilegítimo". Estas afirmaciones llevan implícito, en forma no muy velada, un llamado a las Fuerzas Armadas para que depongan a quien estaría gobernando ilegítimamente. Se ha insistido en que en este país ya no hay democracia ni derecho, en que se avanza hacia la dictadura marxista.

La vía legal como opción táctica

Para dar peso a su lebelo, un senador se refirió al Estatuto de Garantías Constitucionales que el Presidente Allende se comprometió a cumplir, señalando que en su célebre entrevista con R. Debray, Allende había afirmado: "Ubícate en el período en que se produjo este Estatuto y lo medirás como una necesidad táctica". Al recordar esta frase se pretendía sin duda insinuar que esa opción táctica podría ser desechada en cualquier momento. Sin embargo, el acusador se olvidó de señalar que - unas líneas más arriba - Allende había afirmado que las Garantías Constitucionales no significaron ceder ni una línea del programa de la Unidad Popular. Ahora bien, nadie ignora que ese programa fue enteramente concebido como un camino al socialismo por la vía legal. Que para los marxistas la vía legal sea sólo una opción táctica no constituye ningún misterio; lo importante es recordar por qué optaron por este camino. Las razones parecen haber sido tanto teóricas como prácticas.

Si bien es cierto que muchos teóricos marxistas sostienen que la vía violenta es indispensable para que el proletariado tome el poder, el pensamiento del mismo Marx es más matizado: en 1872 afirmaba que existían países como Norteamérica, Inglaterra e incluso Holanda en los cuales los trabajadores podrían tomar el poder por medios pacíficos, y en 1879 - en una entrevista aparecida en el Chicago Tribune - volvía a afirmar estas mismas ideas. Pero no se trata simplemente de citar a Marx como autoridad, como a un nuevo "Santo Padre", sino de explorar el por qué de sus afirmaciones. La clave parece hallarse en el carácter contradictorio de la sociedad capitalista: si bien ella tiende a explotar cada vez más al proletariado, guiada por la ley de la ganancia, crea también las condiciones para que la clase obrera crezca

en número y agudice su conciencia. Frente a la reacción de la clase obrera, la burguesía no tiene más remedio que ceder terreno, llegando a admitir el sufragio universal, la legislación social y hasta elementos tan típicamente socialistas como las nacionalizaciones y la planificación. Uno de los resultados de esta lucha es que la "legalidad burguesa" deja de ser totalmente burguesa y concede una parte del poder a los trabajadores. Pretender que la "legalidad burguesa", sobre todo en una democracia progresista, no refleja sino el poder del dinero, sería negar la dialéctica, caer en un maniqueísmo abstracto.

Desde el punto de vista práctico, la situación chilena se prestaba para redescubrir esa veta un tanto olvidada del marxismo. Ya hemos señalado en estas columnas que el respeto al sistema electoral parece haberse integrado al ser nacional; quitar a los chilenos las elecciones sería tal vez más difícil que arrancarle a un perro su hueso preferido. El culto a la Ley, al Derecho, a la Constitución, se ha extendido aun a las capas sociales más oprimidas por el sistema social. No es éste el lugar para explorar las causas históricas de este fenómeno; baste con mencionar los éxitos de la república portaliana y los triunfos militares de fines de siglo XIX, que lograron legitimar la "legalidad" como un valor nacional. Por otra parte, la misma solidez de la clase dominante le permitió ser flexible, abrir - sin demasiada resistencia - puertas laterales a la clase obrera organizada, e incluso admitir organismos de planificación como la CORFO. Más recientemente, durante el gobierno de Frei, se produjo un aumento notable de la sindicalización y de la organización popular, y la Reforma Agraria - a pesar de sus limitaciones cuantitativas - constituyó la primera estocada profunda a esa "vaca sagrada" en que se había convertido la propiedad privada; roto el mito, el camino quedaba despejado para asestar nuevos golpes. En fin, para no extendernos, el mismo triunfo de Allende por la vía electoral vino a confirmar que la vía legal constituía en Chile un camino posible para la construcción del socialismo.

Lo importante es dejar en claro que, desde el punto de vista marxista, una opción táctica no debe representar una elección arbitraria de un grupo dirigente, sino que debe constituir la línea de acción que fluye del análisis de la situación objetiva. En el caso chileno, esta opción ha sido el reflejo de las exigencias del pueblo, de sus valores y de su nivel organizacional. Por lo tanto, la opción no puede ser cambiada arbitrariamente; más que un compromiso del Presidente Allende, el Estatuto de Garantías Constitucionales (contenido también en el programa de la Unidad Popular) representa la exigencia de los trabajadores chilenos.

De la táctica a los hechos

Antes de analizar las actuaciones del Gobierno que han sido calificadas de transgresiones a la legalidad, vale la pena señalar que los actos calificados de ilegales han sido abultados teniendo en perspectiva lo que el Gobierno pretendería o se propondría hacer. Nos parece más conveniente juzgar los hechos en sí mismos, sin presuponer gratuitamente otras intenciones.

Las principales acusaciones de la oposición se refieren a la libertad de expresión. Como ya nos hemos referido a esta materia en un comentario anterior, lo retomaremos ahora muy brevemente. En primer lugar, conviene tener en cuenta que tanto los periódicos de Derecha como la SIP han reconocido que en Chile existe libertad de prensa. En términos más generales, después de dos años de gobierno de la Unidad Popular la distribución del poder en el control de los medios de comunicación de masas parece corresponder mejor que antes a la correlación de fuerzas políticas: si bien es cierto que la UP tiene más fuerza en la televisión, los grupos opositores controlan un mayor número de radios y periódicos, con más sintonía y difusión. Es cierto que el Canal Nacional no ha respetado suficientemente el pluralismo que impone la ley de televisión, pero esto podría interpretarse como un intento de compensar el poder que la oposición tiene en otros medios informativos. Por otra parte, el Consejo Nacional de Televisión y no el Ejecutivo sería el responsable directo de no resguardar suficientemente el pluralismo. Más grave desde el punto de vista legal parece ser lo sucedido con el diario La Mañana, de Talca y con Radio Agricultura, de Los Angeles. En el primer caso la Corte Suprema dictaminó que el periódico debería ser devuelto a sus antiguos dueños y este fallo aún no se ha cumplido. Pero La Mañana está controlada por los que trabajan en ella; difícilmente se podría exigir al Gobierno que utilice violentamente la fuerza pública para desalojarlos. En los gobiernos anteriores también hubo casos en los que no se usó la fuerza pública, a pesar de tratarse de hechos de flagrante ilegalidad, como las tomas de terreno. Y en tiempos bastante recientes la oposición ha llegado incluso a pedir protección policial para una "toma", indudablemente ilegal. En cuanto a Radio Agricultura de Los Angeles, la Contraloría estimó que el decreto de clausura "no se ajusta a derecho"; el Gobierno ha replicado que la clausura es legal, y he sabido que la Contraloría no tiene autoridad para objetar un decreto de insistencia. No existe un Tribunal que dirima los conflictos entre la Contraloría y el Ejecutivo; ese rol podría ser cumplido por la Corte Suprema pero hasta el momento no existen disposiciones incontrovertidas al respecto.

Otras Garantías Constitucionales como derecho de huelga legal y la libertad de educación han sido respetadas - aquí conviene recordar que en Chile se ha respetado tradicionalmente también casi todas las huelgas ilegales -; el Gobierno ha seguido subvencionando las escuelas, colegios y universidades particulares. En cuanto a la libertad de reunión, es innegable que se han puesto trabas a las concentraciones y marchas de la oposición, pero finalmente los permisos se han concedido. Por lo demás, no están lejos los días en que la CUT era enviada a buena distancia del centro, a la plaza de artesanos, para realizar sus concentraciones; en materia de manifestaciones públicas nunca los gobiernos han sido muy benignos con sus adversarios políticos. Por último, la libertad electoral ha sido respetada, tanto en el nivel político como en el gremial, a pesar de que el Gobierno ha perdido numerosas elecciones.

Aparte de los hechos ya señalados, la Unidad Popular ha sido criticada por llevar adelante su programa de cambios estructurales al margen de la ley, exceptuándose de esta crítica solamente la nacionalización de las riquezas básicas. ¿Qué hay de cierto? Los bancos fueron estatizados por medio de la compra de acciones, procedimiento que no ha podido ser objetado desde el punto de vista legal. La Reforma Agraria se ha acelerado utilizando la misma ley dictada durante el gobierno anterior, aunque es cierto que las expropiaciones con motivo de conflictos laborales o "tomas" se han multiplicado, se han ejercido presiones para no dejar "reservas" y con frecuencia los pagos no se han hecho o se han dilatado. Una política más organizada y sistemática habría evitado probablemente una parte del desorden y la inseguridad que se vive actualmente en el campo. En cuanto a las industrias y empresas de distribución que han pasado al área social, algunas han sido compradas llegando a acuerdos con los propietarios, pero la mayoría ha sido requisada o intervenida. Estrictamente hablando, estas empresas tienen un status que se ajusta a la ley, pero que es sólo provisorio.

En resumen, aparte de ciertas extralimitaciones, se puede constatar que el Gobierno se ha esforzado por dar a sus intervenciones una base legal; aunque ciertas medidas han sido objetadas por los Tribunales o por la Contraloría, globalmente se ha respetado el estado de derecho. Para caracterizar la situación se podría tal vez decir que el Gobierno no ha actuado - en general - al margen de la ley, sino al borde de la ley.

La letra, el espíritu . . . y el pueblo

Ante los procedimientos jurídicos de la Unidad Popular sus adversarios han replicado que se está respetando la letra de la ley, pero no su espíritu. Frente a esta objeción el Subsecretario de Justicia explicó así el punto de vista del Gobierno: "Piensan que la ley es una norma inerte, alejada del acontecer histórico, y que su espíritu permanece inmutable a través del tiempo: es un espíritu anquilosado, fijado de una vez para siempre por el autor de la ley, sin referencia ninguna a la voluntad popular. Si eso fuera realmente el espíritu de la ley, no cabe duda que el Gobierno utiliza y tendría que seguir utilizando la legislación prescindiendo de su espíritu y aún en contra suya. Pero resulta que el espíritu de la ley, en cuanto expresión de la voluntad soberana del pueblo a través de sus representantes, varía conforme cambia esa voluntad popular. El espíritu de la ley se va configurando en el proceso histórico y no es el simple recuerdo del antiguo jurista o legislador, por eminente que haya sido. En Chile actualmente el espíritu de la legislación está dado por la opción histórica que el pueblo tomó cuando eligió a su Gobierno. El deseo de cambios sobrepasa las fronteras partidistas de la UP. Es por eso que podemos usar la ley conforme a su espíritu, porque el espíritu de la ley es un espíritu nuevo". (cf. Mensaje, Nº200, julio 1971, p. 285). Nosotros subrayamos). Es la voluntad del pueblo, el consenso mayoritario de la opinión pública, lo que determina el nuevo espíritu de la ley. Esta interpretación no es tan nueva; basta señalar, como ejemplo, que a comienzos del gobierno de Frei se dio instrucciones a los inspectores del trabajo para que, en materia de sindicalización campesina, procedieran como si la nueva ley ya estuviese dictada, lo que significaba proceder al margen de la ley, contra la ley anterior, aun vigente. Pero allá era evidente que la mayoría del pueblo quería que los campesinos tuvieran facilidades para sindicalizarse; un nuevo espíritu vino a dar vida a la vieja letra.

La crítica que se podría hacer validamente al Gobierno es que el "nuevo espíritu" que se pretende dar a los antiguos decretos no corresponde siempre a la voluntad popular, a lo que desea la mayoría del país. Más que la transgresión de tal o cual artículo de un reglamento o decreto - transgresión que podría ser discutida por los expertos - lo que está en juego es el respeto a la voluntad popular. El gobierno perdería su legitimidad si no representara a la mayoría del pueblo, si no ajustara sus actos al "espíritu nuevo" de la ley. Es cierto que el deseo de cambios supera las fronteras partidistas de la UP; baste recordar que los trabajadores de las empresas estatizadas, aún

los de oposición, han casi siempre aceptado las requisiciones e intervenciones, y sin duda la opinión mayoritaria del país no quiere que las grandes empresas que hoy constituyen el área social vuelvan a sus antiguos dueños. Pero la mayoría del pueblo desea también un mínimo de orden y de programación en los cambios estructurales. Por no citar más que un ejemplo: sería difícil que el Gobierno mostrara que la voluntad popular apoya la intervención de una cooperativa de taxistas, trabajadores que sólo poseen su propio vehículo; a estos trabajadores, y a miles de pequeños comerciantes y empresarios, el programa de la Unidad Popular les ofrecía garantías.

La ley del temor

Algunos comentaristas han destacado que las realizaciones de estos dos años de Gobierno responden a la extraordinaria flexibilidad de la legislación chilena. Puede haber algo de cierto en ello, dada la multitud enorme de decretos y leyes actualmente en vigencia y considerando también que esa legislación refleja un compromiso de las fuerzas sociales en pugna. Pero tal vez se podría decir lo mismo de muchos otros sistemas jurídicos. Estudiosos del sistema inglés consideran que sin cambiar una letra del aparato jurídico-político de Inglaterra, se podría establecer una férrea dictadura en ese país; lo que defiende a la democracia inglesa es el espíritu "libertario" de su pueblo y la fuerza de las organizaciones que lo representan. En general, la flexibilidad de un sistema legal depende de los valores sustentados por un pueblo y de la correlación de fuerzas de los grupos políticos que tienen acceso al poder. Ahora bien, en el caso chileno la Unidad Popular ha sometido a extrema tensión la flexibilidad del sistema legal, aprovechando su poder en los sectores populares para promover cambios por medio de las "tomas". Es indudable que esta táctica ha contribuido a acelerar el proceso, pero existe el riesgo de que esta arma sea un "boomerang" que venga a golpear la frente de quien lo lanzó.

Las "tomas" promovidas por los partidarios de la UP han generado "retomas" u otras "tomas" por parte de sus adversarios. Si la dinámica de este proceso continúa el país puede ser conducido a un desorden increíble. Pero lo más grave no es tanto el desorden, sino el sentimiento de temor generalizado que ha invadido a la población, en todos los sectores. Vecinos de barrios acomodados y modestos pobladores montan guardia nocturna para proteger a su casa o sitio. Muchos chilenos, aun los que no tienen casi nada empiezan a desear el orden como el primero de sus valores. Esa ansiedad visceral de seguridad y de orden constituye el caldo de cultivo del facismo: la avalancha de los

"tomas" ha creado una mentalidad pre-facista que podría conducir al país a una dictadura.

La "ley del temor" se ha impuesto también frente a la proliferación de los grupos armados. La política no represiva seguida consecuentemente por el Presidente Allende ha hecho que un número cada vez más importante de ciudadanos se haya provisto de armas, especialmente en los sectores extremistas. Cualquier enfrentamiento local podría terminar en un baño de sangre. Frente a esta situación, la ley que entrega a las Fuerzas Armadas el control de las armas puede contribuir a crear un ambiente de relativa tranquilidad, que permita una convivencia mínima. Sin embargo, cuando la ley opere se producirá, sin duda, una reacción de los sectores de ultra-izquierda, afectando probablemente a ciertos grupos de la Unidad Popular. Como el Gobierno no podrá desautorizar a las Fuerzas Armadas, algunos conflictos serán inevitables; la pacificación, indispensable para que el país no se detenga, tendrá sin duda un costo político importante.

El juego de Casandra

En el momento en que escribimos estas líneas el país vive horas extraordinariamente tensas, bajo la amenaza de un paro general, con la capital y la mayor parte de las provincias sometidas al control directo de los militares. Resulta difícil y apasionante escrutar la bola de cristal. Según algunos observadores (entre los que se ha incluido a Fidel Castro), la institucionalidad chilena ya no da para seguir avanzando hacia el socialismo; no quedaría más remedio que saltar la barrera de la vía legal. Frente a esta posibilidad, sectores de derecha desean adelantarse y dar un golpe que haga caer al actual Gobierno.

Nos parece que un golpe de izquierda o derecha es poco probable, no sólo a causa de la tradición profesional de las Fuerzas Armadas sino también a causa de la solidez de las fuerzas sociales y políticas en pugna. Un golpe derechista debería enfrentarse a la CUT y a la mayor parte de la clase obrera organizada, a la movilización popular promovida por los partidos de izquierda e incluso a la hostilidad de partidos de oposición como la DC y el PIR. Es difícil concebir cómo se podría gobernar un país en estas circunstancias. Un golpe izquierdista encontraría como obstáculo al movimiento "gremial", que en estos días ha mostrado su fuerza, y a la movilización de toda clase de sectores adversos a la UP, tanto más exaltados cuanto que están seguros de representar una amplia mayoría del electorado. También en estas condiciones el país sería difícilmente gobernable. Por lo demás, en uno y otro caso la contra-reacción podría con

ducir fácilmente a la guerra civil. Los que vivieron la experiencia de España no recomiendan esta solución.

Descartada la viabilidad de un golpe de estado, ¿Como podría el Gobierno crear un clima de confianza? La respuesta podría venir en dos tiempos: antes y después de "marzo". Antes de las elecciones parlamentarias el Presidente podría re-estructural su Gabinete, incluyendo elementos moderados y tal vez algunos miembros de las Fuerzas Armadas (que tanto lo han apoyado durante el actual estado de emergencia), presentando así un equipo que diera garantías a los pequeños y medianos empresarios, comerciantes y agricultores. La crítica situación económica que vive el país exige tomar en serio la "batalla de la producción". Esas garantías serían suficientes también para que la democracia cristiana no hiciera el juego a los intentos golpistas de ciertos grupos de derecha. Después de "marzo", si la DC fuera sobrepasada por la derecha, es posible que volviera a estar dispuesta a negociar con la UP. La posibilidad no es tan remota, ya que la política dura frente al Gobierno debería favorecer particularmente al Partido Nacional. De llegarse a una negociación, la "vía chilena" podría tomar otro camino, el que quizás pudo seguir desde el principio: la búsqueda de un consenso básico de todos los grupos políticos anti-capitalistas, que se tradujera no sólo en la transformación social del país sino también en una legislación apta y sólida y en una organización económica eficiente.

Noviembre 1972

UNA EXTRAÑA LUCHA DE CLASES.

¿La rebelión de la clase media?

Cuando aparezcan estas líneas tal vez el paro que afectó al país durante 26 días y que fue calificado por el General Prats, nuevo Ministro del Interior, como "el más grave de la historia de Chile", haya perdido algo de su actualidad. Nos ha parecido, sin embargo, que tratándose del hecho político más relevante de los últimos dos años no podíamos dejar de comentarlo.

Reconstitución de la batalla

Vale la pena recordar sucintamente las etapas del enfrentamiento. El conflicto empieza bajo la forma de una protesta de los dueños de camiones, ante una (presunta?) amenaza de estatización y el no cumplimiento por parte del gobierno de los compromisos contraídos en materia de repuestos. La Asociación de Dueños de Camiones representa a más de 30.000 miembros que poseen alrededor de 45.000 camiones; se trata, en la mayor parte de los casos, de pequeños empresarios. Los choferes de los camiones, que perciben rentas más que medianas, tienden a solidarizar con los propietarios. Este paro puede paralizar la marcha del país. La Derecha, que ha visto frustrados sus esfuerzos para probar la ilegitimidad del gobierno, lo apoya con entusiasmo, ya que ve en la detención del país un arma para derribar a Allende. El gobierno reacciona violentamente, encarcelando a los dirigentes gremiales y ordenando la requisición de los camiones.

El encarcelamiento de dirigentes gremiales nunca ha sido bien visto por la opinión pública chilena. Las sangrientas luchas de la clase trabajadora han logrado que los líderes sindicales sean respetados, aún cuando los movimientos que promuevan no sean legales. La aceptación de los conflictos "ilegales" por parte de las autoridades había llegado a ser una norma impuesta por los hechos; por no citar más que algunos ejemplos: en 1964 - último de Alessandri - hubo 476 huelgas ilegales y sólo 88 legales; en 1967 a mediados del gobierno de Frei - se contaron 861 huelgas ilegales y sólo 253 legales. Si en los casos en que no se respetó la ley los dirigentes hubieran sido encarcelados, las prisiones se habrían hecho pequeñas. Es por todo esto que cierta prensa de oposición moderada calificó como un error político del Gobierno el encarcelamiento de los dirigentes. En todo caso, esa medida sirvió como detonador facilitando la exten-

sión del movimiento huelgístico: los comerciantes cerraron sus negocios y fueron rápidamente seguidos por otros gremios: pequeños industriales y artesanos, duenos de buses y taxis, bancarios, colegios profesionales, pilotos de la Línea Aérea Nacional, federaciones campesinas, etc. En esta etapa de extensión del movimiento, la Democracia Cristiana había jugado un rol importante. Sus dirigentes pensaron que si permanecían al margen del movimiento toda la ola de protestas sería capitalizada por la Derecha; decidieron entonces movilizar a sus bases para tratar de tomar la dirección de las fuerzas opositoras. Si lo lograban podrían obtener un doble objetivo: detener los intentos golpistas de la Derecha - nefastos para la DC - y conseguir que el Gobierno cambiara la metodología del proceso de cambios, que pasara de la vía de los hechos consumados a la vía del consenso.

El climax de la batalla se vivió a fines de octubre. El Gobierno había decretado no sólo el Estado de Emergencia en casi todo el país y el toque de queda en numerosas provincias, sino también una cadena radial obligatoria, solicitada por el Comandante en Jefe del Ejército. Esta medida, declarada ilegal por la Contraloría, contribuyó a exacerbar los ánimos, sobre todo porque las informaciones oficiales eran de una parcialidad evidente. La fraseología exaltada de los personeros del Gobierno contrastaba con la firmeza y calma de las Fuerzas Armadas, que lograron controlar los numerosos atentados terroristas, y con la organización y eficiencia de la clase obrera y de los grupos voluntarios adictos al Gobierno, que consiguieron abastecer a la población y mantener en marcha las industrias. Pero a pesar de estos esfuerzos, los stocks de combustible y de materias primas comenzaban a agotarse. Si el país se paralizaba se haría el juego a los extremistas: al extremismo de Derecha que presionaba a las Fuerzas Armadas para que dieran un golpe, o al extremismo de Izquierda, que pretendía convertir la movilización popular en "vía armada". Era indispensable buscar una salida política.

Ese momento fue aprovechado por la Oposición para representar lo que llamó el "Pliego de Chile", conjunto de exigencias eminentemente políticas.

La distensión empezó a producirse cuando se observó que, a pesar de la extrema tensión, las Fuerzas Armadas seguían apoyando firmemente al Gobierno constitucional. Esta constatación desalentaba a la Derecha, pero tampoco entusiasmaba a la ultrazquierda y a sus simpatizantes, ya que se procedía con moderación frente a los sectores en huelga. En esta etapa de distensión el hecho más significativo fue la supresión de la cadena radial obligatoria, decidida por el Gobierno, probablemente a pedido

de la misma autoridad que la había solicitado.

En fin, el desenlace de la batalla es conocido: el Presidente cambió su Gabinete, incluyendo a tres representantes de las Fuerzas Armadas. El General Prats, nuevo Ministro del Interior, ofreció condiciones de Pratz, que daban seguridad a los gremios de transportistas y comerciantes, así como a los demás sectores en huelga. Los dirigentes aceptaron suspender el paro, señalando que la palabra de un General les merecía confianza.

La lucha económica

Si nos preguntamos ahora: ¿Quién ganó la batalla? nos vemos obligados a distinguir tres dimensiones - económica, política e ideológica - que deben ser tomadas en cuenta en cualquier balance de este tipo.

Desde el punto de vista económico, Chile entero resultó perjudicado. Algunas publicaciones gobiernistas han calculado los daños en unos 200 millones de dólares. La proyección de esta cifra a todo un año indica que se llegaría a una suma cercana a la mitad del producto nacional bruto; en otras palabras, durante los días del paro la actividad productiva habría alcanzado a un 50 por ciento del ritmo normal. Estas cifras bastan para poner en evidencia el infantilismo revolucionario del MIR, quien sostenía que el paro había demostrado que el país no tiene necesidad de los "patrones" para funcionar. Estas cifras indican también que las autoridades de Gobierno debieron ser más cautelosas cuando afirmaron que el país marchaba casi normalmente; falsear los hechos objetivos no ayuda a la causa revolucionaria, ya que hace perder la fe en la palabra de los dirigentes. Este grave golpe a la economía del país constituye también un traspiés para el Gobierno, responsable último de la gestión.

En cuanto a los grupos en conflicto, los más perjudicados parecen ser los dueños de camiones y los profesionales que trabajan por cuenta propia. Los comerciantes, en cambio, dada la extraordinaria demanda existente, podrán probablemente recuperar rápidamente las pérdidas. En cuanto a los que viven de un salario o un sueldo, algunos han solicitado que no sean descontados los días no trabajados. Este artificio, que se ha hecho tradicional en Chile, desvirtúa el sentido del derecho de huelga, que supone la aceptación de un daño económico con tal de obtener un beneficio gremial; aceptar la práctica de pagar los días no trabajados significa favorecer toda clase de huelgas irresponsables.

En fin, hay ciertos resultados económicos que aún no han sido dilucidados. Si - a pesar de sus promesas - el Gobierno mantiene las requisiciones e intervenciones iniciales durante el paro, la Derecha Económica - numerosos industriales, comerciantes y empresarios - habrán sufrido una derrota más. Si - también a pesar de las promesas - se toman represalias contra algunos sectores que participaron en el paro, estos grupos habrán sufrido las consecuencias más graves de la batalla.

La batalla política

Pasemos ahora al nivel político, empezando por los que sufrieron la mayor derrota. Nos parece que si una lucha amada no se produjo durante este paro, "el más grave de la historia de Chile", es difícil que se inicie en el futuro próximo; esto significa, en otras palabras, que los grupos extremos que promueven la violencia han sufrido una grave derrota. El MIR que no ha ocultado su disgusto ante la presencia de las Fuerzas Armadas en el Gobierno, y en el otro extremo la Derecha golpista debe estar terriblemente deprimida; no sólo no pudo conquistar a los militares para derrocar a Allende sino que ve como Ministro del Interior al Comandante en Jefe del Ejército. Si existiera algún general aventurero dispuesto a oír los llamados de la Derecha, sin duda se desanimaría al estar seguro de tener que enfrentar a sus colegas.

¿Y quiénes lograron la mayor victoria? Parece evidente que el mayor éxito correspondió a las Fuerzas Armadas. Ellas han evitado una guerra civil; este tipo de enfrentamiento les significaría no sólo pérdidas de vidas civiles y militares, sino también la destrucción de su material bélico. Un enfrentamiento interno provocaría una gran debilidad ante una presión exterior; en una situación de crisis el ataque podría provenir de Bolivia apoyada por Brasil, con el beneplácito de "alguna" gran potencia. Pero también en el plano directamente político el avance de las Fuerzas Armadas ha sido notable: nunca, en los últimos años, su influencia política había sido tan grande. Al finalizar el paro el General Prats se convirtió en una de las primeras figuras políticas del país, ocupando una posición tan destacada como la del propio Presidente Allende. Aunque el General-Ministro ha sostenido que su presencia en el Gobierno tiene como finalidad principal tranquilizar los ánimos, cumpliendo así un deber patriótico, se ha manifestado también dispuesto a colaborar en el cumplimiento del programa de la Unidad Popular. Esto significa que el futuro del proceso chileno podría depender en buena parte de la presencia de las Fuerzas Armadas en el Gabinete, llegándose tal vez a una "peruanización" de la vía chilena: no la substitución del régimen civil por uno militar, sino a la influencia creciente de los militares en el proceso de cambios.

Para las Fuerzas Armadas este sería un rol muy conveniente, ya que les daría un gran poder político con poco "costo"; los platos quebrados serían pagados por Allende y los partidos que lo apoyan. Sin embargo, la prolongación de la presencia de los militares en el Gabinete se enfrenta con una dificultad seria: la gravísima crisis económica en que se encuentra el país. Es posible que ciertos sectores de las Fuerzas Armadas no quieran comprometerse excesivamente con el Gobierno para no tener que cargar - aunque sea sólo parcialmente - con el pesado fardo de la crisis económica.

Recorramos ahora los otros sectores que lograron éxitos o fracasos políticos más discutibles. Para dar un juicio al respecto creemos que se pueden distinguir tres planos: los programas o proyectos políticos, la cohesión y conciencia de las organizaciones y el apoyo electoral.

Si el programa de la Unidad Popular se concibe fundamentalmente como anti-imperialista, anti-latifundista y anti-monopólico, la presencia de los militares puede constituir una garantía de cumplimiento. Habría que ver, sin embargo, si las Fuerzas Armadas están dispuestas a entrar por el camino de los "decretos de insistencia"; la "intervención" de FENSA, que la Contraloría acaba de calificar de ilegal, podrá servir de test al respecto. En cambio, si el programa de Allende es considerado como un camino al socialismo, el nuevo Gabinete significa sin duda un paso atrás; los oficiales de alta graduación en su gran mayoría no son marxistas. Si la Derecha "golpista", cuyo "programa" consistía en detener el proceso de socialización mediante el derrocamiento de Allende, fue rotundamente derrotada, los grupos derechistas que se formaban con un cambio de ritmo y de metodología habrán conseguido cierta satisfacción. En cuanto a la DC, que parece desear - al menos programáticamente - que continúe el proceso de cambio, pero fundado en una legislación que cuente con un consenso mayoritario, ha visto en el nuevo Gabinete una garantía de que este camino se impondrá.

Desde el punto de vista de las organizaciones partidarias, no hay duda que cada uno de los bandos se cohesionó en el combate y salió fortalecido. Sin embargo se pueden señalar algunas diferencias: en primer lugar, la tarea de los sindicatos y organizaciones de izquierda fue eminentemente constructiva (se trataba de mantener la producción y asegurar el abastecimiento) y este tipo de acción contribuye sin duda más que una huelga a la consolidación de un grupo. Por otra parte la DC no pudo (o no quiso?) movilizar a sus bases de obreros industriales. El hecho es que estos trabajadores, mediante su actividad cotidiana, actuaron objetivamente contra el paro.

A partir de esta actividad común con los obreros de izquierda es posible que las inclinaciones de algunos hayan cambiado.

Los éxitos electorales de los partidos no coinciden siempre en forma inmediata con la realización de un programa o con la cohesión y conciencia de sus organizaciones de base; es por eso que - nos parece - el apoyo electoral puede analizarse separadamente. Naturalmente aquí entramos en el plano de las especulaciones, que deberán ser puestas a prueba en marzo (aún teniendo en cuenta que es difícil aislar la variable "paro"). Es muy probable que, después de este enfrentamiento, los grupos que propician la vía violenta pierdan fuerza, y entre estos grupos habría que incluir sin duda a sectores del PS y de la IC. Sin embargo, globalmente la UP podría salir fortalecida, ya que se mostró capaz de superar una gravísima crisis. Por otra parte la Derecha (PN y DR) podría salir también consolidada, ya que un paro detonado por ella tuvo en jaque el Gobierno y lo obligó a cambiar su Gabinete. En fin, la DC - aunque tal vez habría perdido más quedándose fuera de la contienda - resultó probablemente debilitada (al menos en términos relativos) ya que, en general, la polarización de los conflictos no favorece a los partidos de centro.

El enfrentamiento ideológico

Resulta difícil determinar exactamente los elementos ideológicos que entraron en juego en este conflicto; por eso nos limitaremos a señalar algunos sin pretender ser exhaustivos.

En primer lugar, nos parece que el paro sirvió para poner de manifiesto los intentos golpistas de la Derecha. Ella fue desenmascarada y los partidarios del Gobierno (y aún otros sectores) tomaron más conciencia de este peligro. La agresión aportó puntos a favor de la UP, así como - en el plano externo - la agresión de la Kennecott ha favorecido objetivamente al Gobierno en la lucha ideológica contra el imperialismo.

Por otra parte, a través del conflicto apareció claramente que los pequeños y medianos empresarios y comerciantes se han sentido ideológicamente atacados. Es posible, según diversas informaciones, que hayan obtenido buenas ganancias durante este Gobierno, y sin embargo se han opuesto violentamente a él. ¿Cómo explicar esta reacción? La explicación puede venir del programa y de la praxis de la Unidad Popular. En efecto, mientras el programa es en sí fundamentalmente anti-imperialista, anti-monopólico y anti-latifundista, el proyecto político de los partidos que integran la UP

es suprimir totalmente la propiedad privada de los medios de producción. No se gana mucho con afirmar que sólo los "ríos caudales" serán afectados, ya que "los otros medianos, y los chicos" sienten que luego les tocará su turno; a mediano o largo plazo, "allegados son iguales", como en el Poema de la Muerte, de Manrique. Más aún, la fraseología de los personeros de la UP y una serie de hechos concretos han hecho que los "pequeños y medianos" hayan ido perdiendo la poca confianza que les quedaba. Es muy probable, por lo tanto, que en este aspecto de la lucha ideológica - en el esfuerzo por convencer de que sólo los grandes serán afectados - la UP haya perdido terreno en este conflicto.

Además, si el Gobierno no devolviera las industrias y empresas requisadas o intervenidas durante el paro - tal como se comprometió a hacerlo - contribuiría a ahondar la crisis de confianza. El dilema es serio para la UP, porque muchos sectores de entre sus filas han señalado que no se aprovechó el conflicto para avanzar más en la constitución del área social. Pero, en estas circunstancias, avanzar en las transformaciones económicas significará retroceder en el terreno ideológico.

En fin, quisiéramos señalar un último aspecto de la lucha ideológica: la defensa práctica de ciertos principios que favorecen a la clase trabajadora. Durante años la izquierda chilena ha defendido la unidad sindical y gremial - como condición indispensable para el éxito de los movimientos populares - y ha combatido los intentos de paralelismo. Ahora bien, los numerosos "frentes patrióticos" promovidos por la UP durante el paro han sido calificados como maniobras tendientes a provocar la división y el paralelismo en los gremios. Este tipo de "frentes" podría justificarse en una situación de emergencia, ante la amenaza de un golpe de estado, pero si se convierten en manifestaciones de una estrategia permanente pueden provocar graves daños a las organizaciones populares: no sólo la izquierda carecerá de fundamento para invocar la "unidad sindical", sino que podrá provocar la contra-reacción de los grupos opositores.

Lucha de clases y convivencia

Hasta ahora hemos tratado de hacer un balance de la batalla, en tres niveles, sin que aparezca claramente un conflicto de clases. Sin embargo, en la lucha de clases se pueden distinguir las mismas tres dimensiones - económica, política e ideológica - que hemos estado analizando; sólo hace falta ahora discernir en qué forma las diferentes clases sociales estaban actuando en cada uno de los niveles del enfrentamiento.

El diario *Le Monde*, de París, calificó lo ocurrido en Chile como "la huelga de la clase media". Nuestra opinión coincide sólo parcialmente con esta interpretación ya que nos parece que lo fundamental del conflicto fue la batalla política, que la superestructura política fue la determinante principal. Ahora bien, la lucha de clases en el plano político no corresponde exactamente a la estructura de clases, que se funda en la situación económica de los actores, de tal modo que es posible que sectores de una misma clase puedan enfrentarse en la lucha por el poder. Los partidos no son las clases, sino que las representan: son simples mediadores a través de los cuales actúan las fuerzas en pugna. Cualquier pretensión de identificar el partido con la clase constituye un riesgo de "ideologización", un peligro de convertir el medio en fin. Pues bien, en el campo político lucharon todas las clases y fracciones de clases que adhieren a la UP y a la oposición, en la medida en que todos, en forma activa o pasiva, intervinieron en el conflicto: por parte de la UP, la gran mayoría de los obreros, muchos sectores campesinos y algunos grupos de la pequeña burguesía; por parte de la oposición, algunos sectores obreros, importantes contingentes campesinos, la mayor parte de la pequeña burguesía y toda la gran burguesía. Por lo tanto, en este plano, no se puede hablar sin distinguos de una lucha de clases entre el proletariado y la burguesía. No parece razonable afirmar que los sectores obreros, campesinos y pequeño-burgueses de la oposición fueron engañados por la burguesía, como tampoco será razonable pretender que los campesinos y obreros de la UP fueron engañados por sus líderes sindicales o por sus dirigentes políticos. Sin embargo, es cierto que en la batalla política, toda la gran burguesía estuvo en la Oposición y la mayor parte del proletariado industrial con el Gobierno. Pero este hecho no constituye una novedad.

Lo realmente nuevo del conflicto fue el rol preponderante de la pequeña burguesía o "clase media", en la lucha de clases económica e ideológica: ella constituyó la fuerza social que permitió la movilización política. En este sentido coincidimos con la interpretación de *Le Monde*. Ya hemos señalado que el proyecto socialista de la UP constituye una amenaza ideológica para todos los que poseen algún capital, sea éste un bien material, sea una profesión u otra capacidad intelectual rentable. Ellos se rebelaron para defender sus bienes o prerrogativas profesionales, que representan también intereses económicos. ¿Y cuáles son los adversarios económicos de la pequeña burguesía rebelde? En la medida en que el Gobierno de la UP ha sido sectorio, los propios colegas en cada fracción de clase; en la medida en que el Gobierno ha permitido o estimulado la burocracia, los funcionarios favorecidos por el régimen;

en la medida en que el Gobierno ha cumplido su programa, el proletariado, principalmente el industrial, los campesinos y pobladores. Lo extraño del caso es que, si bien es indudable que la pequeña burguesía tiene un nivel de ingreso mucho más alto que el proletariado, hay sectores de la "clase media" (pequeños transportistas y comerciantes por ejemplo) que son más pobres que los estratos altos del proletariado industrial. Fueron con frecuencia estos sectores más pobres los más duros en la lucha. Sin ellos a su lado, la gran burguesía - como cualquier oligarquía - habría podido ser derrotada fácilmente.

Pero juntamente con la lucha de clases se ha hecho patente la necesidad de la convivencia. No por un nacionalismo romántico, no porque se quiera promover una solidaridad idealista sino a partir de una constatación bien "materialista"; es imposible que los grupos en pugna se repartan el país o destierren a todos sus adversarios. Aunque no les resulte agradable, los militantes de la UP y de la oposición se necesitan mutuamente. La dialéctica de la lucha de clases no supone la supresión del adversario, sino una sucesión de enfrentamientos que generan nuevas síntesis, nuevas formas de convivencia. Y cada una de estas síntesis parciales es una realización germinal de la sociedad sin clases.

COMENTARIOS CRITICOS

El periodista radial, Sr. Alfonso Stephens Freire, hizo llegar a Mensaje un comentario leído en la Radio del Pacífico. Los principales párrafos de este comentario decían lo siguiente:

"El último número de dicha revista, correspondiente al presente mes de diciembre, ofrece un interesantísimo análisis sobre el para sedicioso desencadenado por la reacción en el mes de octubre. Dicho artículo se denomina "Una extraña lucha de clases" y lleva la firma de Jaime Ruiz-Tagle.

No creemos del caso resumir este inteligente análisis, pero recomendamos a nuestros auditores que lo lean y, en general, que asuman la costumbre de leer la revista "Mensaje". Queremos, sí, comentar dos o tres aspectos del artículo mencionado, en los cuales su autor afirma o sugiere juicios con los cuales no estamos plenamente de acuerdo.

Dice el señor Ruiz-Tagle: "Lo realmente nuevo del conflicto fue el rol preponderante de la pequeña burguesía o "clase media" en la lucha de clases económica e ideológica; ella constituyó la fuerza social que permitió la movilización política". Esta frase nos merece las siguientes observaciones:

El señor Ruiz-Tagle, si bien lo coloca entre comillas, utiliza el concepto muy manido de "clase media", que, sin embargo, no define. Ya hemos hablado en otra oportunidad de la necesidad de definir con claridad algunos conceptos de permanente uso en la fraseología política y en la lucha ideológica de nuestro país, y uno de ellas, lo dijimos, es el de "clase media". Por otra parte, el autor del artículo que comentamos parece identificar los conceptos de "pequeña burguesía" y de "clase media". Si ello es así, nada tendríamos que objetar, como no sea el que la "pequeña burguesía" es sólo un sector de la "burguesía", y por lo tanto, no es un elemento intermedio en la lucha de clases existente entre la "burguesía" y el "proletariado", sino que, precisamente, es un sector integrante de uno de los bandos en lucha.

Dice en otra parte de su artículo el señor Ruiz-Tagle: "Ya hemos señalado que el proyecto socialista de la UP constituye una amenaza ideológica para todos los que poseen algún capital, sea éste un bien material, sea una profesión u otra capacidad rentable".

Estimamos que en esa frase el autor del artículo ha incurrido en graves errores de hecho. En primer lugar, no es posible identificar el "capital" con todos los "bienes materiales". El socialismo tiende a la abolición de la propiedad privada de los bienes de producción, es decir, de los capitales, pero en caso alguno arremete contra la propiedad privada de los medios de uso y consumo, que son "bienes materiales". Por otra parte, y sin ánimo peyorativo alguno, consideramos un verdadero abuso de términos el referirse a las aptitudes personales como "capacidades rentables", asimilables a los capitales. Pero, además, el proyecto socialista de la UP objetivamente no constituye una amenaza ideológica para los que sólo poseen una profesión u otra "capacidad rentable", como tampoco para los propietarios de pequeños capitales. Invitamos al respecto al autor del artículo y a todos quienes lo deseen, a que lean el programa de gobierno de la Unidad Popular, en el párrafo relativo a la Construcción de la Nueva Economía. La Unidad Popular no plantea la abolición de la propiedad privada de TODOS los bienes de producción, sino que tan sólo de los que están "en poder del capital monopolista nacional y extranjero". Más aún, el Programa expresamente declara

que el "área de propiedad privada comprende aquellos sectores de la industria, la minería, la agricultura y los servicios en que permanece vigente la propiedad privada de los medios de producción".

Por último, creemos que valdría la pena que el propio señor Ruiz Tagle realizara un análisis completo y en profundidad sobre un asunto que menciona sin abordar: el de si es posible considerar como especies de un mismo género los "sindicatos de trabajadores" y los "gremios" de empresarios o capitalistas, grandes, medianos o pequeños. En su artículo el señor Ruiz-Tagle cree que la Unidad Popular ha contradicho su tesis de repudio al "paralelismo sindical", al constituir "frentes patrióticos" con elementos descendentes de los "gremios" de transportistas y comerciantes que desencadenaron el paro sedicioso de octubre. Creemos que el señor Ruiz-Tagle está equivocado. No puede considerarse en un mismo pie de igualdad el "paralelismo" sindical y el gremial. Los sindicatos agrupan a trabajadores que tienen todos, objetivamente, un interés común. En cambio, el paro lo demostró, los sectores de la "pequeña burguesía", especialmente dueños de camiones y pequeños comerciantes, están objetivamente divididos entre una minoría cuyos intereses coinciden plenamente con los de la gran burguesía, y una gran mayoría cuyos intereses reales tienden a identificarse cada vez más con los de la clase proletaria.

Alfonso Stephens Freire

Respuesta

Estimado Sr. Stephens: Su interesante comentario radial con respecto a mi artículo se prestaría para una valiosa discusión. Por motivos de espacio me limito a algunas observaciones:

1) Si utilicé el término "clase media" fue porque se trata de la expresión más usada en el lenguaje corriente. Lo que traté de insinuar es que la llamada "clase media" corresponde en general a lo que en términos dinámicos se denomina "pequeña burguesía". Habría sido más propio hablar de estratos o sectores medios, y definirlos a través de indicadores de estratificación. Pero "Mensaje" no es una revista especializada, de modo que no se puede recargar al lector con definiciones.

2) Es cierto que dentro de la dicotomía fundamental de la lucha de clases la "pequeña burguesía" se ubica junto a los grupos dominantes, enfrentando al proletariado. Pero una cosa es la situación de clase y otra la posición de clase. En determinadas circunstancias la "pequeña burguesía" puede aliarse al proletariado (cf. p. ej., Mao Tse Tung, "Análisis de las clases de la sociedad china"). Más aún, si se hace un análisis en términos dinámicos, la posición de clase es más relevante que la situación. El

programa de la Unidad Popular tiene esto en cuenta y por eso se propone avanzar mediante una alianza de clases entre el proletariado y la pequeña burguesía.

3) Cuando menciono el "proyecto socialista de la UP", no me refiero a su programa. El presidente Allende ha insistido en que su programa no es socialista, sino constituye una etapa anti-imperialista, anti-monopólica y anti-latifundista para abrir camino al socialismo. Sin embargo, los partidos de la UP tienen sin duda un proyecto final socialista, que implica la supresión total de la propiedad privada de los medios de producción; es este proyecto final, presente en forma incoada en la actual etapa, lo que constituye una amenaza ideológica para la pequeña burguesía. Habría que agregar que también el proyecto de socialismo comunitario de la D.C., si se le tomara en serio, implicaría la supresión de la propiedad privada de los bienes de producción y constituiría una amenaza ideológica para la pequeña burguesía.

4) No pretende afirmar que todo bien material constituye un capital. Sí, afirmo que el capital puede ser un bien material. También afirmo, según lo que Marx da a entender en "El Capital", que "una profesión u otra capacidad intelectual rentable" puede asimilarse (en una economía de mercado, naturalmente) a un capital. ¿Por qué? Porque el rasgo fundamental del capital es atribuirse beneficios independientemente del trabajo realizado: esta atribución ilegítima también se encuentra en el caso de las profesiones o cargos que son remunerados en forma desproporcionada al trabajo realizado. Por eso se podría decir que ciertos profesionales tienen un capital "incorporado", lo que les permite exigir por sus servicios un nivel de honorarios que no guarda relación con su trabajo.

5) Con respecto al "paralelismo" sindical o gremial, me interesaba defender el principio de la unidad de los que viven de su trabajo, en sus respectivos oficios o profesiones. Dividir a los médicos, camioneros, comerciantes, etc. en "patriotas" o "anti-patriotas" no contribuiría a la unidad de los trabajadores y significaría identificar la "patria" con una opción política, lo que no parece serio si se hace un análisis científico.

6) Los términos "sindicato" y "gremio" no siempre se usan en forma claramente diferenciada. Personalmente me inclinaría a llamar "gremios" a las asociaciones de personas que poseen bienes de capital (industriales, comerciantes, transportistas, agricultores, etc.). Estos propietarios, aunque no sean grandes capitalistas, tienden con frecuencia a identificarse con los "grandes" ya que todos aspiran a crecer. Normal-

mente constituyen una fracción de la pequeña burguesía que se alía al proletariado más difícilmente que los sectores asalariados de ingresos altos o medios.

Jaime Ruiz-Tagle P.

Diciembre 1972

EL VIAJE DE ALLENDE Y LA INDEPENDENCIA NACIONAL

Hay ciertos hechos políticos que sólo cobran su real dimensión cuando ha pasado un cierto tiempo; en el momento mismo en que suceden, la guerrilla política hace saltar una polvareda - compuesta de mil pequeños detalles - que oculta el paso del acontecimiento. Probablemente el viaje del Presidente Allende realizado en diciembre pertenece a este tipo de hechos.

Más allá de los largos aplausos que acogieron su discurso en la O.N.U. y de la esplendorosa recepción en el salón San Jorge del Kremlin, la cuestión fundamental parece ser: después de este viaje, ¿es Chile más, o menos independiente? Y más en general, ¿qué han significado estos 26 meses de Gobierno desde el punto de vista de la independencia nacional?

La guerrilla política

Dentro de la lucha política la "guerrilla" constituye un mecanismo de dilución para ocultar los propios errores o para oscurecer los éxitos del adversario. En el caso del último viaje presidencial esta táctica de las escaramuzas tuvo diversas manifestaciones.

En primer lugar el Parlamento negó la autorización al Ministro del Trabajo para viajar con Allende, argumentando que no debía ausentarse mientras las secuelas del paro de octubre no hubiesen desaparecido. El Ministro debió limitarse a un viaje de 10 días, pero en definitiva acompañó al Presidente en las dos etapas en que su presencia podía ser más significativa: Moscú y La Habana. El Congreso no vió aumentado su prestigio después de esa maniobra, ya que cualquier observador despasionado consideraría normal que algunos Ministros del Partido comunista acompañen al Primer Mandatario si se va a visitar países gobernados por ese partido.

Antes de la partida se criticó al Gobierno por no dar suficiente información al Parlamento respecto a los objetivos del viaje. Sin embargo, lo más importante, dentro del actual sistema, es que el Congreso pueda juzgar el viaje mismo a través de sus resultados, y para que esto fuera posible el Ministro de Relaciones Exteriores dió a su regreso una amplia información al Senado.

También se criticó el hecho de que uno de los objetivos del viaje fuera "devolver visitas" a los Gobernantes de México y Cuba, juzgándose que la situación in-

terna no permitía ese tipo de viajes protocolares. Veremos, más adelante, que las etapas de México y Cuba no se limitaron a la cortesía internacional.

Dentro de estas tácticas de dilución se rasgaron vestiduras porque el Presidente se habría hecho acompañar por una comitiva muy numerosa y había utilizado el elegante "Waldorf Astoria" de Nueva York. No se mencionó que en casi todas las etapas los dueños de casa corrían con los gastos, que los gastos de un avión son iguales si en él viajan 10 o 70 personas, que el Waldorf es el lugar donde tradicionalmente pernoctan los jefes de Estado porque ofrece buenas condiciones de ubicación y seguridad; en fin, que los gastos del viaje eran mínimos comparados con la importante ayuda económica que estaba en juego.

Otros ataques se refirieron a las declaraciones conjuntas, criticando a Allende porque no se mencionaba ni las muertes de estudiantes en México ni la invasión de Praga por las tropas soviéticas en 1968. ¡Como si la regla elemental de la diplomacia fuera destacar lo que separa a los países que están buscando un acuerdo!

Por último, se escribió mucho sobre los créditos atados que habían concedido a los soviéticos. Sólo al fin del viaje algunos senadores de oposición reconocieron que este tipo de créditos también puede ser beneficioso para el país.

En todo caso, lo que queremos subrayar es que esta "guerrilla" corresponde a una de las formas de la lucha política que impide llegar al fondo de los problemas. Es probable que esas maniobras hayan sido sobre-utilizadas en esta ocasión ante la perspectiva de las elecciones de marzo. Es posible también que la táctica de la dilución se haya empleado en forma tan intensa para oponerse a lo que los estudiosos de las ideologías llaman "falsa totalidad"; según la oposición Allende pretendería "totalizar" los éxitos de su viaje extendiéndolos a toda su gestión de gobierno, culpar a las empresas transnacionales y al bloqueo norteamericano de todos los males que afectan al país, obteniendo mediante esta táctica beneficios electorales.

Aislar al enemigo principal

Entre los hechos de la gira presidencial muchos observadores han estimado que el más destacado fue el discurso de Allende en la Asamblea General de las Naciones Unidas. No solamente la sala repleta, los largos aplausos, la transmisión integral por parte de la televisión norteamericana, la satisfacción de la prensa internacional, son los signos de su importancia, sino también el hecho de que aún periodistas chilenos de

oposición lo hayan calificado de "sólido, medido, enérgico, digno, sin histrionismo". Su repercusión no puede ser medida en términos contables, sino como un episodio más de la lucha ideológica. Los observadores internacionales llegan incluso a mirar con un dejo de escepticismo las aclamaciones que siguen a estos grandes discursos. ¿Acaso no fue vivamente aplaudido Paulo VI, hace ya más de cinco años cuando exclamaba en esa misma sala: "Nunca más la guerra"?

Pero quizás el llamado del Papa no fue suficientemente eficaz porque se limitó a una denuncia demasiado general. Cualquiera que lo escuchara podría pensar que los otros, el otro bando, era responsable de la guerra. Si Paulo VI hubiera denunciado a los países que no respetan la autodeterminación de los pueblos, a los que bombardean a pueblos lejanos, tal vez los cristianos de los Estados Unidos habrían reaccionado antes y habrían forzado a su Gobierno a terminar la guerra de Vietnam. Recordamos este otro discurso famoso porque a partir de él se puede comprender mejor el valor de las palabras de Allende: no se trataba fundamentalmente de atacar a los países capitalistas, ni siquiera a los Estados Unidos, sino de denunciar a las corporaciones transnacionales, que cuentan con un poder inmenso y cuya única finalidad es el lucro.

Este procedimiento de identificar y aislar al adversario principal puede dar más frutos que una simple denuncia del sistema capitalista. De hecho, las palabras de Allende cayeron en un terreno preparado, aún al interior de los Estados Unidos: durante su campaña McGovern había fustigado públicamente a los grandes empresas transnacionales. Si al interior mismo del pueblo norteamericano, cuya gran mayoría no recibe los beneficios de esas corporaciones, se creará un movimiento de repudio a sus maniobras, se habría dado un gran paso en la lucha ideológica.

Moscú y la nueva independencia

Cuando se nacionalizó el cobre, ciertos carteles aparecieron en Santiago que anunciaban: "Con la nacionalización del cobre Chile conquista su segunda independencia". El tiempo se ha encargado de demostrar que la afirmación era exagerada; en realidad, la nacionalización de las riquezas básicas no constituía más que una batalla en la larga guerra por conquistar la liberación nacional. Una batalla importante, con todo, ya que creaba las bases para que el país percibiera los excedentes y orientara la producción, las compras, ventas y fletes según sus propios intereses.

Un país pequeño, aislado y subdesarrollado como Chile sólo puede pensar su independencia en términos de "autonomía relativa". El crecimiento de esta autonomía depende fundamentalmente de las alternativas posibles en las relaciones económicas con los países desarrollados; mientras el país pueda elegir y negociar con diversos interlocutores, sus posibilidades de defender sus intereses serán mayores. En este sentido (1) se ha experimentado un avance considerable en estos dos años de gobierno.

El endeudamiento con los Estados Unidos, que representa casi un 50% de la deuda total de Chile, tiende a disminuir en términos relativos; el comercio con ese país ha disminuido de más de un 40% a cerca de 13%. Es cierto que esta última cifra corresponde a productos claves, muy difíciles de encontrar en otros mercados, pero de todas maneras el país ya no depende tanto como antes de esta gran potencia. Se ha intensificado, en cambio, el comercio con los países latinoamericanos (especialmente Argentina y Brasil), con Europa Occidental, Japón, Australia y Canadá, y también - aunque en menor medida - con los países socialistas. Dentro de este grupo, ha aumentado considerablemente el comercio con China, que se ha convertido en el cuarto consumidor de cobre chileno (70 millones de dólares anuales), pagándolo en moneda dura y a precio de mercado. Por otra parte China ha concedido un préstamo por 25 millones de libras esterlinas, con un plazo larguísimo y muy bajo interés.

Las relaciones económicas con la España de Franco han sido excelentes: este país ha concedido al Gobierno un crédito (semi-atado) de 40 millones de dólares y se han renegociado las deudas chilenas. En fin, para no alargarnos, una serie de países pequeños - Bélgica, Holanda, Finlandia, Israel, Suecia - han aportado a Chile una importante ayuda tecnológica.

Sólo dentro de este contexto pluralista y "no comprometido" en materia de política internacional pueden comprenderse las nuevas relaciones económicas que se han establecido con la Unión Soviética.

El comercio chileno con esta gran potencia ha sido hasta ahora muy limitado (alrededor de 30 millones de dólares anuales, menos del 3% del comercio chileno). Durante el Gobierno anterior la URSS había concedido créditos de 15 millones para instalaciones industriales por 42 millones de dólares, además de 15 millones para equipos y herramientas. Ambos créditos que databan de un tratado de 1967, estaban todavía sin utilizar.

Durante el actual Gobierno la Unión Soviética ha concedido a Chile préstamos por 103 millones de dólares (no-atados) que se han convertido en un "revolving credit" (sólo se pagan los intereses). Además se han utilizado los 15 millones para comprar material de vialidad y se espera ampliar estos créditos (atados) en unos 35 millones, para adquirir tractores, maquinarias para la minería, etc. En cuanto a los 42 millones para instalaciones industriales (que podrían ampliarse a 100 millones) se ha destinado una parte a un convenio ya firmado para una fábrica de aceites lubricantes y se pretende usar el resto en una fábrica de paneles, un puerto pesquero, un centro de inseminación artificial, etc. La URSS concedería además créditos en alimentos por 30 millones.

Pero el significado económico más importante de Allende a Moscú es lo que el Ministro Almeyda calificó de cambio cualitativo en las relaciones económicas. Se trataría de llegar a un acuerdo con la URSS para el desarrollo de ciertos sectores de la economía chilena: así como en materia automotriz se ha llegado a convenios con Francia y España, en la ganadería e industria del frío con Holanda, en maderas con los países nórdicos, etc., se trataría de lograr un aporte soviético en pesca, desarrollo ferroviario, energía y siderurgia. Esta sectorización de las relaciones económicas internacionales tendría la ventaja de "no poner todos los huevos en un canasto", de no depender exclusivamente de un gran país desarrollado, y al mismo tiempo permitiría evitar las complicaciones de los intercambios económicos múltiples: aprendizaje de técnicas diversas en un mismo sector, multiplicación de diversos tipos de repuestos, etc.

El pluralismo no-comprometido y la sectorización de las relaciones económicas internacionales nos parecen tan importantes que creemos que podría constituir un gran avance en la lucha por la nueva independencia.

Pero la visita a Moscú terminó en un interrogante: algunos observadores consideraron que - a pesar de los nuevos créditos y de las buenas disposiciones de la URSS hacia Chile - los soviéticos habían mostrado poca confianza en la experiencia chilena. (2) Este hecho parece tanto más sorprendente cuanto que han sido teóricos soviéticos quienes han elaborado la estrategia de la "vía pacífica" aplicada actualmente en Chile. Una explicación posible sería que Moscú no quiere comprometerse excesivamente con una experiencia que podría experimentar una "vuelta atrás". Chile no tiene para la URSS la importancia estratégica de Cuba. Por otra parte, la distancia haría muy difícil sostener a Chile - como se ha hecho en el caso cubano - en caso de que se llegara a una situación crítica. Pero hay algo más: desde el punto de vista de su estra-

tegia mundial, nada podría ser más favorable para la URSS que un avance importante de Chile hacia el socialismo que concluyera sin embargo, en una "devolución" del Gobierno a la oposición ... ¿Por qué? Porque este pequeño país sudamericano no tiene la importancia de Francia o Italia. Ahora bien, en estos países - donde la estrategia de la "vía pacífica" tiene posibilidades de triunfar - una de las cosas que retrae a las "clases medias" del apoyo a los grupos marxistas es el temor de que éstos, una vez instalados en el poder, no quieren soltarlo. Si se lograra mostrarles un ejemplo de que los comunistas están dispuestos a "devolver" el Gobierno en caso de ser derrotados electoralmente, los sectores medios franceses e italianos estarían mucho más dispuestos a integrarse a la coalición de izquierda.

Podrá pensarse tal vez que esta especulación no tiene mucho asidero en la realidad; sin embargo el "uso" que se está haciendo en Francia - en plena campaña electoral - de la experiencia chilena, parece indicar que el ejemplo de Chile no es insignificante. Como es sabido, los últimos sondeos (diciembre 1972) indican un 43% de preferencia para la coalición marxista contra 40% para la "majorité", grupo actualmente en el poder.

Los enanos frente a Gulliver

Hemos señalado que la lucha por una nueva independencia ha pasado por la ruptura de los lazos que ataban a Chile a las corporaciones transnacionales y se ha prolongado en una denuncia de esos monopolios internacionales ante la mayor asamblea mundial. Pero el discurso de la ONU no se limitó a denunciar sino que propuso una estrategia: la unión de todos los países exportadores de materias primas para defender sus riquezas básicas. Sólo desde la perspectiva de la necesidad de reunir fuerzas para combatir al adversario principal, dejando de lado las fronteras ideológicas, se pueden comprender las etapas secundarias del viaje de Allende.

En Perú y Venezuela la visita se limitó a una conversación en el aeropuerto con los respectivos Jefes de Estado. A pesar de sus brevedad, el encuentro simbolizaba la orientación latinoamericana del actual Gobierno, y más específicamente la reafirmación de ciertos objetivos concretos para construir la unidad de América Latina: reforzamientos de la CECLA, defensa de "las 200 millas", importancia del Pacto Andino y de los organismos que representan a los países exportadores de cobre (CIPEC) y de

petróleo (OPEP). La visita a Argelia, gran exportador de petróleo como Venezuela, no pretendía solamente destacar los esfuerzos por el socialismo de ese país africano, sino reforzar la unión en torno a la defensa de los intereses del Tercer Mundo.

Las estadías en México y en La Habana, donde la acogida popular fue numerosa y entusiasta, tienen que interpretarse también en la misma forma: se trata de que los países débiles y subdesarrollados junten sus hilos para atar al gigante. Echeverría no pretende llevar a su país al socialismo: sólo quiere dar un viraje a la izquierda mediante una política nacionalista. Castro no tiene confianza en que la vía pacífica pueda conducir al socialismo. Sin embargo uno y otro, más allá de las diferencias ideológicas, solidarizaron con Chile en la defensa de sus riquezas naturales y en la lucha anti-imperialista. Esta solidaridad se ha manifestado a través de gestos concretos: México defendió la teoría de la deducción de las utilidades excesivas en el Consejo Económico-Social de las Naciones Unidas; Cuba donó a Chile 40 mil toneladas de azúcar, equivalentes a 5 millones de dólares.

La lucha ideológica y su concretización institucional exigen tiempo y esfuerzo, sobre todo si se trata de unir países distantes. Pero a largo plazo estos esfuerzos terminan por dar resultados. De hecho, cualquiera que sea la opinión de conjunto que se tenga de la revolución cubana, es innegable que ella ha contribuido, al menos por su influencia indirecta, al progreso social de los pueblos latinoamericanos. Sin duda, la confianza en el éxito final ha estimulado al pueblo cubano para soportar los sacrificios impuestos por el bloqueo y la batalla anti-imperialista.

Dos giras: de la exhortación a la lucha

La gira presidencial de Frei a Europa Occidental en 1965 constituyó un esfuerzo por liberar al país de la excesiva tutela norteamericana, ampliando las relaciones económicas con otros países desarrollados; la gira de Allende ha significado un paso más en este esfuerzo por la independencia. Sin embargo el tono de los discursos ha cambiado: mientras Frei exhortaba a los países ricos para que dieran posibilidades de progreso a los subdesarrollados, señalando el peligro de una revolución comunista, Allende denunciaba el imperialismo y principalmente las maniobras de las corporaciones internacionales, llamando a la unión y la organización de los países explotados. El actual mandatario considera que la mejor manera de lograr la solidaridad de los países pobres es unirlos para combatir a un adversario común.

Nos interesa señalar esa diferencia, sin pretender extremarla: de hecho el Canciller Frei señaló enfáticamente a los Estados Unidos que sus intereses no coinciden con los de América Latina, e inversamente, Allende ha hecho esfuerzos para estrechar los lazos de Chile con el Pacto Andino, creado durante el período anterior.

Pero sí es interesante indicar ese cambio de orientación para destacar las virtualidades del pensamiento dialéctico en la estructuración de una estrategia política. La realidad internacional es concebida como un mundo en conflicto, dominado fundamentalmente por la dialéctica del poder, que se manifiesta en una serie de contradicciones. La primera tarea para la elaboración de una estrategia en vista de la liberación de los pueblos explotados consiste en identificar la contradicción y el enemigo principal, dejando de lado las contradicciones secundarias (las diferencias ideológicas entre los países subdesarrollados). Se tratará luego de aislar y denunciar al adversario principal (en este caso las corporaciones transnacionales), luchar contra él y reunir fuerzas para proseguir la lucha a nivel regional (América Latina) y mundial. En fin, la confianza de que las contradicciones serán superadas generando síntesis superiores permite encarar con firmeza las dificultades de la lucha.

La batalla por la nueva independencia no ha terminado; recién comienza. Todo hace pensar que deberá prolongarse tanto como la historia, que será una lucha permanente por la justicia a nivel internacional.

Enero-Febrero 1973

N O T A S

- 1) Decimos "en este sentido" porque en otros aspectos la dependencia de Chile ha aumentado: se han agotado las reservas internacionales, han disminuido las exportaciones y se ha casi cuadruplicado la suma destinada a importar alimentos.

- 2) Los 103 millones de dólares en ayuda financiera concedidos a Chile por los soviéticos están muy por debajo de los 187,8 millones otorgados a este Gobierno por el Fondo Monetario Internacional.

LA EXPERIENCIA CHILENA FRENTE A LAS ELECCIONES*

La reforma agraria y la polarización política

A partir del 4 de noviembre, el gobierno comienza a realizar su programa. El sector menos difícil de atacar era el campo: la ley de Reforma Agraria, dictada durante la administración de Frei, no sólo había eliminado las barreras jurídicas sino que había obtenido también el consenso de la mayoría del país. Jaques Chonchol, alto funcionario durante el gobierno de Frei, es el nuevo Ministro de Agricultura encargado de acelerar el proceso de cambio en la propiedad de la tierra: según el, había que hacer una reforma agraria "rápida, drástica y masiva." En dos años fueron expropiados 3 369 latifundios (5 334 541 hectáreas), mientras que durante los seis años de la administración de Frei se expropiaron solamente 1 408 latifundios (3 564 523 hectáreas).

Aunque el proceso se ha realizado sin demasiados conflictos, ha dado lugar a una creciente polarización política. La extrema izquierda, el MIR, que no forma parte de la U.P. quería que las expropiaciones continúen hasta la eliminación de toda propiedad privada en el campo. Algunos sectores de la U.P. temen que el proceso se detenga donde está, lo que permitiría la consolidación de una clase media agrícola que impediría la marcha hacia el socialismo. La derecha ha reaccionado organizando a los pequeños y medianos agricultores y defendiendo al máximo la propiedad privada de la tierra, a la cual los campesinos están muy apegados. La D.C. ha criticado el hecho de que se haya querido establecer granjas estatales, que serían rechazadas por los campesinos, y ha promovido por el contrario la propiedad privada o cooperativa de los fundos expropiados. La derecha y la D.C. se han opuesto a los métodos utilizados para la reforma, porque las indemnizaciones correspondientes no han sido pagadas siempre, pero sobre todo porque ciertos límites no han sido respetados: bajo el pretexto de "tomas" han sido expropiados fundos medianos y pequeños.

* El texto que sigue constituye el cuerpo de un artículo con el mismo título escrito en diciembre de 1972 y publicado en la revista Etudes (Paris) en febrero de 1973. La introducción y la conclusión las hemos incluido al comienzo y al final de este volumen.

El hecho es que la incertidumbre y el desorden han invadido el campo y que un 50% de las tierras expropiadas está sin explotar, según los cálculos del partido socialista. Se deberá por tanto importar alrededor de 450 millones de dólares en alimentos en 1973, alrededor de cuatro veces más que en 1970. Esta difícil situación agrícola contribuye a agudizar la crisis económica que vive el país y a acentuar la polarización de las fuerzas políticas.

En consecuencia, es posible que la reforma agraria aunque en su conjunto constituye una de las realizaciones más notables de la U.P. no constituya una fuente importante de apoyo electoral para Allende y los partidos marxistas. Los resultados de las elecciones de enero de 1972 en dos provincias agrarias parecen indicarlo. Los campesinos permanecen apegados a la propiedad privada de la tierra y hace falta una larga educación para hacerles apreciar las ventajas de un sistema socialista.

El cobre y la unidad nacional

El anti-imperialismo del programa de la U.P. se orienta a obtener una mayor independencia nacional, que debería ser alcanzada gracias a la diversificación del comercio exterior, pero sobre todo mediante la nacionalización de las riquezas mineras, principales fuentes de divisas. De hecho, el cobre, que representaba más del 70% de las exportaciones del país, estaba parcialmente controlado en 1970 por empresas norteamericanas. La "chilenización" promovida por Frei implicaba que el Estado tomaba el control del 51% de una de las grandes minas y del 25% de otras dos. Es cierto que al fin de su administración había negociado la nacionalización total, pero a largo plazo y en condiciones no muy favorables para el país. Esta situación, que coincidía con precios internacionales extraordinariamente elevados, permitió a las empresas norteamericanas obtener beneficios formidables (en ciertos casos llegaron a tasas de un 50% al año).

La nacionalización, que siguió un largo proceso legal, introdujo un nuevo principio para el pago de los capitales invertidos, un principio que tenía en cuenta las ganancias obtenidas: el gobierno quedaba autorizado para deducir los "beneficios excesivos"; en este caso, todos los que sobrepasaran la tasa del 12%, en los últimos 15 años. Aplicando este criterio, Chile no debía pagar sino las inversiones realizadas en los últimos años; fue así como las empresas norteamericanas debieron

renunciar a alrededor de 500 millones de dólares. En realidad, este criterio estaba conforme a la línea de los acuerdos del Pacto Andino (1), según los cuales las inversiones extranjeras no podrán tener una tasa de interés anual superior al 10%. Sin embargo, lo nuevo en el procedimiento era el efecto retroactivo de la disposición relativa a los beneficios excesivos. Nuevo y peligroso para los imperialistas, a tal punto que fuentes bien informadas han asegurado que los Estados Unidos estaban dispuestos a pagar el valor de las minas de cobre al gobierno chileno, con tal que éste pagara a su vez a las empresas norteamericanas. El peligro para los países capitalistas era que la nacionalización del cobre por Chile constituyera un precedente que pudiera ser seguido por otros países subdesarrollados; los países capitalistas, que no aceptarían jamás en el interior de su territorio tasas de interés superiores al 10%, no parecen aceptar de buena gana que se utilice el mismo criterio en el plano internacional. Los ataques de la "Kennecott" contra el cobre chileno exportado a Francia muestran los esfuerzos desesperados de las empresas norteamericanas por desanimar a cualquier país que quisiera seguir la "doctrina Allende".

Podemos preguntarnos ahora cuáles han sido los efectos de la nacionalización del cobre en el plano de la política de partidos. Para apreciarla, es necesario señalar dos hechos: en primer lugar, la nacionalización total del cobre se encontraba tanto en el programa de la D.C. como en el de la U.P.; en segundo lugar, la legislación que permitió la nacionalización fue aprobada en el Congreso por la totalidad de los parlamentarios, incluso los de derecha. Se podrá quizás afirmar que se ha asistido a uno de esos fenómenos de "recuperación" o "fagocitosis" mediante los cuales la derecha amortigua las conquistas de la izquierda, pero el hecho es que esta realización de Allende ha sido capitalizada también por los partidos de oposición: a pesar de la terrible polarización política, en torno a la nacionalización del cobre se ha producido la unidad nacional.

Pero hay otro hecho que ha quitado brillo a esta victoria del gobierno de Allende: a partir de la nacionalización, y a pesar de las grandes inversiones que se habían realizado, la producción de las grandes minas ha bajado. Esta baja de producción ha venido a agregar al brusco descenso de los precios internacionales del cobre, de manera que las ganancias que proporciona el cobre son muy inferiores a las que se obtenían antes de la nacionalización. Por otra parte, a la baja de producción se han agregado importantes déficits de las empresas, que pesan sobre el presupuesto del Estado.

Como esta situación es igual a la que existe en otros sectores nacionalizados (por ejemplo, en las minas de salitre), los partidos de oposición han encontrado muy buenos argumentos para criticar la gestión del gobierno. La nacionalización del cobre - como la del salitre, fierro y carbón - puede no producirle a la U.P. los beneficios electorales que ella esperaba. Desde un punto de vista más general, considerando la situación chilena, se podría afirmar que las nacionalizaciones no producen grandes beneficios inmediatos; será necesario esperar para apreciar sus resultados.

Los bancos y el ataque contra la burguesía financiera

Entre las primeras medidas tomadas por el gobierno de Allende, es necesario mencionar las que permitieron la "nacionalización" casi total de los bancos privados. De hecho, el Estado cumplía ya en 1970 un rol preponderante en el funcionamiento de la economía chilena: controlaba la mayor parte de los créditos a largo plazo, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera; en cuanto a los créditos a corto plazo, el Banco del Estado controlaba alrededor de un 53%. Se consideraba, sin embargo, que la estatización total de los bancos era indispensable, no sólo para impedir al capitalismo financiero que acaparara grandes ganancias, sino también para dar una sólida base financiera a las empresas del Area Social de la economía. Los grandes grupos industriales estaban todos estructurados en torno a los bancos privados.

La manera de proceder fue en este caso muy diferente de la que se utilizó para la nacionalización del cobre. Se anunció que se enviaría al Parlamento un proyecto de la ley para "nacionalizar" los bancos, y la D.C. respondió que daría en principio su acuerdo, pero insistiendo en que no aceptaba que los bancos estuvieran enteramente controlados por el Estado, sino por sus trabajadores y usuarios. Sin embargo, el "acuerdo en principio era suficiente para que la U.P. pudiera obtener una ley que no se opusiera a su programa, dado que el sistema chileno permite al Presidente de la República imponer su veto si cuenta con un tercio del Parlamento. Se daba este caso. El gobierno prefirió con todo tomar una "vía cortada": aprovechando las atribuciones de la CORFO, (2) el Estado compró las acciones de los bancos privados, nacionales y extranjeros, llegando con frecuencia a acuerdos con los grandes accionistas. Hoy día el Estado controla todos los bancos del país.

Las críticas de la oposición no han faltado. La derecha insistía en que no se había pagado un precio justo por las acciones y señalaba que todas las empresas priva-

das estaban de ahora en adelante amenazadas por el control del crédito. La D.C. insistía en que las compras habían sido anárquicas y favorecían a menudo a los grandes financistas, nacionales y extranjeros, y señalaba que el control absoluto del Estado no daba garantías de una verdadera democratización del crédito. Los trabajadores bancarios, la mayoría de los cuales apoya a la oposición, no fueron consultados. Por lo demás - como en el caso del cobre - desde que comenzaron a ser regidos por el Estado los antiguos bancos privados ya no han producido ganancias; lo que ha dado nuevos argumentos a la oposición. La causa de los déficits parece ser la política seguida respecto a la tasa de interés: el gobierno la ha bajado para tratar de detener la inflación, pero como ésta ha continuado e incluso se ha acelerado, los bancos no han podido recuperar el valor real de las sumas que prestaban.

Los bancos ya no están al servicio de la gran burguesía y la democratización del crédito comienza a ser puesta en marcha; pero por el momento la nacionalización pesa sobre todos los chilenos, en la medida en que los déficits bancarios son cubiertos por el Estado, quien debe hacer girar más rápido la máquina de fabricar billetes, lo que alimenta la inflación.

Las consecuencias de estas transformaciones en el plano electoral no son fáciles de discernir: es probable que los partidarios de la U.P. confirmen su apoyo, ya que al fin se le ha propinado un golpe duro al capitalismo; pero es igualmente probable que el electorado flotante sea más sensible a las consecuencias circunstanciales de estas transformaciones: en este caso, al aumento de la tasa de inflación.

Las industrias y la "vía legal"

La reforma industrial o, en otros términos, el establecimiento de un "área social" de producción, no ha seguido sino parcialmente el camino recorrido por la nacionalización de los bancos. En primer lugar, el gobierno tardó mucho en delimitar las empresas que debían permanecer en cada sector: social, mixto o privado. En este sentido, una de las consignas fundamentales de los teóricos de la transición no ha sido puesta en práctica. Sólo a fines de 1971 - más de un año después de la toma del poder Allende anuncia que las empresas que permanecerán en el sector privado serán aquellas que no alcanzan cierto nivel de capital. Sin embargo el proceso de expropiaciones había comenzado mucho antes: el 2 de diciembre de 1970, antes de cumplir un mes de gobierno, el Presidente anunciaba la expropiación de una industria textil.

A esta industria se sumarían pronto muchas otras.

La razón de este procedimiento poco sistemático es el tipo de poder que posee Allende: dueño del Ejecutivo, muy fuerte en Chile, no cuenta más que con una minoría del Parlamento para hacer aprobar un proyecto de ley. Ahora bien, la D.C. estaría dispuesta a aprobar la expropiación de las grandes industrias, con tal que se convirtieran en empresas de autogestión, según el modelo yugoeslavo. Pero los demócratacristianos no proponen solamente otro modelo de socialismo: intentan también luchar contra el poder absorbente del Estado, controlado actualmente por la U.P. Por su parte, la Unidad Popular teme que el proyecto de ley naufrague en los debates parlamentarios, teme que el modelo de autogestión pueda conducir a una nueva forma de capitalismo, teme - por último - no contar con el poder que le proporciona el control absoluto de las industrias expropiadas.

Allende y sus ministros deciden por lo tanto seguir otro camino: en la medida de lo posible, se trataría de comprar las empresas, pero en otros casos - los más numerosos - se utilizará el poder obrero. Al redescubrir un antiguo decreto de 1932 - año durante el cual Chile constituyó durante algunos meses una "república socialista" - el gobierno descubrió que disponía de una valiosa arma legal. Este decreto, que estaba todavía en vigor, permitía en ciertas circunstancias practicar la "requisición" o la "intervención" de las industrias. Pues bien, los mecanismos administrativos y el poder obrero se han encargado de encontrar o crear estas condiciones. Dado que los marxistas controlan la mayor parte de los sindicatos industriales, bastaba que un conflicto laboral desembocara en la ocupación de una fábrica para que la "intervención" pudiera producirse. Aunque el estatuto legal de las empresas intervenidas o requisadas es solo provisorio, el gobierno y los dirigentes obreros han insistido en que las empresas no volverán jamás a sus antiguos propietarios: el proceso es irreversible.

Ahora bien, la irreversibilidad del proceso no se funda en las declaraciones de los dirigentes sino en el espíritu espontáneamente socialista de la clase obrera. De hecho, aun los trabajadores que militan en la oposición se negarían a echar marcha atrás, lo que significa que más de 250 grandes empresas, cuya producción equivale a alrededor de un 50% de la producción industrial, no volverán nunca a los capitalistas privados.

¿Cuáles han sido las consecuencias de esta "reforma industrial" en el plano de la política de partidos? Para la extrema izquierda - el MIR y ciertos grupos al interior de la U.P. - el procedimiento es válido pero demasiado tímido: no se ha aprovechado todo

el dinamismo que podía dar la movilización popular. El MIR ha atacado muy duramente al partido comunista, calificándolo de reformista y burocrático. Por su parte los comunistas han reaccionado violentamente: según ellos el MIR y los grupos extremistas de la U.P. son en la práctica aliados de la derecha porque por su política voluntarista y espontaneísta provocan reacciones, aun en los medios populares. Desde hace ya varios meses los comunistas tratan de controlar el proceso y de no estimular las "tomas" de empresas que no se hallen en el cuadro del programa. Ellos tratan de dar un mínimo de eficacia a la gestión económica. Ahora bien, la movilización de la clase obrera - o la "vía de los hechos" como también se la ha llamado - ha provocado reacciones de desconfianza absoluta en sectores que no deberían ser tocados por el programa de la U.P.: pequeños y medianos agricultores, comerciantes y empresarios.

Las reacciones de la derecha han sido muy duras: se ha esforzado por todos los medios de demostrar que el gobierno ya no respeta las leyes, que ha trasgredido la Constitución, que ha dejado de ser un gobierno legítimo. Los "resquicios" legales que utiliza la U.P. no serían sino fraudes para evadir la ley; las "intervenciones" y "requisiciones" serían simplemente robos. La derecha ha llegado a movilizar a las organizaciones de comerciantes y de industriales para combatir la "vía de los hechos" llevada adelante por el gobierno: ha nacido la "resistencia civil". Veremos más adelante cómo se ha manifestado en las "grandes huelgas" de octubre.

En fin, la D.C. insiste en que no quiere ni la devolución de las empresas a los antiguos patrones, ni la formación de un sistema industrial absolutamente controlado por el Estado, rígido y centralizado. Propone que la formación del "área social" - que debería funcionar por el sistema de autogestión, excepto en el caso de los recursos esenciales y de los servicios públicos - se realice por medio de una legislación específica, fruto de un consenso de la mayoría del pueblo. La U.P., que ha considerado hasta ahora este procedimiento como demasiado legalista y demasiado lento, parece actualmente inclinada a encontrar una fórmula de acuerdo. Los grandes déficits que dejan las empresas estatizadas de hecho han desmovilizado a muchos sectores de la clase obrera, que ya no estarían dispuestos a facilitar cualquiera "intervención" o "requisición".

Libertad de información y democracia

Los enfrentamientos que han surgido respecto a la libertad de prensa y al pluralismo de los medios de comunicación social han sido quizás más encarnizados que aquellos provocados por las expropiaciones de industrias. Para el extranjero que visita Chile le parece que el problema no existe: Los diarios y las radios de oposición hacen circular toda clase de noticias y comentarios; el lenguaje utilizado se aleja incluso de las buenas costumbres. Entonces, ¿dónde está el problema?

Para comprender la situación hay que tener en cuenta la historia reciente. En el momento en que llegó al poder, la U.P. no controlaba más que 15 o 20% de los diarios y radios. Estas, muy numerosas, se encuentran generalmente en manos de empresas privadas (en Santiago, por ejemplo, se pueden escuchar 25). La U.P. ha intentado extender su influencia en los medios de comunicación de masas. Respecto a la televisión, su progreso ha sido considerable: el canal nacional - el único que cubre todo el país - está ahora al servicio de la U.P.; en él la oposición sólo puede expresarse en dos programas semanales (cultura y debate político) en el que participan representantes de todos los partidos. La situación es aproximadamente la misma en la cadena que depende de la Universidad de Chile, que alcanza a Santiago y Valparaíso, las dos ciudades principales del país. En estas ciudades existe un tercer canal, bastante pluralista, que depende de las universidades católicas y está controlado por la D.C. En cuanto a la prensa y las radios, la U.P. se ha servido de la publicidad para acrecentar su poder: las empresas del "área social" no conceden su publicidad sino a los medios de comunicación favorables al gobierno. En fin, el Estado ha tomado directamente en sus manos la edición de numerosos libros y revistas, para diversos tipos de público.

Después de dos años de gobierno, la izquierda controla según parece - alrededor de 75% de la televisión y 40% de la prensa y radio. Se está pues muy lejos de un régimen totalitario; se puede incluso afirmar que los medios de comunicación son ahora más representativos de la opinión pública que hace dos años. Sin embargo, los partidos de oposición han visto en estas transformaciones una escalada marxista que podría acarrear el fin de la democracia y el comienzo de una dictadura. El problema permanece planteado: ¿cómo puede el Gobierno mantener la representatividad y el pluralismo en los medios que controla si, al mismo tiempo, la mayoría de las radios y diarios dependen de los capitalistas privados?

La coyuntura económica y su impacto electoral

Hasta aquí nos hemos limitado a señalar las principales transformaciones estructurales que han sido realizadas en los dos últimos años, y la influencia que podrían tener en el plano político. Ahora bien, es muy probable que desde el punto de vista electoral - las características de la coyuntura económica sean más determinantes que los cambios estructurales. Esto parece válido al menos para el electorado flotante, que no forma parte de la clientela tradicional de un partido o tendencia política; en el caso de Chile, estos electores representan aproximadamente un 20% del total.

Pues bien, la coyuntura económica se ha deteriorado mucho desde hace un año, y es posible que llegue a ser aun más crítica. La situación del comercio exterior es angustiante. Ya hemos señalado que el precio internacional del cobre ha bajado mucho, lo que implica una menor disponibilidad de divisas de aproximadamente 200 millones de dólares al año con respecto al período de Frei; es mucho para un país pobre. A esto se agrega la fuerte disminución de los préstamos norteamericanos, la ausencia de inversiones extranjeras, la necesidad de importar una mayor cantidad de alimentos y la baja de las exportaciones.

En el plano interno, la expansión de la demanda y la falta de confianza han provocado una inflación galopante (130% en diez meses) y una extrema escasez de casi todos los productos esenciales: las largas colas podrían ser hoy día símbolo del país.

La oposición crítica al gobierno, en quien ve al principal responsable de este caos. Allende responde que se está en guerra contra la burguesía internacional y nacional, y que su espíritu reaccionario es la causa fundamental de la crisis económica. Como quiera que sea, es evidente que la falta de confianza se ha extendido, paralizándolo el ahorro y las inversiones y provocando una locura de acaparamiento.

En estas condiciones, no ofrece dudas que la U.P. perderá votos en las próximas elecciones. Los partidarios de Allende, que representaban 36% del electorado en 1970 y 49% en abril de 1971, no creen poder sobrepasar el umbral del 40% en marzo de 1973. No sería demasiado grave, ya que otros presidentes han gobernado a Chile con un apoyo parlamentario mucho más reducido. El verdadero riesgo que corre Allende es el de no conservar un tercio del Parlamento, lo que le haría perder su derecho a veto; pero es muy poco probable que esto ocurra. De todas maneras, el hecho de llevar adelante un proceso revolucionario con el apoyo de una minoría - por im-

portante que sea - no dejará de plantear problemas a la U.P.

Estrategias de la izquierda, centro y derecha

Hemos intentado hasta aquí mostrar la reacción de las diferentes fuerzas políticas frente a los principales acontecimientos de la experiencia chilena. Quisiéramos situar estas reacciones dentro de la estrategia global adoptada por cada uno de los partidos.

La estrategia de la alianza de clases bajo la dirección del proletariado, que permitió la formación de la U.P. y el triunfo de Allende, fue "legitimada" al comienzo de este gobierno por una política de redistribución masiva de ingresos, provocada por un alza muy generosa de salarios y sueldos. Esta política, que venía a agregarse a la euforia del triunfo, estuvo a punto de dar a la izquierda la mayoría absoluta de los votos a comienzos de 1971, lo que le habría permitido disolver el Parlamento y cambiar la Constitución por medio de un plebiscito. En esa época la derecha acababa de salir del terror que ella misma había provocado y la D.C. intentaba reagrupar sus fuerzas después de algunos intentos frustrados de colaborar con la U.P.

Las vacilaciones de la izquierda, que no estaba segura de triunfar en un plebiscito, permitieron a la D.C. poner en marcha lo que se ha llamado "la estrategia de los mariscales rusos" (la que provocó la derrota de Napoleón y de Hitler): no enfrentar al adversario cuando éste dispone de la plenitud de poder; replegarse hasta Moscú hostigando al enemigo para gastarlo y hacerle perder su moral; cuando llega el invierno de los errores, de la falta de cohesión, de la pérdida de prestigio frente al pueblo), entonces pueden iniciarse los preparativos para la gran batalla. Para los demócratacristianos Moscú era la Constitución, las libertades públicas. La derecha, que al comienzo del gobierno soñaba solamente con un golpe de estado, se plegó a esta estrategia dando su apoyo a la D.C. Una elección complementaria en julio de 1971, en que el candidato oficialista fue derrotado, mostraba la eficacia de esta estrategia.

La U.P. comprende entonces que no tiene mucho que esperar de la vía electoral y decide atacar por medio de los "resquicios legales" y la movilización popular: la aceleración de la reforma agraria y las expropiaciones de bancos e industrias son las manifestaciones más relevantes de esta estrategia. La izquierda conquista una presa con este ataque: la "izquierda Cristiana", fracción de la D.C. descontenta de la alianza con la derecha, deja su partido de origen y adhiere a la U.P.

Sin embargo el contra-ataque no se hace esperar: la oposición proclama que al utilizar los "resquicios legales" Allende ha sobrepasado su programa (que podría ser calificado de social-demócrata) y entra en la vía marxista; los marxistas deberían por lo tanto abandonar la U.P. Es lo que de hecho sucede; después del triunfo de la oposición en unas elecciones parciales, una fracción del partido radical abandona la coalición de la izquierda.

Comienzos de 1972: la coyuntura económica se deteriora muy rápidamente. El partido comunista piensa que es necesario continuar la marcha, pero que hace falta también consolidar todas las conquistas: hacer producir las tierras y las fábricas expropiadas, organizar la participación de los trabajadores, inspirar confianza a los pequeños y medianos empresarios. La extrema izquierda se rebela contra esta táctica "tibia y reformista": el MIR se alejará cada vez más de la U.P. atrayendo a los sectores más revolucionarios del partido socialista. Sin embargo Allende, aun siendo socialista, apoya el punto de vista del P.C. e inicia conversaciones con la D.C. Con todo las perspectivas electorales se imponen y este partido rompe bruscamente el diálogo.

Es entonces cuando la derecha toma la iniciativa. Ella ha capitalizado una buena parte del descontento engendrado por el clima de desorden y se siente capaz de movilizar a las organizaciones de pequeños y medianos comerciantes y empresarios, así como a amplios sectores de la clase media. En octubre estalla una huelga de camioneros, que será pronto seguida por los comerciantes y por muchos otros sindicatos de la pequeña burguesía. El país queda semi paralizado por esta huelga de 26 días, la más grave de la historia del país. La derecha quería la destitución de Allende, pero éste cuenta con el apoyo de la mayor parte de la clase obrera organizada. Por otra parte la D.C. quería cambios en la política de Allende, pero no su destitución: ésta implicaría el fin del sistema democrático, un fracaso para la misma D.C. La correlación de las dos fuerzas es tan equilibrada que ninguno de los dos adversarios puede lograr una victoria definitiva. Los militares entran entonces a zanjar, aceptando ciertos ministerios "para restablecer la tranquilidad pública".

Un nuevo grupo de presión aparece en la escena. La presencia de los militares en el gobierno es un golpe muy duro para los extremistas de izquierda y de derecha. Para la U.P. esa presencia asegura la continuidad de una política anti-imperialista, anti-monopólica y anti-latifundista, pero es un obstáculo si se quiere avanzar hacia el socialismo mediante los "resquicios legales": la mayoría de los generales chilenos no son marxistas. Los más satisfechos con la solución encontrada parecen ser los

comunistas y los demócratacristianos. Sin embargo, no se sabe si las Fuerzas Armadas querrán comprometerse por mucho tiempo con la U.P. dado el rápido deterioro de la situación económica.

A través de todas las peripecias estratégicas y tácticas se ha podido observar que aparecen siempre tres constantes: la voluntad del pueblo de realizar transformaciones estructurales; su apego a las elecciones, a la legalidad y a las libertades públicas; y la fuerza de las organizaciones populares, sea de la clase obrera, sea de las clases medias. Esta extraña combinación está en la base de la complejidad del proceso chileno.

Enero - Febrero 1973

LAS ELECCIONES PARLAMENTARIAS: UN DESEMPATE SORPRENDENTE

Después de haber animado a sus partidarios a "conquistar el Parlamento para el pueblo" o a "ganar los dos tercios", Gobierno y oposición "bajaron las varillas" para que su salto pareciera más alto: la U.P. consideró "buena" una votación que superara la de 1970; la CODE (Confederación de la Democracia) señaló que le bastaría una mayoría clara y contundente. Por una y otra parte se trataba de movilizar inicialmente a sus fuerzas por medio de perspectivas optimistas, pero ya en vísperas de la votación - cuando todos los electores estaban decididos - se asumió una actitud mesurada y modesta, útil para destacar posteriormente el éxito obtenido y mantener el entusiasmo de las bases.

La campaña: slogans y contenido político

Este cambio de lenguaje en los pronósticos no es más que una de las manifestaciones características de un proceso electoral: en todo el proceso, a pesar de sus posibles buenas intenciones, los candidatos son actores que deben representar un papel y convencer a su auditorio. La realidad, los hechos objetivos y las verdaderas intenciones aparecen poco en los discursos y programas.

Los principales mecanismos que se usan para deformar la realidad son los slogans o estereotipos y por otra parte las "falsas totalidades", logradas mediante silencios u omisiones. Nos limitaremos a señalar algunos ejemplos a partir de los planteamientos de las diversas candidaturas.

La Derecha jugó constantemente con el slogan de lo "nacional". Los otros grupos políticos, especialmente el partido comunista, serían los propagandistas de "ideologías foráneas", mientras que ella sería auténticamente chilena. La Derecha no explica en qué consiste su "nacionalismo": se limita a señalar que "Chile fue en el pasado la primera nación de Sudamérica; la primera en cultura, industrias, agricultura y minería . . ." ¿Significa esto que para solucionar nuestros problemas debemos volver al pasado? Y si ese pasado se caracterizó porque existía una "iniciativa creadora" ¿no se está aludiendo con eso al individualismo liberal, a una ideología internacional, tan "foránea" como el marxismo? Por otra parte, la Derecha no menciona que las ideas socialistas comenzaron a desarrollarse en Chile ya a mediados del siglo XIX y que el partido comunista tiene en Chile más de 50 años de existencia; un partido que

durante más de medio siglo ha recibido un importante apoyo popular, ¿no podría calificarse de partido "nacional"?

Otro de los slogans utilizados por la Derecha fue el de la "firmeza". Si por este término se entiende una voluntad de defender a la propia clientela frente a los adversarios, nadie podría sorprenderse de que un partido político lo asuma como uno de sus lemas. Pero la "firmeza" como programa político sólo significa una voluntad de orden, de mantener el orden existente, de no cambiar nada sustancial en la sociedad. La "firmeza" constituye una expresión de un proyecto conservador que ni siquiera admite la ductibilidad del Gattopardo ("es necesario que todo cambie para que todo continúe igual"). Como en el caso del "nacionalismo" de la Derecha, la "firmeza" es un signo de que se olvida el futuro, y la realidad presente sólo se interpreta como una añoranza del pasado. Que esta "firmeza" sin horizontes pueda ser rentable electoralmente es uno de los fenómenos que trataremos de explicar más adelante.

En cuanto a la Democracia Cristiana, uno de los temas de la campaña fue la "integración nacional": se trataría de "integrar a los chilenos y no dividirlos por el odio", de "no quebrar la nación ni dividirla", de "integrar a Chile" ya que "los chilenos no somos enemigos". Si la unidad nacional se entiende como el reconocimiento de que todos los chilenos tienen cierta comunidad de costumbres y hábitos, de raza, lengua y religión; que todos comparten una historia y un territorio; que todos los ciudadanos tienen y deben tener una solidaridad básica ya que viajan todos en un mismo barco, entonces el tema de la integración nacional tiene sentido. Pero si hablar de integración implica negar los conflictos de intereses y de clase, si se pretende que lo único que divide a los diversos sectores es un odio injustificado, la "integración nacional" pasa a convertirse en una falsa totalidad, en un slogan. De hecho durante la campaña los llamados a la unidad de los chilenos en el sector DC silenciaron los conflictos, no dijeron que el camino a la igualdad social supone el sacrificio de los sectores altos y medios en beneficio de los más pobres.

El segundo gran tema de la DC, el más controvertido, fue el de la llamada "reconstrucción nacional". La reconstrucción sería necesaria porque el país se encuentra ante una agricultura destruida, una industria en crisis, una minería decadente. Al nivel del lenguaje electoral hablar de reconstrucción era útil: se comparaban así los errores del Gobierno a un terremoto que hubiera destruido el país. Pero reconstruir significa realizar una tarea económica, social y política. Ahora bien, sobre la

forma de realizar esta triple tarea se decía poco o nada: la reactivación económica ¿implicaría estimular las inversiones privadas, nacionales y extranjeras? ¿La reordenación implicaría echar pie atrás en la redistribución de los ingresos, favorecer a los sectores medios tanto o más que a los sectores de bajos ingresos? ¿La nueva "sociedad de participación" se construiría en alianza con la Derecha, enfrentando la oposición de la mayor parte de la clase obrera organizada y de sus partidos? Dar respuesta a estas y otras interrogantes habría significado convertir "la reconstrucción" en algo más que un slogan, en un programa de gobierno. Y en ese momento se habría hecho evidente que un programa de Gobierno era anacrónico en unas elecciones parlamentarias, faltando aún un largo trecho para la renovación del Ejecutivo.

En fin, también en la campaña de la Unidad Popular se puede señalar el recurso a slogans, a simplificaciones y a silencios. Tal vez uno de los temas más constante fue el de la intransigencia revolucionaria: "Chile continuará - y que lo sepan - irreductiblemente su marcha hacia el socialismo", afirmó Allende, y con frecuencia se insistió en que el resultado de la elección no haría cambiar en absoluto la política del Gobierno. En un régimen democrático esta intransigencia no tiene sentido y la UP sabe muy bien que - sin abandonar su programa - sólo podrá cumplirlo en la medida en que cuente con apoyo popular. Por lo demás quien conoce las bambalinas de la política nacional no ignora que los compromisos son permanentes e ineludibles. La retórica de una campaña puede exigir una apariencia inmovible; detrás de la careta la realidad es muy diferente.

Otro de los temas importantes en la campaña de la UP fue "el poder para el pueblo". La primera tarea de la llamada "plataforma de la victoria" decía: "Conquistar todo el poder para la clase obrera, los trabajadores y el pueblo". ¿Quiénes son estos trabajadores, quién es este pueblo? ¿Son todos los que viven de su trabajo o solamente ciertos sectores? ¿Forman parte del pueblo los trabajadores que apoyan a los partidos de oposición? ¿También para ellos hay que conquistar todo el poder? Si no se explicita qué se entiende por "poder popular" es fácil caer en el slogan, olvidar el contenido político. Pero ¿se le puede pedir algo más a una campaña electoral?

¿Quién ganó las elecciones?

Si de la campaña pasamos a los resultados, nos encontramos frente al problema de siempre: Todos se autoproclaman ganadores.

Algunos comentaristas han comparado la elección a un partido de fútbol: gana el que mete más goles. Vistas así las cosas, es indudable que triunfó la oposición: obtuvo un 54,7% contra 43,4% de la UP. Fue una victoria clara, amplia, que permitió a los dirigentes de la CODE afirmar con razón que se había roto el empate político de 1971. En esa ocasión la UP había alcanzado un 48.6% frente a un 48,2% de sus adversarios.

Sin embargo la satisfacción ante los cómputos fue mucho mayor en la Izquierda que en la oposición: a pesar de no haber logrado la victoria, la UP había obtenido una votación superior a sus mejores previsiones, y por supuesto mucho más alta de lo que esperaban sus adversarios. Además, comparando con la elección presidencial de 1970, la UP había avanzado 7 puntos, resultado sorprendente si se tiene en cuenta la grave crisis económica que ha vivido el país.

Por otra parte, si se consideran los parlamentarios elegidos, la UP aumentó su representación en 2 senadores (de 18 a 20) y 6 diputados (de 57 a 63). La CODE, en cambio conserva la satisfacción de controlar ambas cámaras, con 30 senadores y 87 diputados.

Es sabido que las elecciones parlamentarias no se ven afectadas ni por el localismo de las elecciones municipales ni por el personalismo de las presidenciales: por eso resulta particularmente interesante comparar su evolución en porcentajes. En 1969 la Izquierda (UP + USP, considerando 2/3 de los radicales) obtuvo un 40,2%; ahora sube a 43,7%. Vale la pena señalar también que la votación de los partidos marxistas subió de 30,3 a 37,7%, incluyendo naturalmente la del MAPU y de la IC.

Si analizamos la votación de los diferentes partidos, tenemos los siguientes resultados en (%):

| | Parlamentaria 1969 | Municipal 1971 | Parlamentaria 1973 * |
|--------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| CODE | - | - | 0,8 |
| PDC | 29,8 | 25,7 | 29,1 |
| PN | 20,0 | 18,1 | 21,3 |
| DR | - | 3,9 | 2,3 |
| PIR | - | - | 1,8 |
| PADENA | 1,9 | 0,5 | 0,4 |
| UP | - | - | 0,9 |

| | <u>Parlamentaria 1969</u> | <u>Municipal 1971</u> | <u>Parlamentaria 1973 *</u> |
|------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| PS | 12,2 | 22,3 | 18,7 |
| PC | 15,9 | 16,9 | 16,2 |
| PR | 13,0 | 8,1 | 3,7 |
| MAPU | - | - | 2,5 |
| IC | - | - | 1,2 |
| API | | | 0,8 |
| USP | 2,2 | 1,0 | 0,3 |

Como se puede observar, fuera del gran descenso del PR las otras diferencias porcentuales no son muy notables. En la oposición el PN progresa un poco más que el PDC; en la UP el PS pierde votos, pero sigue siendo el partido numéricamente más importante, con un gran avance respecto a su votación en las anteriores elecciones parlamentarias.

Se se considera el número de parlamentarios se obtiene el siguiente cuadro:

| <u>Senadores</u> | <u>Antes</u> | <u>Ahora</u> |
|------------------|--------------|--------------|
| DC | 20 | 19 |
| PN | 5 | 8 |
| PIR | 5 | 3 |
| DR | 2 | 0 |
| PS | 4 | 7 |
| PC | 6 | 9 |
| PR | 3 | 2 |
| IC | 2 | 1 |
| API | 1 | 0 |
| USP | 2 | 1 |

| <u>Diputados</u> | <u>Antes</u> | <u>Ahora</u> |
|------------------|--------------|--------------|
| PDC | 47 | 50 |
| PN | 33 | 34 |
| PIR | 9 | 1 |
| DR | 4 | 2 |
| PS | 14 | 28 |
| PC | 22 | 25 |
| PR | 12 | 5 |
| IC | 9 | 1 |
| MAPU | - | 2 |
| API | - | 2 |

Las cifras indican que el gran ganador fue el PS, que vió aumentada su cuota en 3 senadores y 14 diputados; los grandes perdedores, la IC y las tres fracciones radicales.

Algunas explicaciones

El crecimiento de la votación de la CODE no parece exigir explicaciones muy sofisticadas: una parte del electorado que apoyó a la U.P. en 1971, que en consecuencia creía en su programa, se ha desilusionado de los métodos empleados o de los resultados obtenidos. La crisis económica, particularmente la escasez y la inflación, deben haber contribuído a desanimar a esos votantes. Es posible también que ciertos sectores de la clase media - que se ha visto afectada por diversas medidas tomadas por el Gobierno - hayan dado su apoyo a la oposición. El clima de desorden favoreció sin duda al partido del orden, de la "firmeza". La D.C. en cambio puede haber capitalizado los votos de los que querían reformas estructurales, pero sin un costo social tan elevado; en este sector podrían ubicarse muchas mujeres que han sufrido particularmente las consecuencias de los problemas económicos y que no se inclinan hacia posiciones rígidas que podrían llevar a un enfrentamiento.

Más interesante resulta intentar explicar la alta votación de la U.P., sorprendente, si se tiene en cuenta los problemas que ha vivido el país. Habría sido razonable pensar que con la escasez, el mercado negro, la inflación y las colas, al menos todos

todos aquellos que no votaron por Allende en 1970 tampoco le darían su voto a la U.P. en 1973. Y no fue así. La principal razón de este éxito de la izquierda parece ser la voluntad de cambios estructurales de una gran parte de la población. En 1970 los que querían avanzar veían ante sí dos caminos; en 1973 una de estas vías les pareció a muchos impracticable debido a la alianza de la D.C. con la derecha: estos electores no veían en la CODE una alternativa viable para realizar cambios sociales. Las reformas estructurales realizadas, la redistribución de los ingresos y los esfuerzos del Gobierno por favorecer a los sectores más modestos deben haber convencido a muchos de que valía la pena aceptar sacrificios con tal de superar al fin las injusticias del sistema capitalista. Esta voluntad de sacrificio, esta capacidad de aguante, puede haberse fortalecido a partir de octubre, cuando quedaron de manifiesto las intenciones golpistas de la derecha.

Por otra parte la aceleración de la reforma agraria permitió a la U.P. avanzar en el campo, como lo comprueban las cifras de la votación socialista y comunista en las provincias agrarias. Las posibilidades que da el poder y particularmente la mayor influencia de la izquierda en el control de los medios de comunicación de masas deben haber contribuido a que la U.P. obtuviera una alta votación. En fin, los 800.000 nuevos inscritos (18% del total), en su mayoría analfabetos o jóvenes de 21 años, pueden también haber colaborado a la elevada votación de la izquierda.

Posibles consecuencias

Los dirigentes políticos recién empiezan a sacar conclusiones y planear el futuro, de manera que es difícil prever las consecuencias de esta elección; se pueden sin embargo señalar desde ya algunas pistas importantes.

Es indudable que la elección fortaleció el sistema democrático chileno; no sólo el electorado aumentó en un 20% respecto a 1971, sino que la abstención (18,2%) fue la más baja de los últimos decenios en este tipo de elecciones; ante la importancia de la lucha ambos bandos movilizaron intensamente a sus partidarios. Se puede por lo tanto pensar que la amenaza de una guerra civil se ha alejado y que los chilenos seguirán resolviendo sus diferencias por medio de la democracia representativa.

La normalidad de la elección, a pesar de los infaltables reclamos, deja en claro que el nuevo Parlamento elegido representa la voluntad del pueblo chileno. La izquierda ya no podrá objetar que el Parlamento refleja una mayoría espuria y deberá tomarlo en

cuenta en el período que se inicia. Por otra parte, la gravedad de la crisis económica que vive el país hace aconsejable un entendimiento básico con algunos sectores de la oposición. Los militares - árbitros de la contienda - mirarán con simpatía semejante actitud conciliadora.

El éxito electoral de la U.P. demuestra que la "vía chilena" sigue abierta; la posición del P.C. sale reforzada y esto puede contribuir a calmar las impacencias de los otros partidos marxistas. Si el Gobierno logra levantar la producción agrícola y mejorar la gestión de las grandes minas y de las empresas del área social, tiene buenas posibilidades de aumentar su cuota electoral y ganar un nuevo mandato presidencial.

En cuanto a la oposición, las pretensiones de la derecha de destituir a Allende y de ganar el liderato de la CODE han quedado definitivamente descalificadas. El PN debe ahora resignarse a esperar que el actual Presidente termine su período y a apoyar en 1976 al candidato que la D.C. designe. En fin, los dirigentes demócratacristianos se encuentran frente a un dilema: saben que con la derecha podrían ganar una elección presidencial, pero les sería imposible gobernar ya que sus bases obreras y campesinas los abandonarían rápidamente. Esta perspectiva parece indicar que sería conveniente para la D.C. virar hacia la izquierda, reabrir el diálogo con el gobierno, proponer cambios progresistas y elaborar un programa que le permita movilizar a los sectores populares.

Las elecciones parlamentarias permitieron alejar la amenaza de una guerra civil; el pueblo espera que su madurez cívica sea premiada con un período de progreso y de paz.

Marzo-Abril 1973

N O T A S

- * Para el cálculo de estos porcentajes no se consideraron los votos blancos y nulos.
La votación sube, por lo tanto a 55,7% para la CODE y a 44% para la UP.

EL TRASFONDO DEL REAJUSTE

"¡Que paguen los ricos!" "¡Suelten la plata momios marxistas!" El lenguaje guerrillero de la prensa, cada vez más exacerbado, no ha excluido el problema del reajuste. Los diarios informan cada vez menos; sus artículos - y más aún sus titulares - se han convertido en armas de combate. Esta "histeria periodística - para usar la expresión de un observador mexicano - impide cada vez más al lector llegar al fondo de los problemas. ¿Será posible abrirse camino por esta selva de informaciones parciales y apasionadas?

Reajustes, bonos y anticipos.

Un diálogo difícil

La "nueva política económica", iniciada por el Gobierno a mediados de 1972, se proponía - entre otras cosas - tender a la estabilidad desde un punto de equilibrio más alto. Se llegó incluso a hablar de que, por primera vez, un Gobierno autorizaría primero las alzas y luego otorgaría el reajuste, salvando así el poder de compra de los asalariados. Los meses posteriores han demostrado que las esperanzas de estabilidad tenían poco fundamento: las últimas cifras dadas a conocer por el Banco Central señalan que el índice de precios al consumidor (I.P.C.) ha subido en un 60% en el semestre transcurrido entre el 1º de octubre de 1972 y el 31 de marzo de 1973. El poder de compra de los asalariados ha bajado, pues, notablemente.

El ritmo galopante de la inflación ha obligado al Ejecutivo a buscar una fórmula compensatoria para los asalariados, sin esperar que se cumpla el plazo tradicional de 12 meses. Se llegó a un acuerdo con la Central Unica de Trabajadores (CUT) para dar una compensación cada cuatro meses. En enero el Gobierno ofreció un bono de ₡ 800, pero este fue rechazado. Se propuso entonces un anticipo de reajuste para el período octubre-enero, durante el cual la inflación había llegado a un 45,4%. El proyecto que se envió al Parlamento caracterizaba al "anticipo" como un término medio entre un reajuste y un bono: se aumentarían los sueldos y salarios en un 45,4% en la medida en que fueran iguales o inferiores a tres "sueldos vitales"; a los que superaran este límite se les entregaría una suma fija (el 45,5% de 3 vitales). Esta suma podría aumentar si el "Fondo de Compensación y Anticipo del Reajuste" - que sería creado por la misma ley - tenía ingresos suficientes. El "Fondo" sería administrado por funcionarios de la administración

estatal, entre los que se contaba el Contralor General. Pero el Contralor pidió ser excluido de la Comisión administradora.

¿Cuáles eran los fundamentos de este proyecto? El "tope" de 3 vitales respondía a dos razones: 1º) un reajuste completo para todos generaría presiones inflacionarias muy fuertes, y 2º) el 75% de los trabajadores tendrían remuneraciones que no sobrepasan los 3 vitales; por lo tanto, tres cuartas partes de los asalariados recibirían una compensación completa. En cuanto al "Fondo", su objetivo era evitar que el Gobierno tuviera que hacer desembolsos antes de contar con los ingresos correspondientes.

La oposición respondió presentando un proyecto que reajustaba todos los sueldos y salarios (hasta 20 "vitales") en un 45,4%, que eliminaba el Fondo de Compensación y urgía el pago inmediato, tanto para el sector público como para el privado. ¿Las razones para presentar este proyecto?: 1º) No se debería hacer recaer el peso de la inflación sobre los asalariados; ellos tendrían el derecho a recuperar totalmente su poder de compra; 2º) El "Fondo" constituiría un sistema engorroso y lento, sometido por los demás a funcionarios de Gobierno que podrían cometer arbitrariedades.

Para hacer ver las dimensiones del problema, el Gobierno señalaba que este "anticipo de reajuste" debe situarse en el contexto del nuevo "anticipo" que se discutiría en junio (después del segundo cuatrimestre), del reajuste de octubre y de la ley de presupuesto de fin de año. Cada ley de reajuste es casi tan importante como la ley de presupuesto, y no hay que olvidar que este tipo de leyes ha suscitado incluso revoluciones en el pasado. Si no se controla la emisión, limitando los reajustes, las sucesivas presiones inflacionarias serán insostenibles.

La oposición replica que no es efectivo que el 75% de los trabajadores ganen 3 sueldos vitales o menos. En la administración pública, por ejemplo, el porcentaje llegaría sólo a un 44%, de modo que un 56% de los trabajadores de ese sector serían disminuidos sus ingresos. Pero eso no es todo: como se está en plena dinámica inflacionaria, sus ingresos continuarían bajando en los próximos meses, tanto más cuanto que el Ejecutivo ha dado a entender que mantendrá su criterio actual en los anticipos o reajustes ulteriores.

Retoma la palabra el Gobierno: se podría dar reajuste a todos si hubiera financiamiento, pero el fisco ha recibido presupuestos cada vez más definanciados. Según El Siglo, en 1971 el Gobierno estimó que el reajuste requeriría 6.557 millones de escudos; pues bien, se aprobaron 5.006 millones y se recaudaron 1.250 millones. En 1972

Las cifras respectivas alcanzaron a 10.400, 9.200 y 2.750 millones respectivamente. El Ejecutivo debió llenar estos vacíos recurriendo a emisiones que estimularon la inflación. Siendo así las cosas, no hay más remedio que limitar los reajustes, reduciendo los ingresos de los que ganan más.

La oposición arguye: el problema no está en el financiamiento, sino principalmente en el gasto fiscal. Las cifras en millones de E^s entregadas por la dirección de presupuesto lo demuestran:

| | <u>Ingresos</u> | <u>Ingresos</u> | |
|------|-----------------|-----------------|------------|
| | presupuestados | reales | Diferencia |
| 1971 | 26.560 | 23.200 | -- 12,5% |
| 1972 | 38.600 | 36.800 | -- 4,5% |

| | <u>Gastos</u> | <u>Gastos</u> | |
|------|----------------|---------------|------------|
| | presupuestados | reales | Diferencia |
| 1971 | 24.700 | 25.100 | + 1% |
| 1972 | 37.300 | 50.300 | +34.9% |

Por otra parte - continúa la oposición - la reducción de los ingresos de ciertos sectores tendría sentido si se cumplieran dos condiciones: 1°) Que la reducción de los sueldos y salarios se inscribiera en una política general anti-inflacionaria; 2°) Que la discriminación fuera pareja, sin diferencias cualitativas. En cuanto al primer punto, es sabido que los aumentos de remuneraciones son sólo una de las causas de la inflación. En el momento actual una de las causas fundamentales de la inflación sería el déficit generado por las empresas del área social (alrededor de 50.000 millones de escudos). ¿Por qué habría de pagar un sector de los trabajadores el déficit generado por esas empresas, que antes dejaban ganancias? La inflación depende también de la producción agrícola y de la disponibilidad de divisas, y el Gobierno no presenta ninguna política que permita elevar la producción agrícola o estimular las exportaciones. En cuanto a la segunda condición (la "ley pareja") es sabido que los trabajadores organizados están sujetos a convenios en cada una de sus empresas o instituciones; gracias a sus pliegos ellos, los más fuertes, los que ya tienen una mejor situación económica, no se verán

afectados por el límite de 3 vitales. Al que tiene, se le dará más.

Y aunque parezca paradójico, los trabajadores del Area Social - cuyos déficits contribuyen a acelerar la inflación - tienen fuertes sindicatos que les permiten obtener aumentos de salarios y sueldos superiores al I.P.C. El personal de la Defensa Nacional está excluido del proyecto del Ejecutivo; para las Fuerzas Armadas, que tienen un gran poder de presión, habría sin duda un trato especial. Una vez más se produciría una discriminación cualitativa: dentro de un mismo estrato socio-económico unos deberían sacrificarse y otros no.

Y le toca el turno al Gobierno: la crítica de la Democracia Cristiana respecto de la mala conducción económica es abstracta, no plantea una alternativa realista. Los efectos financieros de una buena o mala administración giran alrededor del 5%. Un porcentaje muy elevado del gasto fiscal son sueldos y salarios; reducir el gasto fiscal significaría suprimir trabajadores, provocar cesantía. Una de las principales realizaciones del gobierno ha sido precisamente la de disminuir el desempleo. Es evidente que existe un déficit en las empresas del área social. Ese déficit se debe en parte a la anarquía de las relaciones de producción, pero ella es propia de todo proceso revolucionario; el reordenamiento no se puede lograr de golpe. Los déficits se deben también a la mantención de precios bajos y a la escasez de repuestos y materias primas. Subir los precios significaría acelerar la inflación; para obtener materias primas y repuestos habría que disponer de más divisas, lo que no se consigue de un día para otro, y menos con el "bloqueo invisible". Es cierto que la disminución de la producción agrícola ejerce presión sobre los precios y aumenta la escasez de divisas, pero se está en pleno período de transición, de reorganización; la reforma agraria tiene su precio. En definitiva, alguien tiene que pagar el costo del proceso y el freno de la inflación: ese alguien tiene que ser el grupo de rentas más altas, que verá disminuida su remuneración y/o será afectado por nuevos tributos.

Y aquí el diálogo se interrumpe para entrar al segundo acto: el financiamiento.

¿Quién paga el reajuste?

El proyecto del Gobierno tiende a hacer caer el peso del financiamiento sobre los que más han ganado con la inflación: los propietarios de bienes raíces, los especuladores, los que han recibido créditos bancarios, etc. Algunos de los tributos propuestos no han suscitado polémicas, como el aumento del impuesto a la ganancia de capital

y el impuesto al crédito bancario a corto plazo. Pero no ha sucedido lo mismo con los tributos a los bienes raíces y a la tenencia de acciones. Como este último se refería precisamente a las acciones de empresas que están "en la lista" del área social, la oposición ha visto en él un mecanismo de expropiación de esas empresas, lo que considera impropio ya que existen dos proyectos en estudio para la constitución legal del área social.

En cuanto al impuesto a los bienes raíces el Gobierno señala que en el último año ha representado solamente el 2,2% de los gastos fiscales, siendo así que en 1965 correspondía al 10%; a pesar de que las tasaciones se reajustan de acuerdo al I.P.C., tienen un retardo acumulado y se pagan con bastante atraso, de modo que la inflación hace que disminuya mucho su rendimiento. Por lo demás, el impuesto actualmente vigente (2,2%) se cobra igualmente a todas las propiedades grandes y pequeñas, lo que refleja una curiosa "democracia"; el Gobierno propone una tasa diferencial que varía de 1,5% a 7%. Se propone un reavalúo para 1973 equivalente al 300% del que vige actualmente (40% superior al de 1972) y luego otro de 200% a partir de 1974. En fin, se concede un descuento del avalúo equivalente a 12 sueldos vitales anuales, lo que deja liberada de impuestos a una alta proporción de los bienes raíces. En resumen, algunos bienes raíces urbanos y rurales verían aumentadas sus contribuciones en 10 ó 15 veces en un año, mientras que otros - los más pequeños - pagarían menos. Las excepciones tributarias (DFL 2, por ejemplo) se mantienen.

Las críticas a este nuevo impuesto no han faltado. La "histeria periodística" ha llegado a exclamar: "expropiarán todas las casas", lo que no puede estar más lejos de la realidad. Las observaciones más serenas señalan que para los casos más extremos la tasa de impuesto es tan alta que resulta a corto plazo expropiatorio. Se debe tener en cuenta que el nuevo avalúo afecta también a otros impuestos: el "patrimonial" y la renta presunta para el pago del "global complementario". Además, la legislación podría resultar inoperante: los más afectados podrían enfrentar un problema de liquidez y no podrían pagar. En el caso de las propiedades arrendadas, como se supone que los arriendos seguirán congelados, los propietarios pagarían más en impuestos que lo que recibirían por el alquiler. Por su parte los arrendatarios tampoco tendrían interés en comprar las casas en que viven porque les resultaría mucho más caro que pagar arriendo. Los "propietarios" deberían pagar impuestos por bienes que no les sirven de nada ni pueden vender. En los casos no tan extremos se cargarían con fuertes tributos a ciertos sectores de la "clase media" que ya han sido afectados fuertemente por el mercado

negro, por el alza de los automóviles, de las tarifas telefónicas, etc. En definitiva, la oposición estaría dispuesta a conceder un aumento importante de los avalúos y aceptar la tasa progresiva, pero sin admitir aumentos tan violentos como los propuestos por el Gobierno.

¿Qué propone la oposición? Aparte de conservar ciertos tributos propuestos por el Ejecutivo, señala que el financiamiento debe provenir: 1º) De los mayores ingresos fiscales provocados por la inflación (p. ej. en los impuestos a la compraventa). 2º) De un impuesto a las divisas utilizadas para la importación (excepto en el caso de alimentos y de las provincias que tienen trato especial).

Réplica del Gobierno: cualquier mayor ingreso fiscal debe servir para paliar el déficit del presupuesto (que alcanza a 50.000 millones). En cuanto al impuesto a las divisas, traería consigo una ola de alzas, inflaría la inflación.

El fallo del Tribunal

En medio de este forcejeo entre Gobierno y oposición (más precisamente entre UP y DC) surgió un problema constitucional. La mayoría opositora había llegado a aprobar en el Parlamento un reajuste total hasta 20 sueldos vitales, que debería pagarse inmediatamente con efecto retroactivo al 1º de febrero. El Gobierno presentó un reclamo al Tribunal Constitucional señalando que el Parlamento se había excedido en sus atribuciones. La Constitución reserva al Presidente de la República la iniciativa en materia de remuneraciones, tanto para el sector público como para el privado. El Parlamento sólo podría aprobar, rechazar o disminuir los gastos propuestos. La oposición replicó que el proyecto del Ejecutivo no fijaba más límite al reajuste que los 20 vitales; que el llegar a ese límite dependía de la disponibilidad de fondos y que el Parlamento había entregado al Gobierno los fondos necesarios.

El Tribunal falló a favor del Gobierno, considerando no tanto el límite de 20 vitales como la condición esencial exigida por el Ejecutivo: el reajuste sólo podría pagarse después que se reunieran los fondos. Con esto se validaba la atribución del Gobierno a exigir financiamientos reales y no puramente nominales. Pero surgió también la "nube gris": el Tribunal consideró constitucional el rechazo por el Parlamento del "Fondo" y de la "Comisión" que lo administraría. Pero sin este sistema (u otro semejante) es imposible pagar el reajuste sólo "después que" se reúnan los fondos. En otras palabras, el Ejecutivo puede "en principio" exigir financiamientos reales, pero sin el

acuerdo del Parlamento no puede poner en marcha ningún mecanismo para lograrlo. Se trata de una faceta más del complejo juego de poderes de la institucionalidad chilena.

Ante este fallo, el Senado devolvió el proyecto de ley a la Cámara de Diputados para reiniciar su tramitación: 2 meses de espera y debates parlamentarios habían concluido en nada.

El mito de la "clase media"

Más allá de la lucha política es evidente que los diferentes partidos están defendiendo intereses de clase. Y por extraño que parezca todos defienden a la "clase media", y nadie la ataca. El Mercurio, por ejemplo, señala que "al no reajustar el sueldo vital se afecta a vastos sectores de la clase media". No defiende a la clase "alta"; parece como si esta clase hubiera desaparecido. Por su parte la prensa de izquierda insiste en que el reajuste deben pagarlo los ricos, y se supone que los ricos no pertenecen a la "clase media".

¿Qué sucede? Que no hay acuerdo en las categorías de estratificación y que ese desacuerdo es intencional. Si se pusieran de acuerdo para llamar "clase alta" a quienes tienen ingresos correspondientes al 15% superior de la pirámide social, "clase media" al 35% siguiente y "clase baja" al 50% inferior nos encontraríamos con varias sorpresas. En primer lugar, todos los que poseen un vehículo particular, aunque sea una citroneta, pertenecen a la clase "alta" y no a la clase media. Inversamente, el 50% de los obreros industriales pertenecen a la clase media o alta (1).

Es evidente que en la lucha política la oposición tendría problemas si confesara que defiende a la "clase alta" automovilista y los partidos marxistas no estarían muy contentos al tener que reconocer que están defendiendo a "proletarios" de "clase media" (o "alta").

El "capitalismo especulativo"

Todo el mundo está de acuerdo en que los grandes ganadores con el proceso inflacionario son los especuladores, que se alimentan del mercado negro. Los asalariados que no recibirán un reajuste completo señalan que el dinero que ellos dejarán de percibir no irá a ningún fondo de ahorro, sino que irá a hinchar los bolsillos de los especuladores. El debate que hemos tratado de reproducir, pone de manifiesto la dificultad de atacar al capitalismo especulativo por la vía tributaria; precisamente por su carácter oportunista y escurridizo, la especulación puede sortear bien las barreras tributarias.

Ya se ha señalado en esta revista que la especulación y el mercado negro responden a problemas estructurales. Mientras esos problemas se resuelvan parece haber sólo dos maneras de atacar la especulación: evitando los saltos bruscos en los precios y combatiendo los delitos económicos. En el primer aspecto, ya es un signo positivo que el Gobierno haya decidido alzar el dólar "viajero" mes a mes. En cuanto a los delitos económicos, hay que señalar que precisamente por su caracter escurridizo, difícilmente podrán ser combatidos con medidas generales, sean ellas tributarias u otras.

¿Fair play o power play?

Antes las críticas de la oposición en el sentido de que los marxistas habían reclamado siempre reajustes totales y para todos, un dirigente de izquierda comento: "la política no es un fair play". En otras palabras, la política no es un juego donde cada actor deba ser fiel a sus declaraciones, la política es esencialmente oportunista. Un sociólogo argentino afirmaba hace unos años que "cierto grado de 'maquiavelismo', cierta distinción entre medios y fines, es propia de toda actividad política". En octubre de 1972 el Gobierno concedió por su propia iniciativa un reajuste de 100% para todos los asalariados, y en ese momento no habló del caracter inflacionario que podía tener ese reajuste (2). En esa oportunidad, la oposición insistió en el riesgo de las emisiones inorgánicas, y actualmente parece haber olvidado ese problema.

Y si la política no es un "fair play", ¿qué es? Un "power play", respondería Maquiavelo. Y tal vez él entendería mejor que nosotros el debate en torno al reajuste: detrás de cada grupo favorecido o afectado, detrás de cada medida de financiamiento, hay una lucha por el poder. Si la oposición se opone al proyecto del Gobierno es, en primer lugar, porque se trata precisamente de un proyecto del Gobierno: la dialéctica del poder la obliga a oponerse; se trata casi de una ley física. Hace años, cuando Alessandri subió al poder, la derecha no dió prácticamente ningún reajuste, y luego se ha quejado permanentemente de las alzas excesivas de salarios; ahora, el Partido Nacional aparece como un adalid del reajuste completo para todos. Por su parte la DC durante su Gobierno propuso reajustes escalonados y llegó incluso a promover "bonos" (llamados después "chiribonos") que reemplazarían una parte del reajuste; ahora ... es oposición, que el Gobierno se las arregle: "La inflación no es responsabilidad del Parlamento ni de la oposición. Quienes tienen todo el poder económico en sus manos son los que deben responder al país de los resultados desastrosos de sus propios manejos".

Por su parte el Gobierno pretende no sólo disminuir el ritmo inflacionario, sino también convertir el reajuste y su financiamiento en un medio para adquirir más poder: quiere quitarle poder económico a la derecha y a ciertos sectores de asalariados, obtener más medios económicos para llevar adelante su programa. La discusión sobre el impuesto a las divisas es significativa al respecto. La UP lo rechaza porque generará presiones inflacionarias. Sin embargo, es muy probable que después del reajuste el Gobierno devalúe el escudo (3), lo que significará sin duda un impulso a la inflación. Pero la devaluación le significa al Gobierno más ingresos por la venta de divisas, más poder económico.

Sin embargo, el poder político se sustenta no sólo en las instituciones (Parlamento, Ejecutivo) sino también en las clientelas. Al defender a los asalariados que ganan más de tres vitales la DC está defendiendo intereses de clase, defiende a sus clientes de clase "media" y "alta". El Gobierno tiene menos clientes en esos estratos y además la mayor parte de sus clientes de clase "media" pertenecen a ese 25% de trabajadores organizados que tienen sus propios convenios y no están sujetos a límites. En otras palabras, el Gobierno acepta enajenarse a ciertos sectores medios pero está seguro de que no perderá otros (4). Así se cumple un objetivo importante: dividir a la clase "media". Con toda ella en su balsa, la UP avanzaría muy lentamente en el proceso revolucionario; con toda ella afuera, debería enfrentar demasiadas olitas.

Y si la política es "power play", ¿dónde queda la ética, la lucha por la igualdad? La DC responde: está bien afectar a los asalariados de más altos ingresos con tal que se aplique un principio ético integral, sin discriminaciones cualitativas: "la ley pareja no es dura". La UP replica: la "ley pareja" es un principio abstracto, poco realista; en el camino de la redistribución de los ingresos, hacia la igualdad social, es imposible evitar todas las discriminaciones. La ética de la DC corre el riesgo de ser muy hermosa en sus principios, pero inoperante en la práctica. La ética de los marxistas es en primer lugar revolucionaria y sólo secundariamente, en su proyecto final, igualitaria; su riesgo es la multiplicación de las injusticias parciales y el alejamiento de su objetivo final.

Epílogo para "extranjeros"

Al concluir estas líneas, los datos del conflicto presentados al comienzo de este artículo ya han variado. El Gobierno decidió cambiar su proyecto de reajuste. El nuevo

proyecto se refiere a un período de 6 meses (octubre 72 - marzo 73) durante el cual la inflación ha alcanzado un 60%; el límite que se fija es de 5 sueldos vitales (P 11.000), con lo cual recibirán reajuste completo la enorme mayoría de los asalariados del país. Todavía se tendrá que discutir en el Congreso la fórmula de financiamiento; es probable que se llegue pronto a un acuerdo: ni a la UP ni a la oposición les conviene dejar tanto tiempo esperando a los trabajadores.

Epílogo para "extranjeros", porque desde fuera de Chile parece difícil entender la flexibilidad del proceso chileno; se comprende rara vez que todo proceso democrático está sembrado de compromisos permanentes e ineludibles. Para "extrajeros", porque no faltan los que viven en Chile y miran nuestra realidad desde afuera, creyendo que el enfrentamiento es inevitable.

Mayo 1973

N O T A S

- (1) Estudios realizados en 1967 demostraban que el 20% más rico de la población estaba compuesto por: 32.000 empleadores, 113.000 trabajadores por cuenta propia, 302.000 empleados y 52.000 obreros.
- (2) Ciertas voces se levantaron en la izquierda para promover un reajuste escalonado, pero al fin primó la tesis "igualitaria"; según parece, se temió la reacción de las Fuerzas Armadas, ya que la discriminación las afectaría.
- (3) La última devaluación tuvo lugar en agosto de 1972, y desde entonces los precios han subido en alrededor de un 100%.
- (4) Refiriéndose a los obreros de las empresas estatizadas, un articulista de El Siglo (PC) escribe: "Para ellos debe estar claro, en primer término, que la reorganización no afectará, de manera alguna, sus actuales niveles reales de ingreso. Se reordenarán los salarios, pero de ninguna manera eso significará rebajar los salarios que actualmente están percibiendo (Nosotros subrayamos).

HUELGA EN "EL TENIENTE"

Un conflicto mal planteado

Al escribirse estas líneas la huelga de mineral de cobre "El Teniente va a cumplir un mes. Se han perdido ya cerca de 30 millones de dólares en divisas. Cuando las colas se alargan porque el pan escasea, cuando se paran los vehículos de la movilización colectiva por falta de repuestos, cuando urge importar combustibles para luchar contra el frío invernal, este conflicto, estas pérdidas, resultan dramáticas. Si el cobre es "el sueldo de Chile", el paro de una de las dos minas de cobre más grandes del país deja a millones de chilenos sin sueldo.

Origen de la huelga

El problema que estalló en abril se venía arrastrando desde septiembre de 1972. Cuando se dictó la ley 17.713 que reajustaba en un 100% todos los sueldos y salarios del país, el gobierno ofreció a los trabajadores sujetos a convenios especiales la posibilidad de acogerse a los beneficios de esta ley. Así lo hicieron los Trabajadores de El Teniente aceptando—como contrapartida— la exigencia de prolongar por tres meses la duración del convenio vigente (1). Y entonces surgió el conflicto. Como los trabajadores de El Teniente gozan desde 1943 del beneficio de la escala móvil (2), habían obtenido entre abril y septiembre reajustes equivalentes a un 4,1% de sus sueldos y salarios. La Empresa pagó el reajuste de octubre de 1972 descontando ese 4,1%. Los trabajadores aceptaron el pago, dejando pendiente la discusión sobre la procedencia del descuento, y luego solicitaron un estudio en derecho (3). La elaboración del informe, la agitación pre-electoral y los cambios ministeriales subsiguientes postergaron la solución del conflicto. En abril los dirigentes entregaron los antecedentes a la Junta de Conciliación de la Gran Minería (4). El 17 de abril la junta pronunció a favor de la tesis de la Empresa, pero su fallo fue rechazado por la totalidad de los dirigentes sindicales. Se realizaron asambleas y 6 de los 9 sindicatos decidieron ir a la huelga; posteriormente se plegaron los otros tres.

El conflicto jurídico

Casi no vale la pena señalar que la huelga que comentamos es ilegal. Ni el Gobierno ni los representantes directos de la Empresa le han dado importancia a este hecho. En realidad - como ya hemos señalado en un comentario anterior - en Chile son tantas las huelgas ilegales que muchos prefieren, con razón, hablar de huelga justa o injusta.

La discusión jurídica se ha centrado por lo tanto en la interpretación de la ley 17.713 (5). Según el Gobierno, el espíritu de dicha ley supone que no se darán "reajustes sobre reajustes". Los que defienden a los trabajadores en conflicto replican que - según un conocido principio jurídico - cuando la letra de la ley es clara no se debe recurrir al "espíritu". En realidad la letra de la ley no indica que algún beneficio - de cualquier clase que fuera - obtenido antes de octubre de 1972, debería ser descontado en el momento de aplicar el reajuste. Más aún, cuando se discutió la ley, un senador derechista que pidió que los anticipos que hubieren dado los empresarios pudieran ser descontados fue violentamente rebatido por los senadores de Gobierno. El Ministro de Hacienda insistió en que nada sería descontado. También el "espíritu" de la ley parecía entonces claro. En fin, como para confirmar la letra y el espíritu, la empresa estatal Cobrechúqui no descontó los reajustes automáticos que afectan a ciertos beneficios de sus trabajadores.

Con estos antecedentes, y teniendo en cuenta que en otras ocasiones no se habían descontado en El Teniente los beneficios de la escala móvil, es fácil comprender el por qué de la huelga. ¿Cómo explicar entonces la inflexibilidad del Gobierno, sobre todo si se consideran los enormes daños que sufre el país?

Una nueva política salarial

La explicación puede venir, una vez más, de la variable política. Así como en enero de 1971 el Gobierno aumentó generosamente los sueldos y salarios porque necesitaba no sólo redistribuir los ingresos sino también poner en marcha la industria y captar apoyo electoral, así en septiembre de 1972 debía defenderse contra el malestar social que había provocado las olas de alzas: por eso el texto y la interpretación de la ley fueron tan categóricos al afirmar que todos los sueldos y salarios que los trabajadores ganaban al 30 de septiembre les serían reajustados. Probablemente como la "escala móvil" es un beneficio muy especial, del que sólo gozan algunos sindicatos y nada más que en ciertos

rubros, los legisladores se olvidaron de incluir la excepción correspondiente. Lo que importaba entonces era asegurar a todos los trabajadores que recuperarían todo su poder de compra.

Pero al cabo de algunos meses la actitud de los responsables de la gestión económica del Gobierno ha cambiado. Ante las nuevas alzas de precios, la ilusión de la "estabilidad a un nivel más alto" se esfumó. El peligro de una inflación galopante, y hasta de una hiper-inflación, se agranda cada vez más; esto podría llevar al fracaso más total e incluso a la caída del Gobierno. La nueva política salarial tiende a limitar los aumentos de salarios, principalmente de los grupos más favorecidos, y a vincular las mayores remuneraciones a una mayor productividad.

Desde esta perspectiva se puede entender la contraoferta del Gobierno. Además del "anticipo de reajuste", los trabajadores de El Teniente recibirían un bono de producción como premio por los aumentos de producción de 1972-73 y luego bonos mensuales ligados a la producción para los meses futuros (6).

A pesar de las grandes pérdidas que deja la huelga, el Gobierno está empeñado en mantener el principio de no dar "reajuste sobre reajuste", sobre todo si esto significa discriminar frente a un grupo de trabajadores que ya es privilegiado con respecto a otros grupos (7). Se trata además de mantener el principio económico de respetar la productividad en la fijación de los salarios.

Los estudios sobre la producción de cobre en Chile indican que sin hacer ninguna nueva inversión, con sólo una mayor disciplina y un mejor aprovechamiento de la capacidad técnica y gestionaaria, la producción podrían aumentar en 150.000 toneladas en un año; se comprende entonces que el Gobierno desee aumentar la producción aprovechando los estímulos materiales.

El peso de la historia

Pero el espíritu reivindicativo está muy arraigado en los trabajadores del cobre. Durante decenios lucharon contra la empresa norteamericana por obtener mejores salarios y mejores condiciones de vida (8). No se les puede pedir de golpe que moderen sus aspiraciones, sobre todo cuando se vive un proceso inflacionario galopante, que no se refleja sino a medias en el índice oficial, y cuando el precio del cobre en el mercado mundial ha subido considerablemente. Más aún, en los trabajadores del cobre surge un rechazo instintivo de los bonos, porque ellos constituyeron la treta tradicional de la

empresa norteamericana para evitar pagar imposiciones, desahucios, etc. En cambio las sumas que se incorporan al sueldo (como sería ese 4,1%) les son considerados para los fondos de retiro y las jubilaciones.

Sin embargo el problema es más profundo. Durante años los dirigentes marxistas - insistieron en que los trabajadores deberían recuperar la plus - valía que les robaba la empresa. Y ahora que la empresa ya no pertenece a los capitalistas privados, ¿qué - pasa con la plus - valía ?, ¿ quién se la lleva ?. La empresa El Teniente - que produce más de 300 millones de dólares anuales en divisas - deja ciertamente grandes beneficios (9). Entonces, el que retiene ahora la plus -valía, ¿ es un nuevo capitalista explotador? ¿ Se va a pasar del capitalismo privado al capitalismo de Estado? . La única manera de superar estas objeciones es abandonar una teoría simplista del valor - trabajo . Para que esta teoría sirva realmente en la práctica será necesario reconocer que ella no es una teoría puramente económica, sino que tiene también dimensiones éticas.

La reflexión sobre el problema de la propiedad y la participación se hace tanto más necesaria cuanto que el Gobierno ha creado una Comisión Central de Trabajo, Sueldos y Salarios, destinada a centralizar la política de salarios y sueldos. Ya se han levantado voces para señalar que se trata de un nuevo intento de limitar o suprimir el derecho - de petición de los trabajadores. Si en lugar de la discusión abierta se procede a la imposición vertical, los conflictos serán inevitables. Más aún, el diálogo debería establecerse principalmente entre el Gobierno y los trabajadores que no pertenecen a la UP, para que se haga evidentes que en materias laborales se atiende prioritariamente al rol que - cumple cada trabajador en el proceso productivo, y no a sus preferencias políticas.

Sindicalismo y política

Las reflexiones anteriores nos llevan a recordar el pensamiento de un dirigente sindical que, a pesar de ser militante de un partido marxista, ha apoyado a los mineros en conflicto. Es necesario destacar que la acción sindical en una empresa del área social debe ser - cualitativamente diferente de la que se realiza en una empresa capitalista, pero también cualitativamente diferente de la acción política; debe respetar la autonomía sindical.

No estamos de acuerdo con cierta prensa de izquierda que ha afirmado: "Este - conflicto no es, por lo tanto, un conflicto gremial, es un conflicto político" (10). Es

evidente que con el grado actual de polarización política todo conflicto gremial de cierta importancia adquiere dimensiones políticas. Es evidente que la oposición mira con regocijo las dificultades que al "gobierno de los trabajadores" les crean los mineros, pioneros en las luchas sindicales. Pero es claro también que el origen de la huelga fue un problema de salarios, un problema típicamente gremial, como lo reconocieron los mismos dirigentes sindicales marxistas. Parece claro también que la ley 17.713 y la interpretación que de ella hizo el Ministro de Hacienda favorece a los trabajadores en conflicto. ¿Por qué, entonces, interpretar el conflicto en términos predominantemente políticos?

Por identificar apresuradamente lo sindical con lo político se ha llegado a calificar de "antipatriotas", "sediciosos" y "agentes de la CIA" a los mismos trabajadores que hace apenas ocho meses, durante el paro de octubre, eran "conscientes" y "patriotas". ¡Y resulta que en octubre ellos estaban planteando la misma reivindicación que hoy los ha llevado a la huelga! Por asimilar lo político a lo sindical algunos dirigentes han "cambiado de opinión" con una rapidez tan grande que deja escépticos a sus compañeros de trabajo. Por identificar lo sindical con lo político ciertos dirigentes, de uno y otro bando, han preferido tomar decisiones en asambleas tumultuosas, sin respetar la democracia sindical.

Si se quiere evitar que cada conflicto gremial se convierta en un enfrentamiento político que paralice al país y en definitiva dañe a los trabajadores, será necesario difundir y apoyar la práctica de la votación secreta y directa de las grandes opciones. Será necesario igualmente mantener no sólo el principio sino también la práctica de la unidad sindical: no dividir a obreros y empleados, no enfrentar trabajadores contra trabajadores; los métodos divisionistas ya han sido practicados en el movimiento obrero chileno y la historia ha demostrado que sus beneficios son efímeros.

¿Eficiencia o igualdad?

Más allá de las relaciones laborales el conflicto de El Teniente ha puesto sobre el tapete un problema permanente en la construcción del socialismo: la tensión entre la eficiencia y la igualdad. Ya en el siglo XIX, uno de los aportes de Marx dentro del pensamiento socialista fue el de demostrar que antes de la realización del ideal igualitario se impone una transformación de la estructura social. Cuando se llegue al comunismo, a la sociedad de la abundancia, el problema de la igualdad se resolverá por sí solo.

Pero, ¿qué sucede en el período de transición, en la larga etapa de la construcción del socialismo? Cuando triunfa la revolución de Octubre, Lenin no puede ya apostrofar al igualitarismo pequeño burgués: establece firmemente el principio igualitario, ya que la implantación de la igualdad económico-social forma parte de la construcción del socialismo. Sin embargo con el tiempo el líder de la revolución rusa privilegió a los sectores calificados, de quienes la U.E.S.S. tenía una necesidad vital. En el periodo de Stalin y luego bajo sus sucesores se puso aún mayor énfasis en los estímulos materiales para lograr una gestión eficiente y una mayor producción. Lo mismo sucedió en los demás países de Europa oriental (11).

Volvamos al caso chileno. Es evidente que la importancia de El Teniente es tan grande que - considerando sólo la eficiencia de la gestión económica - cualquier alza de salarios y sueldos sería justificada. Sin embargo, el principio igualitario lleva al Gobierno a frenar los aumentos: no sólo se quiere favorecer más a los ya relativamente favorecidos, sino que se teme la reacción de otros sectores de trabajadores, que rápidamente establecen comparaciones y multiplican sus exigencias.

¿Qué hacer? La elección de un camino que no se aleje excesivamente ni de la eficiencia ni de la igualdad dependerá de cada caso particular, será el fruto de una opción política que considere todas las fuerzas sociales en presencia. Sin embargo nos inclinamos a pensar que, dada la magnitud de la crisis económica que vive el país, sería "pequeño-burgués" no preocuparse ante todo de la eficiencia de los rubros claves. De lo contrario, se acumularán tensiones económicas y sociales de impredecibles consecuencias.

Junio 1973

N O T A S

- (1) Los convenios en la gran minería del cobre duran 15 meses. El convenio vigente en El Teniente data del 4 de abril de 1972.
- (2) Este beneficio consiste en un reajuste automático equivalente al 50% del alza del costo de la vida, cada vez que el índice de precios aumente en un 5% o más. Para ser más precisos debemos señalar que desde 1943 a 1959 la escala implicaba un reajuste del 100%, aplicada sólo a los obreros; desde 1959 se rebajó el porcentaje y se aplicó a obreros y empleados. En fin, para los lectores extranjeros vale la pena señalar que la distinción entre estas dos categorías de trabajadores es con frecuencia en Chile muy poco precisa; no es raro que tengan categoría de "empleados" ciertos trabajadores que realizan una labor predominantemente manual.
- (3) En El Teniente los 9 sindicatos tienen cada uno 5 dirigentes; estos 45 designan a 5 que pasan a constituir la directiva zonal. A pesar de que los 5 miembros de esta "zonal" eran militantes o simpatizantes de la UP, contrataron los servicios de un abogado que había sido Ministro de Minería en el Gobierno de Frei. Los intereses sindicales parecen no identificarse con las opciones políticas.
- (4) Esta Junta está formada por el Ministro del Trabajo, el Ministro de Minería y el Vicepresidente de Codelco (Corporación del cobre). Fue constituida en 1965, cuando las empresas de la Gran Minería todavía pertenecían a los norteamericanos. Como es patente, sus "fallos" son inoperantes porque en las actuales circunstancias sus miembros son al mismo tiempo juez y parte.
- (5) Más precisamente, de la letra P del artículo 1º transitorio de dicha ley. El texto es el siguiente: "Los trabajadores sujetos a convenio, contrato colectivo, acta de avenimiento, fallo arbitral o a resoluciones de las comisiones tripartitas creadas por el artículo 4º de la ley Nº 17.704, podrán, por una sola vez y dentro de un plazo de 60 días, contando desde la fecha de la publicación de la presente ley, solicitar la modificación del convenio, contrato colectivo, acta de avenimiento,

fallo arbitral o resolución vigente, para incorporar a éstos, a contar del 1º de octubre de 1972, el reajuste de sus remuneraciones, tratos, bonos y demás beneficios pagados en dinero, conforme al porcentaje de alza que hubiera experimentado el Índice de Precios al consumidor, desde la fecha de inicio de vigencia del convenio, contrato colectivo, acta de avenimiento, fallo arbitral o resolución de una comisión tripartita, hasta el 30 de septiembre de 1972". (Nosotros subrayamos). En cambio, la nueva ley de "anticipo de reajuste" incluye expresamente una cláusula de imputación o descuento de los reajustes anteriores.

- (6) Ante esta proposición, varios sindicatos acordaron la vuelta al trabajo. Como la resolución se tomó en asambleas y no por votación secreta, no todos los trabajadores siguieron a sus dirigentes. Según el Gobierno se habría reintegrado el 60% de los obreros y el 10% de los empleados; según la prensa de oposición sólo el 10 o 15% estaría trabajando. La decisión de ir al paro también fue tomada en asambleas, sin votación secreta. Después de la vuelta parcial a las faenas hubo serios incidentes entre los trabajadores en conflicto y la policía, decretándose Zona de Emergencia en la provincia.
- (7) El salario mínimo en El Teniente es actualmente de E° 10.452, -, a los que habría que agregar bonos de viaje, de escolaridad, etc. Con el anticipo de reajuste y los bonos propuestos por el Gobierno se llegaría a E° 18.798, -. Esta suma corresponde ciertamente al 10% superior entre los asalariados del país.
- (8) Los más antiguos todavía recuerdan la época en que hacía falta un día entero para bajar de Sewell a Rancagua y no había trenes de pasajeros: debían ir sentados sobre las barras de cobre. ¿Y qué decir del largo invierno a 3.000 m. de altura, bloqueados por la nieve y encerrados con toda la familia en un departamento de tres piezas?
- (9) Los déficits de la empresa en los dos últimos años pueden ser calificados de puramente "contables" y no de "reales". Ellos se deben principalmente a la

mantención de una bajísima tasa de cambio para el dólar de retorno por las exportaciones. "Pierde" la Empresa, pero gana el Estado con la venta de dólares y con los impuestos a las importaciones, lo que permite subsidiar a la Empresa. Quienes sí han perdido real y drásticamente han sido las instituciones y organismos favorecidos con leyes que les permitan recibir una parte de las ganancias de la Empresa. Es así como, por ejemplo, la Municipalidad de Rancagua que en 1970 recibió por este concepto E° 2.567 mil, en 1971 sólo llegó a E° 294 mil y en 1972 a E° 373 (téngase en cuenta además la devaluación monetaria).

(10) Chile Hoy, N° 49, p. 4

(11) Cf. Janina Markiewicz-Lagneau, *Estratificación y movilidad social en los países socialistas, Siglo XXI, Madrid, 1971*. El abanico de salarios, que en los primeros tiempos de Lenin se abría de 1 a 3, se desplegaría actualmente en la Unión Soviética de 1 a 20. Cf. Gilles Martinet, *Les cinq communismes, Seuil, Paris, 1971*.

VIOLENCIA Y GUERRA CIVIL

Un abismo entre los chilenos

Desde hace ya varias semanas la izquierda ha lanzado una gran campaña de prensa y de movilización de masas con el slogan: "no a la guerra civil". Según la oposición, esta campaña no es más que una cortina de humo para ocultar los graves problemas que vive el país; más aún, se trataría de una campaña del terror destinada a amedrentar al pueblo para que no se atreva a protestar y se someta a cualquier disposición del Gobierno, por arbitraria que sea.

Radiografía de un slogan

Al primer análisis el slogan parece poco coherente: una guerra civil supone dos bandos en lucha; si uno de los bandos llama a evitarla, se está llamando también a sí mismo. Y sin embargo, el slogan se ha dirigido solamente al adversario.

Sin duda, el deseo de infundir temor ha estado presente en la elaboración de la fórmula. Una guerra civil sugiere un país destruido, decenas o centenares de miles de muertos. Se ha aludido con frecuencia a la sangrienta guerra civil española. Y un líder de la izquierda ha justificado este tipo de amedrentamiento señalando que "ha habido revoluciones que han fracasado porque tuvieron miedo de infundir miedo en sus enemigos ... Hay momentos en que el poder revolucionario puede legítimamente utilizar la intimidación". Y ciertamente un sano temor es útil al menos para hacer reflexionar a los irresponsables.

Pero hay algo más importante. La izquierda sabe que la guerra civil no estallará si no intervienen las Fuerzas Armadas divididas en dos sectores contrapuestos. Esta división se produciría si uno de los dos sectores intenta un golpe militar. Mientras el Gobierno pueda seguir avanzando, un golpe de izquierda es poco probable. Queda la posibilidad de un golpe de derecha. El slogan más preciso debería haber sido, por lo tanto: "no al golpe de derecha"; pero esta fórmula habría ofendido a ciertos sectores de las Fuerzas Armadas, y la UP necesita mantener las mejores relaciones con ellas. Con todo, el hecho de que se utilice un slogan - una expresión breve y simplificadora capaz de movilizar fuerzas sociales - no significa necesariamente que se esté malinterpretando la realidad. "El riesgo de una guerra civil es un peligro que no podemos ocultar", ha declarado recientemente el Rector de la Universidad Católica, militante demócrata-cristiano.

El Peligro de un golpe

¿Existe el peligro de una intervención militar directa? ¿En qué podría fundarse?

Es un hecho que ciertos sectores desean y promueven el derrocamiento del Gobierno. Un informe secreto de la Sociedad de Fomento Fabril (organismo que representa a los empresarios privados), elaborado con anterioridad a la elección de marzo, señalaba que si la UP obtenía más de un 42% se consolidaría, y no habría más solución que el enfrentamiento armado. Representantes de la derecha han insistido en que las Fuerzas Armadas tienen no sólo el derecho sino también el deber de intervenir si el Gobierno pierde su legitimidad. Nadie está obligado a obedecer a un poder ilegítimo, y según ese sector el actual Gobierno habría entrado hace rato por el camino de la ilegitimidad. Los parlamentarios del Partido Nacional han sido enfáticos al respecto y en una declaración pública este Partido ha afirmado: "El señor Allende ha dejado de ser Presidente constitucional de Chile".

Sin que haya constancia de que la derecha se esté dedicando a golpear la puerta de los cuarteles, es un hecho que ha logrado comunicar sus inquietudes a ciertos sectores de las Fuerzas Armadas. Como un reflejo, moderado, de esa acción podría interpretarse la carta que el "Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro" dirigió al Presidente de la República: en ella le hacen ver su preocupación por la situación económica, social y política del país, y el riesgo que ella comporta para la seguridad nacional.

La estrategia golpista ya se puso de manifiesto en "Octubre"; se trataba de exasperar al pueblo para crear un clima de desorden tal que obligara a las Fuerzas Armadas a intervenir: ante el "vacío de poder" los militares podrían legítimamente entrar a garantizar el orden y la seguridad interior. Lo que es más nuevo es que esta estrategia ya no es planeada solamente por la derecha, sino que es mirada con simpatía por sectores de partidos tradicionalmente democráticos.

El conflicto con el Congreso

Pero dada la ideología constitucionalista de los militares chilenos, sólo se podría lograr su intervención en caso de que se les mostrara en forma evidente que el Ejecutivo ha atropellado la Constitución en una materia importante. Bastaría que el atropello fuera discutible para que las Fuerzas Armadas no pudieran intervenir legítimamente: ellas no pueden constituirse en Tribunal Constitucional. Es por todo esto que la oposición se ha esforzado en demostrar que el Ejecutivo se ha extralimitado en forma grave, pasando a llevar a los otros dos poderes del Estado: el Legislativo y el Judicial.

El conflicto de poderes entre el Gobierno y el Congreso ha cristalizado en torno al problema de "las tres áreas" de la economía (1). La Reforma Constitucional respecto a esta materia, propuesta por la democracia cristiana, fue parcialmente vetada por el Ejecutivo. Según la oposición, al ser aprobada la Reforma por simple mayoría, el Gobierno debería promulgarla a llamar a plebiscito. Según la UP, haría falta que el Congreso insistiera con una mayoría de dos tercios para que el Gobierno estuviera obligado a tomar una de estas dos alternativas. Habiéndose declarado incompetente el Tribunal Constitucional el conflicto ha quedado sin árbitro.

A pesar de que la voz oficial del PDC ha sido "o promulga o viola la Constitución" un senador y expresidente del Partido que representa a la corriente progresista, ha señalado que es legítima la promulgación de aquella parte de la Reforma sobre lo que existe acuerdo (como ya lo hizo en su oportunidad el Gobierno anterior). Por otra parte, no existiendo un árbitro que decida sobre la interpretación correcta de la Constitución en materia de reformas constitucionales, ninguno de los dos poderes puede hacer valer su opinión sobre el otro; por lo tanto, nadie puede exigir legítimamente que el Presidente llame a plebiscito. No hay una violación clara de la Constitución que pueda justificar la intervención de las Fuerzas Armadas.

Más allá del problema jurídico es evidente que el Gobierno "no puede" llamar a plebiscito. Al aceptar la tesis del Congreso se ataría las manos y pies definitivamente como nada específica qué materias pueden incluirse en la Carta Fundamental, la oposición podría dar el carácter de "reformas constitucionales" a todos los proyectos de ley, haciéndolos aprobar gracias a su mayoría electoral; el Ejecutivo quedaría totalmente sometido al Parlamento.

Sin embargo es evidente que, si se quiere llevar adelante un proceso democrático, es necesario respetar a la mayoría del pueblo y convendría someter a su juicio las medidas políticas más importantes.

La guerra fría con el Poder Judicial

El conflicto entre el Ejecutivo y el Poder Judicial ha servido también de base para sustentar las esperanzas de los que promueven un golpe militar. El enfrentamiento ha tenido dos manifestaciones principales: El intercambio de cartas entre la Corte Suprema y el Presidente de la República, y las tensiones provocadas por las medidas represivas contra la radio Sociedad Nacional de Agricultura.

La Corte Suprema señalaba que la juricidad chilena estaría al borde de la quiebra, que se estaría frente a una grave crisis del Estado de Derecho. Los magistrados se quejan porque la autoridad administrativa se entromete permanentemente en asuntos judiciales, haciendo ineficaz la acción de los Tribunales al negar la fuerza pública para que sus resoluciones sean cumplidas. A esto el Gobierno ha respondido: "Resulta inadmisibile sostener que estas autoridades deben prestar el amparo policial en forma del todo indiscriminada, por cuanto ello podría conducir a situaciones que atenten precisamente contra la paz social y el orden público que están llamadas a cautelar". Y más adelante agrega: "De ahí que el Ministerio del Interior haya instruído a los Cuerpos Policiales en el sentido de que, siempre que el cumplimiento de una resolución judicial conlleve riesgos como los anotados, informe de ellos a la autoridad administrativa, para que ésta quede en condiciones, si los datos de que dispone sobre el conjunto de la situación así lo aconsejan, de disponer una momentánea suspensión en la ejecución inmediata de la medida. Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad que pueda derivar para el funcionario administrativo que sin motivo fundado determine tal postergación".

Parece claro que las consideraciones del Presidente se justifican: no se puede pretender que las autoridades administrativas y jefes policiales actúen mecánicamente, sin juzgar la situación ni las posibles consecuencias de su intervención. La misma opinión pública opositora lo ha reconocido al dar su apoyo al Prefecto de Carabineros de Bío-Bío, que fue removido de su cargo por no obedecer las órdenes del Intendente a fin de evitar un conflicto mayor. Además, es legítimo que las autoridades procedan con más benignidad frente a los más débiles: los pobres, las mujeres y los niños, los lisiados... La opinión pública protestó con exaltación no hace mucho porque la fuerza pública disolvió con dureza una manifestación de lisiados.

Sin embargo, la mayor consideración que se debe a ciertos grupos se ha prestado con frecuencia a un uso excesivamente partidista por parte de las autoridades, provocando una extrema irritación en los grupos opositores. Es comprensible también que el Poder Judicial reaccione si las suspensiones "momentáneas" se convierten en la norma, y más aún si esas suspensiones tienen una clara orientación partidista. Sin un mínimo de equidad se estarán sembrando semillas de revuelta.

Por otra parte, lo mismo que se dice de los funcionarios vale también para los jueces. No pueden pretender ellos que su función se limita a aplicar la ley, como si ella pudiera dictarles automáticamente los fallos. No serían jueces si no interpretaran las leyes, si no tuvieran en cuenta las personas y situaciones. Precisamente por no tener

en cuenta la situación de los más desfavorecidos ciertos fallos judiciales han provocado intensa irritación y hasta la movilización popular contra la que han llamado "justicia de clase".

En el intercambio de cartas, el Presidente ha contra-atacado señalando que los Tribunales tratan con ostensible benevolencia a los responsables de delitos contra la Ley de Seguridad Interior del Estado. Los ultrajes al Presidente de la República y las informaciones alarmistas o sediciosas no habrían sido sancionadas con la necesaria presteza y severidad. La observación es importante, porque el país vive en un clima de histeria periódica, a tal punto que se ha llegado a señalar que gran parte de la responsabilidad de la agitación y violencia la tienen los medios de comunicación de masas. Pero los ataques e insultos de la prensa gobiernista contra los otros poderes del Estado han sido igualmente duros y frecuentes, y tampoco han sido sancionados, de modo que una aplicación más severa de la ley cortarían cabezas de ambos bandos. Es por esto que, si se quiere sinceramente evitar una guerra civil, es necesario detener la violencia periodística.

El caso de la radio Sociedad Nacional de Agricultura sirvió para extremar las tensiones entre los poderes Ejecutivo y Judicial. Dejando de lado un dictamen del Contralor que establecía que el decreto sobre la radiodifusión había sido derogado por la Reforma Constitucional de 1970 y una resolución de un Ministro de la Corte que también lo consideraba derogado, el Gobierno procedió a clausurar sin querrela previa una radioemisora y luego a imponer cadenas obligatorias a las radios, sancionando pecuniariamente a los que no acataran la orden. Los afectados apelaron a los Tribunales y tanto el Ministro en Visita designado como la Corte Suprema consideraron que el Gobierno —más precisamente el Ministro Secretario General— había trasgredido la Constitución y la legalidad. El Ministro fue encargado reo, lo que provocó la indignación del Gobierno y violentos ataques contra el Poder Judicial en la prensa de izquierda.

La excesiva celeridad y estrictez con que actuó la Justicia es un signo de la irritación de los representantes del Poder Judicial que sienten atropelladas sus prerrogativas: con estos hechos el Gobierno no sólo desconocía el dictamen del Contralor y el fallo de un Tribunal, sino que sin juicio previo hacía intervenir a la fuerza pública, la misma que con frecuencia no es concedida cuando los jueces la requieren.

Si en el caso del conflicto constitucional entre el Ejecutivo y el Congreso no existe un árbitro que pueda definir quién tiene razón, parece claro que en materia de decretos y leyes la Contraloría y el Poder Judicial tienen autoridad definitiva. Consti-

tuye una torpeza del Gobierno seguir insistiendo en su punto de vista: no sólo porque sus resoluciones serán declaradas nulas y abusivas, sino también porque refuerza la idea de que está dispuesto a tropellar a los otros poderes del Estado. Así se crean las condiciones para que sobrevenga un golpe, para que estalle la guerra civil.

El conflicto en la base social

Sin embargo, en las tensiones a nivel de los poderes del Estado-en el plano superestructural- serían insuficientes para provocar un enfrentamiento si no hubiera un caldo de cultivo en la base social. En lo que va del actual Gobierno se cuentan alrededor de 70 muertos y centenares de heridos; la violencia se ha generalizado y los choques se suceden semana a semana. El Ejecutivo tiene que recurrir cada vez más a la represión por medio de la fuerza pública. Pero no se trata solamente de hechos aislados; la idea de emplear mano dura a pasado a constituirse en un leitmotiv en todas las declaraciones de la UP.

¿Qué problemas han suscitado esta nueva actitud? Las principales fuentes de conflicto han sido las reivindicaciones salariales y los problemas derivados del abastecimiento de los productos esenciales.

El malestar se ha generalizado en todos los sectores de asalariados ante una inflación que carcome sus ingresos y ha llegado a un 235% en los últimos doce meses. Frente a esta situación, lo sorprendente es que no existan más conflictos gremiales. Es evidente -como ya lo señalábamos en un artículo anterior para el caso de El Teniente- que los partidos de oposición van a apoyar e impulsar estos movimientos reivindicativos. Pero sería un error del Gobierno calificar sólo por eso a los conflictos gremiales como conflictos políticos; si lo hace, empujará a un número cada vez mayor de trabajadores hacia los partidos de oposición. Se crearán así las condiciones para que se produzca un enfrentamiento violento: la solidaridad de los trabajadores se levantará para protestar junto a sus compañeros que sufren la represión.

En cuanto al problema del abastecimiento de productos esenciales, tanto el PN como la DC han llamado a "combatir el intento de la UP para establecer la dictadura por el estómago, a robustecer el poder de las Juntas de Vecinos y a constituir los organismos de abastecimientos contemplados en la ley 16.880". Si se tiene en cuenta que los partidos de la oposición representan a la mayoría de la opinión pública, parece claro que el Gobierno no podrá imponer en todos los sectores las JAP que ellos rechazan (2). Lo más sensato parece entonces aceptar en ciertos sectores los "comités de abastecimientos" de las Juntas de Vecinos, organismos que no provocan rechazo y que pueden contribuir a solucionar el proble-

ma de la distribución de alimentos. De no hacerlo, de querer imponer a toda costa las - JAP, se estarán "sembrando vientos", se estará contribuyendo a ahondar el abismo entre los chilenos y a crear las condiciones para una guerra civil.

Estrategias frente al golpe de Estado

Si es claro -como indicaremos- que la derecha está propiciando el golpe de Estado, los partidos de oposición democrática deberán plantear una estrategia que logre evitarlo, si no quieren correr el riesgo de desaparecer de la escena política. Es legítimo que los demócratacristianos afirmen que "la tarea fundamental de la Democracia Cristiana es defender y preservar la democracia y las instituciones democráticas en Chile" (Fuentealba,) pero - también les conviene "abandonar definitivamente el planteo negativo, rechazar la imagen de que la DC vive para atajar a la UP, para defenderse de la UP, para combatir al marxismo-leninismo" (Tomic). "La tarea más urgente y la más importante para la DC, es plantear cuanto antes y en cada oportunidad cómo construir la sociedad socialista, comunitaria, pluralista y democrática" (id). Si la DC persiste en sus planteos negativos el país terminará por paralizarse y la vida democrática se hará imposible.

Por su parte, si la UP quiere evitar un enfrentamiento no debe provocar a la derecha ni dejarse provocar. La juventud del PN, en un documento llamado "La Resistencia Civil" afirmaba: "Es necesario precisar que, en general, debemos utilizar los mismos procedimientos y los mismos métodos que los marxistas usan en contra nuestra. Ya lo hemos dicho más de una vez: Si ellos quieren ventilar este pleito con argumentos, contestaremos con argumentos; si tratan de aplastarnos con hechos, ajustando la forma y la intensidad de la respuesta a la forma y la intensidad de la agresión; finalmente, si desatan la violencia, el principio de la legítima defensa nos entrega el derecho y nos impone la obligación de replicar en la misma medida". Si los militantes de la UP tiran con armas de fuego contra los manifestantes de la oposición -como ha sucedido más de una vez en el último tiempo- no deben sorprenderse de que la derecha reaccione violentamente.

Tampoco parece sensato poner fuera de la ley -como se ha propuesto- al movimiento de ultra-derecha "Patria y Libertad" por el sólo hecho de que se opone al actual sistema institucional. Con el mismo argumento también el MIR -en la extrema izquierda- debería ser puesto fuera de la ley. Esto llevaría a los movimientos "ultras" a actuar en la clandestinidad, contribuyendo mucho más a crear una atmósfera de confusión y violencia. Lo anterior no impide que se sancione con energía las manifestaciones concretas que vulneran la institucionalidad y que se aplique con severidad la ley de control de armas.

Pero de la manera más eficaz como la UP puede contribuir a evitar el golpe y la guerra civil es buscando un consenso básico, en puntos concretos, con los partidos de oposición que aceptan un proyecto socialista. Si se deja de lado el falso slogan de que la DC "quiere devolver las empresas a sus antiguos patrones", se puede seguir avanzando en la formación del área social, aunque el Gobierno deba aceptar que algunas de estas empresas no sean estatales sino autogestionadas. Si se acepta la inexpropiabilidad constitucional de los predios de menos de 40 hectáreas, se podrá seguir avanzando en la Reforma Agraria. Si se aceptan los "comités de abastecimientos" de las Juntas de Vecinos, se podrá avanzar en el control social de la distribución. Si se elimina el sectarismo y se respeta a los trabajadores de oposición, se podrá adelantar en la participación y eficiencia. En general, la UP tendría que mostrar con hechos que le interesa más la socialización que el control de la totalidad del poder.

Chile es hoy un país profundamente dividido. Sólo un enorme esfuerzo creador puede evitar el quiebre de la unidad nacional.

Julio 1973

NOTAS

- (1) Cf. Mensaje, "De la reforma industrial al conflicto de poderes", N° 208, mayo 1972
- (2) Sobre las JAP, cfr. Mensaje, N° 219, junio 1973.

LAS FUERZAS ARMADAS Y EL PODER POPULAR

Tal vez para un observador atento de la realidad nacional el hecho más significativo de los últimos meses no fue el frustrado golpe militar del 29 de junio sino una medida - que tomó el Gobierno cinco días después: el levantamiento de la zona de emergencia. ¡Cómo era posible que después de pedir urgentemente al Parlamento -en vista de la gravedad- de la situación política- la declaración del Estado de Sitio, el Gobierno renunciara incluso a los medios de control que ofrece la "zona"? Esa medida tenía una significación enormemente grave: el Gobierno ya no confiaba en importantes sectores de las FF.AA.

El 29 de junio y sus secuelas

Pero volvamos un poco atrás para analizar sucintamente los hechos del 29. Ya en los días anteriores había trascendido que la mayor parte de los generales no estaban dispuestos a integrar el Gabinete (como lo habían hecho en 'octubre") a pesar de las abiertas invitaciones de destacados personeros de la U.P. probablemente el contenido mismo de estas invitaciones contribuyó a desalentar a los altos mandos: se trataría de colaborar con el proceso revolucionario que dirigen los marxistas. No se trataba ya de "afianzar el orden público", ni de "garantizar las elecciones parlamentarias", ni de "salvar la institucionalidad", tareas que las Fuerzas Armadas no podrían rehuír; se trataba -prácticamente- de subir al carro de - la UP. planteadas así las cosas era evidente que las Fuerzas Armadas no tomarían responsabilidades ministeriales, ya que la mayoría de los oficiales no son marxistas, por decir lo menos.

En la víspera del golpe se había descubierto la preparación de un "cuartelazo", lo - que provocó la intervención de la Justicia Militar y la detención de varios oficiales. El comandante del Regimiento Blindados N° 2 estaba ciertamente implicado en ese complot, de modo que ante la inminencia de su destitución se lanzó a la aventura, contando sin duda - conque recibiría el apoyo de otras importantes unidades militares. Posteriormente dirigentes del movimiento nacionalista Patria y Libertad (de orientación facista), implicados en el golpe, confirmaron esta presunción: "Esperábamos contar con el apoyo de varias otras unidades militares, que previamente nos habían manifestado su respaldo".

Frente a la sublevación militar el Presidente llamó a los trabajadores a ocupar todas - las fábricas, fundos y oficinas para defender al Gobierno. La movilización popular fué masiva. En la mayoría de los casos sólo duró algunas horas, dada la rápida rendición de los gol

pistas, pero en muchos otros -particularmente en los "cordones industriales" que rodean - Santiago, Valparaíso y Concepción- los trabajadores siguen controlando las fábricas. Vol veremos sobre este punto.

Del golpe a la deliberación

El golpe del 29 de junio impactó hondamente a la opinión pública no sólo porque - dejó un trágico saldo de 22 muertos y varias decenas de heridos, sino porque rompió una - larga tradición de "no intervención" que había caracterizado a las Fuerzas Armadas chilenas. en efecto, desde 1932 -cuando un golpe de Estado derribó el Gobierno de Juan Esteban Montero- Chile no había conocido intentos abiertos de derribar a un Presidente constitucional. Es cierto que los cuarteles no siempre estuvieron tranquilos: basta recordar que Arturo Alessandri se apoyó durante tres años (1933-1936) en las Milicias Republicanas (- compuestas por voluntarios organizados en regimientos, cuyos efectivos llegaron a 50.000 hombres) para contrapesar el peligro militar de izquierda; que en 1939 fué desbaratado un complot del general Herrera en el que también estaba implicado el ex-presidente Ibañez; que en 1948 se descubrió otra conspiración en la que Ibañez se hallaba mezclado de nuevo; que antes de la segunda presidencia de este líder se organizó un movimiento político-militar llamado PUMA (1951), que se convirtió más adelante en línea recta (1955). Pero - estas intervenciones fueron tan débiles y esporádicas que se ha podido hablar con razón de "el reposo del guerrero". Ni siquiera el "tacnazo" de 1969 se había acercado a la gravedad de este golpe; no se llegó a movilizar tropas contra el Ejecutivo y el problema gremial subyacente se mezcló permanentemente con sus implicaciones políticas.

La aventura del ex-comandante Souper no fue un hecho aislado, "una de esas golondrinas que no hacen verano", como pretendió un destacado comentarista político. La negativa del PDC a conceder la ley de Estado de Sitio fue un signo de la desconfianza del PDC frente al Gobierno y al Gabinete; por su parte el Presidente no aceptó que se condicionara la aprobación de esta ley a ciertos cambios ministeriales. ¿Qué camino le quedaba a Allende para consolidar el orden interno? obtener el apoyo estable de las Fuerzas Armadas integrándolas al Gabinete. Fue lo que hizo, y entonces se manifestó la gravedad y extensión del conflicto. El apoyo al Presidente manifestado el 29 de junio por los comandantes - en jefe de las tres Fuerzas Armadas significaban un apoyo global al régimen constitucional, pero no un acuerdo con la política del Gobierno UP. Para asumir responsabilidades ministeriales los altos mandos exigían cambios importantes en la gestión de Allende. Los represen -

tantes de la UP consideraron estas exigencias como un pronunciamiento que revestía los caracteres de un golpe legal, y lo rechazaron. El Presidente no tuvo más remedio de formar un Gabinete puramente civil. Las Fuerzas Armadas se quedaron con sus exigencias - en el bolsillo, lo que hacía la situación extremadamente delicada. Fué entonces cuando se levantó la zona de emergencia, con la clara intención de no dejar en manos de los militares el control del orden interno. Se temía un nuevo golpe de un momento a otro, - esta vez apoyado por la mayoría de las Fuerzas Armadas. Este poder había dejado de ser el árbitro neutral, el puente, entre el Gobierno y la Oposición.

Crisis económica y quiebre institucional

¿Cómo explicar este cambio de rumbo en la orientación de las Fuerzas Armadas? Sería ingenuo ignorar que ellas han constituido siempre en Chile un importante grupo de presión; que ha influido -aunque sea con su sola presencia- a la orientación de la política nacional. Pero la deliberación manifiesta y casi pública es una novedad importante - dentro de nuestro cuadro político.

El caldo de cultivo de este hecho nuevo ha sido sin duda la crisis económica que vive el país. Los militares como todos los asalariados se ven azotados por la inflación y la escasez. Más aún, los oficiales -que en una organización tan gerarquizada como el Ejército son los únicos que cuentan cuando se trata de un pronunciamiento- podrían ubicarse en la escala de estratificación junto a los sectores medios asalariados "no productivos", grupos que se han visto particularmente afectados tanto en sus posibilidades de consumo como en sus expectativas de progreso (casa propia, auto, viajes al exterior, etc.) . Ante las perspectivas de un deterioro aún mayor de la situación y teniendo la fuerza en sus manos no es difícil comprender que se hayan sentido tentados de intervenir.

Pero la crisis económica tiene otras consecuencias que también afectan a las Fuerzas Armadas: dejan al país más vulnerable frente a una agresión externa y crean las condiciones para un enfrentamiento interno. Es evidente que la seguridad exterior del país les preocupa a los militares: no sólo Bolivia sino también el Perú estarían muy satisfechos de recuperar - los territorios que fueron suyos antes de 1879. ¿Y cómo afrontar un conflicto externo si se tienen que hacer llamados de urgencia a los países amigos para solucionar los problemas - corrientes: abastecimiento de combustible, transporte, etc.? . En cuanto a la situación interna, ya el Comandante en Jefe del Ejército había declarado que un nuevo paro de "octu-

bre" llevaría al país a una guerra civil, y un paro de ese tipo no podría producirse sin un profundo y generalizado descontento frente a la situación económica. No sólo porque una de sus misiones esenciales es resguardar el orden interno, sino también porque ellos serían los primeros en morir, es claro que los militares harán todo lo posible por evitar una guerra fratricida. Sin embargo, -como ya señalábamos el 17 de junio al analizar el peligro de un golpe- la crisis económica sería insuficiente para provocar una intervención militar si no fuera unida a una crisis institucional y a un conflicto de poderes. Los altos mandos han manifestado que están conscientes de su obligación de intervenir si el Gobierno se aparte gravemente de la Constitución -por ejemplo, cerrado el Congreso- pero también son sensibles a las declaraciones de ciertos parlamentarios, que se autocalifican de "tontos útiles" ya que el Ejecutivo gobierna por decretos, y de la Corte Suprema que señala la inoperancia del Poder Judicial si no se le concede la fuerza pública. Más concretamente, la lluvia de "decretos de insistencia" que cayó en marzo después que las Fuerzas Armadas dejaron -el Gabinete- sin duda habrá hecho pensar a muchos oficiales que los "tontos útiles" eran ellos. Entonces, ¿qué los detiene?

El poder popular

El poder popular no es una realidad nueva en la política nacional: todas las fuerzas sociales organizadas tienen una cuota de poder; que con frecuencia es mucho mayor que -la que les concede la ley. Más aún, muchas veces las leyes no vienen sino a dar status jurídico al poder que las fuerzas sociales han ido adquiriendo con sus luchas. El lema con que se han movilizado muchos grupos de izquierda, "la lucha logra lo que la ley niega", refleja sin duda una realidad. Basta recordar -como ya lo hacíamos al comentar el paro de "octubre"- que en Chile una alta proporción de las huelgas es "ilegal".

¿Qué nuevas dimensiones ha adquirido el poder popular? se ha hablado de los comandos comunales, de los consejos campesinos, de los comités de defensa y vigilancia, -pero sin duda lo más destacado ha sido la constitución de los cordones industriales. Estas organizaciones se formaron a raíz del paro de octubre y pretendían organizar a los trabajadores de ciertos barrios, en las grandes ciudades, a fin de asegurar la producción y distribución de bienes, Promovidos principalmente por el MIR y otros grupos de ultra izquierda, fueron al -comienzo mirados con desconfianza e incluso resistidos por el PC, que controlaba a las bases asalariadas a través de la CUT (Central Unica de Trabajadores) y que se hallaba sobre -

pasado por esta forma de expresión inédita de la clase obrera. Los cordones se han mentenido con un intenso trabajo en las bases, a tal punto que los líderes con frecuencia son sobrepasados por las masas. Sus líderes son muy jóvenes, tanto en experiencia como en edad, y éste ha sido sin duda uno de los factores que ha condicionado tanto su vitalidad como - sus tendencias anárquicas.

Ahora bien después del "tancazo" del 29, los cordones se han desarrollado y - fortalecido, de tal manera que no sólo son estimulados por el MIR y los grupos extremos de la UP sino también por el mismo PC. El Secretario General de este Partido ha afirmado: A la razón que tiene el pueblo hay que unir la fuerza del pueblo. Por lo misma hay que convertir cada fábrica, cada hacienda, cada servicio público cada población, cada sindicato, cada organización de masas en un baluarte del movimiento popular. Lenín decía que - cada establecimiento industrial debía convertirse en una fortaleza de la revolución". Y - diversos líderes de izquierda han insistido en la "insuficiencia material" de la clase obrera para defender las industrias; dicho en buen romance significa: el pueblo necesita armas. En definitiva lo que se busca a través de esa organización defensiva es desalentar a las Fuerzas Armadas para que no intenten un golpe, señalarles que sólo entrarán a las fábricas a - sangre y fuego y que "un régimen levantado sobre miles de cadáveres de chilenos sólo sería posible a través de la más brutal de las represiones y de una implacable dictadura" (Altamirano).

Por último, este desarrollo del poder popular ha traído una consecuencia lateral de no poca importancia: la consolidación de la unidad PC-PS y la mayor homogeneidad estratégica y táctica de todas las fuerzas de izquierda, lo que a su vez -por un proceso dialéctico- contribuye a consolidar el poder popular.

La fuerza disuasiva del poder popular está siendo puesta a prueba: cada día que pasa es un triunfo para ella. Sin embargo, en la medida en que requiera de armas para consolidarse puede convertirse en una espada de doble filo: por un lado desalienta a las Fuerzas Armadas, que no quieren provocar una masacre, pero por el otro lado las inquieta y puede incitarlas a intervenir pronto, antes de que el poder popular se convierta en una organización para militar.

El diálogo congelado

Ya hemos visto que en torno al problema del Estado de Sitio el diálogo UP/DC se quebró. El largo y extraño silencio del presidente de la DC. y los Presidentes de ambas -

cámaras con ocasión del golpe y la drástica negativa del Presidente de la República para discutir condiciones contribuyeron sin duda a enmudecer a los interlocutores. Ambos insisten en la necesidad del diálogo, pero se aferran firmemente a sus posiciones; ceder en algo podría interpretarse como signo de debilidad. Estas "heróicas" actitudes evocan la poesía romántica de G. A. Becquer.

"Tú eras el huracán, y yo la alta
torre que desafía su poder...

acostumbrados

uno a arrollar, el otro a no ceder;
la senda estrecha, inevitable el choque...
¡No podía ser!

Pero, ¿es tan cierto que ni el Gobierno ni la oposición democrática han dado pasos para buscar una conciliación mínima, un consenso básico?. Han existido ciertamente algunos hechos simbólicos que expresan la voluntad de diálogo. Por parte del Gobierno - podría anotarse el nombramiento de un Ministro del Interior estimado por todos como un elemento equilibrado, "hombre de derecho". Podría mencionarse también la voluntad del Presidente de la República de integrar al Gabinete a hombres de izquierda respetuosos de la institucionalidad y sin militancia partidista. Por parte del PDC, el hecho de que su directiva diera orden a sus bases de colaborar en las ocupaciones de industrias, mientras se tratara de defender el régimen democrático. Sin embargo, la directiva de la DC ha planteado un ultimatum al gobierno que extrema la tensión: para empezar a dialogar el Ejecutivo debería cumplir tres condiciones previas: promulgar la Reforma Constitucional de las tres áreas de la economía, detener el armamentismo popular y devolver las industrias ocupadas ilegalmente.

Al problema de la Reforma ya nos hemos referido anteriormente. Hemos señalado que aceptar la posición de la DC significaría para el Gobierno un suicidio político: no pudiendo llamar a plebiscito porque no cuenta con la mayoría del electorado, podría verse bombardeado por una andanada de sucesivas reformas constitucionales que terminarían por inmovilizarlo. Por otro lado, la negativa del Contralor a promulgar una parte de la Reforma aquella acerca de la cual hay acuerdo, se justifica en la medida en que hay una relación

esencial entre ella y las demás partes, pero en ningún caso puede implicar un fallo a favor de la tesis del Congreso. De lo contrario se caería en una "extraña" situación: el Contralor se convertiría en un Tribunal Constitucional, con más atribuciones que el ya existente.

En cuanto las armas en manos de civiles, existe una ley que entrega su control a las Fuerzas Armadas. Hay diversas autoridades que pueden hacer denuncias al respecto, incluso los regidores, y habiendo sospechas fundadas los tribunales pueden conceder órdenes de allanamiento. De hecho, a pesar de que el MIR califica esta ley como "una nueva ley maldita", el sistema está operando y se puede presumir que las Fuerzas Armadas no permitirán que se cree un ejército paralelo.

Queda el problema de la devolución de las empresas ocupadas a partir del 29 de junio. El problema es grave porque en este caso se habría pasado de los "resquicios legales" a la "ilegalidad sin resquicios". No sólo la oposición, sino también las Fuerzas Armadas hacen de esta materia una cuestión de principio: la "vía chilena" al socialismo, la vía legal, habría sido claramente abandonada. Pero la situación no es tan simple. En primer lugar, vale la pena recordar que el 29 fueron ocupados muchos miles de empresas. Ningún jurista podría negarle al Gobierno el derecho a defenderse con todos los medios a su alcance cuando la Constitución ha sido barrida por las metralletas. Una vez controlado el golpe, el problema se reduce a unas 100 industrias encerradas en los "cordones; éstas vendrían a agregarse a las 282 que ya controlaba el Estado, quedando todavía en manos privadas más de 34.000 empresas pequeñas, medianas y grandes. ¿Qué sucederá con estas 100 empresas? El Comité Económico de Ministros, de acuerdo con la CUT, ha decidido que algunas serán devueltas y otras -aquellas que pertenecen a un sector monopólico o estratégico, o en las cuales hay conflictos graves con los patrones -pasarán al área social. Aún así los trabajadores de los "cordones" parecen estar decididos a que ninguna empresa sea devuelta, y ya hemos visto que la CUT no controla esas bases. El Gobierno confía en que el dinamismo de los "cordones" tienda a apaciguarse y a estructurarse, ya que la situación actual crea serios problemas, no sólo políticos, sino también productivos. Por lo demás, los dirigentes de la UP piensan que una política rígida frente a los cordones podría endurecerlos y complicar el naípe; cuando se desatan fuerzas sociales no es fácil controlarlas.

A las Fuerzas Armadas, acostumbradas a la disciplina y al orden les resulta difícil comprender este anárquico movimiento social. Sin embargo, los oficiales más lúcidos pare-

cen convencerse de que el poder popular es una realidad dinámica, viva, que sólo una masacre podría aplastar.

Agosto 1973.

NOTAS

- (1) Cfr. Alain JOXE, *las Fuerzas Armadas en el sistema político chileno*. Edit. Universitaria, Santiago, 1970.
- (2) El Estado de Sitio sólo puede ser declarado por ley, a diferencia de la zona de Emergencia. Este tipo de ley, aprobado por última vez en Chile en 1957, concede atribuciones al Presidente de la República (y, por delegación, a Intendentes y Gobernadores) para trasladar las personas de un punto a otro del país, allanando domicilios y arrestándolas, aunque no hubiesen cometido delito o infracción alguna, si considera que ponen en peligro la seguridad interna, y lo autoriza también para restringir la libertad de prensa, radio y TV, así como el ejercicio del derecho a reunión.
- (3) Circularon diversas versiones. Según algunos, los uniformados exigían 7 o 9 ministerios, la promulgación de la Reforma Constitucional sobre las tres áreas de la economía represión de los grupos extremistas, acercamiento a los EE.UU. para obtener créditos que permitieran mejorar la situación económica, etc.

LOS OBISPOS, EL DIALOGO Y LA "VIA CHILENA"

A pesar de la proliferación de paros, huelgas y atentados terroristas, el hecho político más importante del último mes ha sido el diálogo establecido entre el Gobierno y la directiva del PDC, acogiendo el llamado del Cardenal y los Obispos de Chile (1). Hasta se podría pensar que la violencia terrorista es una consecuencia indirecta del diálogo: los extremistas comprenden que cualquier conversación entre los bandos en pugna -por tensa que sea- hace más difícil que se realice su "ideal" de enfrentamiento armado.

La Iglesia en política

La presencia de la Iglesia en la política chilena es tan antigua como la historia del país (2). Sin abundar en las luchas entre católicos y laicistas en el siglo XIX, baste señalar que a comienzos de este siglo la vinculación entre la Iglesia y la política era tal que un jesuita podía escribir: El Partido Conservador es el brazo derecho de la Iglesia chilena" (3) Incluso se afirmaba que el Arzobispo de Santiago había dicho: "lo que es bueno para el Partido Conservador es bueno para la Iglesia". Pese a las insistentes directivas de Mons. Crescente Errázuriz a su clero, prohibiéndole inmiscuirse en la política partidista, la vinculación de la Iglesia a políticas conservadoras se prolongó todavía por varios decenios (4). Por eso, comentando el llamado del Cardenal, un Senador afirmaba acertadamente: "Durante años -y hablamos de la generalidad del ámbito de nuestro continente- la Iglesia actuó como protectora o asociada de los regímenes políticos conservadores y aún dictatoriales, y en el fondo su prédica se limitaba a aconsejar resignación a los explotados".

A partir del Gobierno del Frente Popular (1938) la actitud de la Jerarquía empezó a cambiar: no sólo permitió la existencia de la Falange, partido que se reveló contra su padre conservador, sino que contribuyó a legitimar un régimen de izquierda (5). Con todo, hubo que esperar la llegada al pontificado de Juan XXIII y el impacto de la revolución cubana para que los Obispos rompieran sus lazos con la derecha (6).

Sin embargo, el cambio más importante se produjo después del Segundo Concilio Vaticano: como suele suceder con este tipo de acontecimientos, su impacto no se limitó a las declaraciones sino que se ha prolongado a través de las ideas y fuerzas que contribuyó a liberar y promover. Como la Constitución sobre la Iglesia había invitado a los Obispos a "ejercitar el poder jurídico por medio de conferencias regionales", los Obispos latinoamericanos se reunieron en Medellín, Colombia, en agosto y septiembre de 1968, a fin de trazar nue

vas líneas para la Iglesia del sub-continente. Esta Conferencia da un paso trascendental: del "no-compromiso con los pobres, los débiles, los postergados; se denuncia la "violencia institucionalizada" y se anuncia la liberación. En términos más concretos esto significa que la Iglesia deberá oponerse a cualquier forma de explotación del hombre y respaldar los intentos de cambio social. Se ha asumido una posición política progresista, por decirlo menos.

La Iglesia y el Gobierno de Allende

Sería largo hacer un recuento de todas las intervenciones de la Jerarquía en estos tres años y muy difícil precisar su influencia política. Sin embargo, parece evidente que esta influencia ha existido, ya que tanto la prensa de Gobierno como la oposición se han encargado de utilizar (y con frecuencia de deformar) hasta la más mínima intervención de las autoridades religiosas.

De todas las intervenciones de los Obispos y sacerdotes, nos parece que hay tres que han tenido un especial impacto: el "documento de trabajo" Evangelio, política y socialismo (abril 1971), las declaraciones en torno al Primer Encuentro Latinoamericano de "Cristianos por el socialismo" (abril 1972) y las que se refirieron a la Escuela Nacional Unificada (ENU, abril 1973).

El documento de 1971 fue emitido luego de una declaración en que los Obispos proclamaban: "Frente al legítimo Gobierno de Chile, respeto a sus autoridad y colaboración en su tarea de servicio al pueblo". El calificativo de "documento de trabajo" mostraba la actitud abierta de la Jerarquía y de hecho el contenido mismo del documento ha sido considerado como "abierto" y aún "positivo" por algunos militantes de izquierda. Sin embargo muchos otros consideraron que se insistía de tal modo en los "riesgos" del socialismo marxista que la consecuencia podría ser una contribución a mantener el statu quo (7).

La presencia de numerosos sacerdotes y hasta de un Obispo extranjero hizo que el Encuentro Latinoamericano de "Cristianos por el Socialismo" tuviera una trascendencia mucho mayor que la que podría alcanzar un movimiento político de simples laicos (8). La Jerarquía chilena no patrocinó el Encuentro, pero tampoco -aunque deslindó totalmente su responsabilidad- hizo nada por impedir su realización. A pesar de las diferencias de opiniones que se manifiestan en los cambios epistolares, el rasgo fundamental en la actitud de los Obispos fue la permisividad.

En fin, la declaración del "Comité Permanente del Episcopado" en torno a la ENU -

fue matizada, señalando aspectos positivos, críticas y vacíos (9). Gobierno y oposición se valieron de esto para utilizar el ascendiente moral de la Iglesia a favor de sus posiciones políticas (10), pero la verdad es que entre los dos grupos en pugna la Iglesia ocupó el centro; el calificativo que mejor correspondería a la intervención de los Obispos sería el de "crítica constructiva".

En general se podría afirmar, como lo ha hecho un diputado de izquierda, que "sin adoptar una actitud política, pero asumiendo su responsabilidad como institución comprometida en este país, la Iglesia y el Cardenal han mantenido en los últimos dos años y medio una actitud abierta y positiva que se funda exclusivamente en el propósito de servir el interés nacional". Por esto —más allá de su utilización coyuntural— las declaraciones de la Jerarquía han sido acogidas normalmente con simpatía por los diarios y revistas de izquierda y con desagrado, más o menos velados, por los órganos de derecha.

La Iglesia y el diálogo

Hasta aquí nos hemos referido a las intervenciones de la Jerarquía que se han mantenido en el plano ideológico o doctrinario. Lo nuevo, lo que ha hecho noticia en el mes recién pasado, es que la Iglesia ha intervenido para sugerir una medida política concreta: el diálogo.

No hay que extrañarse demasiado de la proposición de medidas concretas. Pío XII las sugirió con frecuencia durante el período de la guerra fría, para promover la distensión y el desarme. En Chile se podría citar como precedente la famosa entrevista de 1953 entre Monseñor Caro y el Presidente Ibañez para defender a los campesinos, en conflicto con sus patrones de derecha (11). En estos casos, el Papa y el Cardenal tomaron claras posiciones políticas. Lo mismo sucede en el caso que nos ocupa. En efecto, en términos estrictamente políticos, existen fuera del diálogo otras posibilidades de acción: se podría utilizar tácticas distractivas o dilatorias, aplicar medidas represivas, promover el enfrentamiento armado. El diálogo es un camino, entre otros, y corresponde a una determinada posición política (12).

En este sentido, por más cierta que sea la afirmación de los Obispos: "sólo nos mueve el bienestar de Chile", no es menos cierto que su declaración: "no representamos ninguna posición política" debiera ser matizada. El diálogo no es una posición partidista, pero es una posición que se opone a la que han adoptado los grupos extremistas: éstos ciertamente no ven con simpatía un llamado a "que se desarmen los espíritus y las manos". Para decir

lo en forma más directa: los Obispos han tomado una posición política opuesta a la del MIR y "Patria y Libertad" (13).

Pero hay algo más. El Partido Nacional opinaba que "el diálogo es una pérdida de tiempo" (14) y en sectores de la DC habría existido una disposición formal a dialogar: lo que esperaban era que estas conversaciones contribuyeran a terminar con el "mito del diálogo". Por otra parte, en la izquierda el Partido Socialista no ocultó su oposición a las conversaciones.

Si las declaraciones señaladas dan a luz sobre esta posición política, también le dan ciertas reacciones que siguieron al ingreso de las Fuerzas Armadas al Gabinete, con condición que fue considerada indispensable para hacer fructificar el diálogo. La Democracia Radical y el Partido Social Demócrata manifestaron su desacuerdo porque se utilizarían las Fuerzas Armadas para continuar la fracasada política gubernativa. En la izquierda, el MAPU se unió al MIR, denunciando la capitulación del Gobierno.

Los Obispos tienen razón al señalar que a través del diálogo se pueden lograr "soluciones duraderas", que cuenten con "la adhesión de la gran mayoría de los chilenos", pero esamayoría excluye a los grupos extremistas, a los partidos de derecha, al MAPU, a sectores importantes del Partido Socialista y probablemente a algunos sectores de la Democracia Cristiana (15).

¿Quiénes constituyen, entonces esta "gran mayoría"? Los que tienen "la voluntad de realizar urgentes y profundos cambios sociales" y están dispuestos a "crear las condiciones de un diálogo que haga posible el entendimiento".

El diálogo y la "vía chilena"

Puede parecer sorprendente que haya sido necesaria la intervención de una autoridad religiosa para que se restableciera el diálogo, ya que la discusión, la búsqueda de acuerdos y compromisos, forman parte de la esencia del sistema democrático. El Parlamento tiene por objeto precisamente servir de tribuna a las diferentes opiniones para que se impongan las soluciones más razonables o se logren los compromisos más convenientes para el país. Pero poco a poco este lugar de encuentro ha ido perdiendo su sentido porque quienes podrían dialogar ahí han olvidado una parte de su programa: la UP por su tendencia a apartarse de la vía chilena mediante el uso excesivo de "resquicios legales" y la DC por el olvido de sus proyectos de cambio social. El distanciamiento se ha acentuado en tal forma que se ha llegado al borde de la guerra civil. Entonces -como dos sonámbulos que despiertan en la cornisa de un alto edificio- han visto que si no se tienden la mano caerán al -

vacío. Pero ninguno de los dos quiere hacer el primer gesto, para no manifestar su debilidad. Hace falta que se aproxime alguien que inspire confianza y una las manos; ese ha sido el rol del Cardenal (16). Sin ese gesto la historia de Chile pudo haber seguido un camino de sangre.

Queda la pregunta sobre el reingreso de las Fuerzas Armadas al Gobierno. ¿Por qué era tan indispensable para hacer posible el diálogo? Porque existía, existe aún, una aguda crisis de confianza. Como lo ha señalado un destacado comentarista político, "el problema de la confianza no es un problema secundario ni en la vida de los pueblos ni en las relaciones entre simples seres humanos; es un problema capital". Por su parte los juristas han señalado que no hay sistema jurídico que resista la voluntad decidida a tergiversar las leyes; sin confianza, el sistema jurídico chileno sería insostenible. Pues bien, los representantes de las Fuerzas Armadas son precisamente la garantía que inspira confianza. El Gobierno comprendió también que si se continuaba aplicando la "ley de control de armas" en forma intensiva, se iría creando un abismo cada vez mayor entre muchos militantes de la UP y las Fuerzas Armadas (17); al integrar los altos mandos al Gabinete, el gobierno les estaba demostrando que no tenía intenciones de formar un ejército paralelo que justificara la búsqueda masiva de armas. En fin, el hecho de que los militares aceptaron tomar sobre sus hombros -con poderes limitados- la grave crisis que vive el país, sólo puede explicarse si ellos han comprendido que ésta es la forma menos costosa, en términos sociales y políticos, de poner orden y evitar el enfrentamiento.

El retorno de los uniformados ha sido objeto de muchos comentarios. El articulista de Le Monde (París) escribía: "Cabe preguntarse si el retorno a escena de los militares al Gobierno no van a provocar un estallido en la coalición de la Unidad Popular, pues los socialistas, el MAPU y la IC han manifestado su hostilidad resuelta a esta fórmula, que permite, sin embargo, a Allende ganar tiempo y luchar contra el terrorismo que se desarrolla". Y un redactor del Times (Londres) señalaba: "Es posible que finalmente un sector del PS, junto con el MAPU y la IC le retiren su apoyo (a Allende)... Si esto sucede la UP podría ser reemplazada por una nueva alineación de centro-izquierda, integrada por comunistas, socialistas moderados, radicales y las Fuerzas Armadas, probablemente con un grado de apoyo de los democristianos, pero enfrentando una apasionada oposición de los revolucionarios de la izquierda y los nacionalistas de la derecha" (18).

"Cabe preguntarse"... "Es posible"... En todo caso, es seguro que si la Unidad Popular se quiebra será porque algunos no han respetado la "vía chilena", el camino del -

consenso, la voz de la mayoría. Con su intervención los Obispos han contribuido a que la Unidad Popular sea consecuente con su propio proyecto.

Septiembre 1973

NOTAS

- (1) El texto del llamado y un comentario editorial pueden leerse en el N° 221 de MENSAJE (agosto 1973).
- (2) Nos referimos a la Iglesia jerárquica: Obispos, sacerdotes, religiosos. Hasta ahora los grupos apostólicos de laicos no han tenido ninguna influencia política importante.
- (3) Cf. Jorge Fernández Pradel, "Le Chili après 100 ans d'indépendance", Paris, 1912. En honor a este notable apóstol social vale la pena señalar que en su edad madura - consideraba este libro como un "pecado de juventud".
- (4) Cuando el P. Vives afirmaba en 1935: "La izquierda y la derecha no implican división en el terreno religioso; ellas son tendencias económicas..." era una voz - que clamaba en el desierto. Su acción y sus ideas le valieron largos años de exilio.
- (5) Según algunos observadores, la visita de Monseñor Caro al Presidente electo contribuyó en forma importante a la consolidación de Pedro Aguirre Cerda como Jefe de Estado, ya que su investidura era cuestionada por la derecha.
- (6) La pastoral El deber social y político en la hora presente, que constituyó un best-seller, fué violentamente atacada por el partido Liberal. Cf. MENSAJE N° 144, - noviembre 1962.
- (7) Planteamientos críticos de izquierda fueron hechos por "Los ochenta" en El compromiso político de los cristianos. Fundación Manuel Larraín, Talca, julio 1971, y por el teólogo Juan Luis Segundo S.J. en La Iglesia chilena ante el socialismo, Fundación Manuel Larraín, Talca, octubre 1971.
- (8) Véase MENSAJE, N° 209, junio 1972. Véase también: Cristianos por el socialismo. Primer Encuentro Latinoamericano. Ed. Mundo Nuevo, Santiago, 1972, 302 p. y -

- Cristianos por el Socialismo, ¿consecuencia cristiana o alineación política?, IDEP Santiago, 1972, 438 p.
- (9) Sobre la ENU, cf. MENSAJE, N° 218, mayo 1973 y La ENU: ¿control de las - conciencias o educación liberadora?, Fundación Manuel Larraín, Talca, mayo-junio 1973. Muchos militantes de oposición quedaron muy irritados porque la Iglesia no pronunció un "no" rotundo contra la ENU.
 - (10) El diario Clarín, señaló que los "Obispos Latinoamericanos y la Unesco recomiendan la Escuela Nacional Unificada" y El Mercurio habló del "rechazo episcopal a la - ENU".
 - (11) "Logró no sólo calmar al Presidente, sino convencerle de la necesidad de mantener una actitud neutral y, en cierto modo, favorable a los campesinos". Cf. Henry A - Landsberger - Fernando Canitrot M., Iglesia, intelectuales y campesinos, Ed. del Pacífico, Santiago, 1967, p.30.
 - (12) Esta opción puede justificarse plenamente desde un punto de vista ético, ya que - "La peor desgracia que puede ocurrir... es la guerra civil", pero aquí nos limitaremos a situarla en términos meramente políticos.
 - (13) Parece evidente que el asesinato del Edecán Naval del Presidente de la República fue obra de terroristas decididos a impedir el diálogo.
 - (14) Un articulista de derecha criticaba la "falsa paz", destinada sólo a que el marxismo gane tiempo y siga atropellando la ley". Y luego agregaba: "Parece indispensable que las jerarquías de Chile, al recomendar el desarme de los espíritus, añadan a sus laudables llamados las definiciones necesarias. La paz, para que sea verdadera, debe ser justa. No puede haberla si se atropella la libertad ...". El autor mitifica la - "ley" y la "libertad", convirtiéndolas en pre-requisitos para el diálogo; una forma elegante de decir: no.
 - (15) No se trata de que los Obispos los excluyan, sino de que ellos mismos se excluyan

del camino propuesto por la jerarquía católica.

- (16) Dejando de lado las imágenes, la intervención del Cardenal fue muy activa: conversó con altos dirigentes políticos de varios sectores antes y después del "diálogo", logró reunir en su casa -lugar no comprometido- a personalidades de bandos opuestos y se entrevistó hasta con el Presidente Allende, consciente de que el Jefe de Estado tiene más fuerza que toda la UP junta. No quiso ser "aval" ni "mediador", sino sólo facilitar los encuentros. Su intervención fué decisiva para algunos dirigentes políticos cristianos, que consideraban el "diálogo" como un sacrificio político muy duro.
- (17) Muchos sectores de la UP han calificado esta ley como "la nueva ley maldita"; el PC y la CUT han pedido que sea reformada. El Comandante en Jefe del Ejército - había anunciado una querrela contra un diputado socialista a causa de las injurias a las Fuerzas Armadas que éste había preferido luego que en un allanamiento en diversas industrias de Punta Arenas un obrero cayó muerto a bala.
- (18) Muchos científicos políticos consideran que hay una "ley" de las coaliciones que las impulsa hacia el centro: no hacia el centro de la propia coalición sino hacia el centro del abanico político.

ALGUNOS PROBLEMAS DE LA TRANSICION AL SOCIALISMO

Para concluir quisieramos destacar algunos problemas que plantea la transición al socialismo, a partir de la experiencia chilena.

En primer lugar, hay que señalar que el proceso comienza en un país subdesarrollado, ciertamente, pero marcado por la "necesidad" de consumo y por el espíritu reivindicativo de la clase obrera. Es difícil en estas condiciones pedir sacrificios que permitan hacer marchar la economía de manera normal y aún reemplazar las inversiones que la burguesía no querrá hacer. Si a esto se agregan los déficits que producen normalmente las empresas estatizadas durante los primeros años, es casi inevitable que sobrevenga una fase de inflación y/o depresión económica. Para que esta situación crítica no provoque fracasos electorales, sería necesario realizar al mismo tiempo cambios en los planos cultural e ideológico.

Hay otro problema que se plantea al analizar el proyecto de transición al socialismo. Se pueden distinguir dos aspectos: por una parte, la lucha contra el poder de los capitalistas; por otra, la construcción de una sociedad más igualitaria, mediante la redistribución de los ingresos. Ahora bien, las fuerzas sociales más importantes en la lucha parecen ser los obreros de las industrias claves; por su situación privilegiada; ellos podrían fácilmente paralizar un país. Sin embargo, con frecuencia estos obreros no son los más pobres. En el caso de Chile, por ejemplo, se ha calculado que el 50% de los obreros industriales forman parte de la mitad más rica de la población. Una redistribución de los ingresos afectaría a un gran número de estos obreros. Ahora bien, ¿cómo se puede atacar a las mismas fuerzas que se utiliza para luchar contra la burguesía?

Un tercer problema de la transición al socialismo en democracia se refiere a la clase media o pequeña burguesía. Los teóricos de la transición han pensado en la necesidad de dividir al adversario, buscando la alianza con la clase media para luchar contra la burguesía. Sin embargo, la experiencia chilena ha mostrado que en cuanto se comienza a atacar a los grandes propietarios la pequeña burguesía se siente amenazada, aunque en lo inmediato logre buenas ganancias. Los pequeños y medianos empresarios y comerciantes dicen: "Sin duda, ustedes no quieren liquidar toda la propiedad privada en esta etapa, pero lo harán en la próxima". Se puede encontrar una reacción semejante en los que tienen

Este texto es la conclusión del artículo ya citado que apareció en la revista Etudes (París) en febrero de 1973.

un capital "incorporado" bajo la forma de una profesión rentable .

Por último, la transición al socialismo es la lucha de los que venden su fuerza de trabajo contra los capitalistas: se trata, ciertamente, de una lucha de clases. Ahora bien, los partidos políticos no coinciden con las clases, como es evidente en el caso chileno; la D.C. por ejemplo, cuenta en Chile con numerosos campesinos y obreros en sus filas: asalariados que se encuentran entre los más pobres del país. ¿Es posible construir el socialismo dando una doble batalla: contra la burguesía y contra estos proletarios? A menudo en Chile el sectarismo ha hecho confundir el partido con la clase, olvidando que los partidos no son sino mediaciones. Es por otra razón tal vez que un senador comunista afirmaba hace algunos meses: "una revolución debe ser la obra de todo un pueblo". Uno estaría tentado de agregar: una revolución debe ser la obra de todos los pobres, de todos los que tienen un mundo que ganar y no mucho que perder.

APENDICEBIBLIOGRAFIA SOBRE EL PROCESO CHILENO

Esta bibliografía, preparada con la colaboración de Claudio Muñoz Meza, pretende reunir la mayor parte de los libros y artículos más importantes que se han escrito respecto al actual proceso político chileno. Hemos excluído, por razones obvias, los artículos aparecidos en la prensa diaria y semanal. La mayor parte de las publicaciones citadas son chilenas, pero hemos incluído también aquellas publicaciones extranjeras de las que hemos tenido noticias.

La clasificación propuesta intenta solamente facilitar la consulta, sin pretender que las categorías sean absolutamente excluyentes; esto deberá tenerse en cuenta especialmente en las obras que reúnen trabajos de varios autores. Hay algunas referencias que es tan incompletas debido a la limitación de nuestras fuentes de información.

Dada la amplitud del tema y la cercanía del período en cuestión, hemos preferido presentar una lista no selectiva. Estamos conscientes de que los trabajos indicados son de calidad y género desigual: el tiempo y la crítica se encargarán de realizar la necesaria selección.

1.- La transición al socialismo: etapas y problemas

- ACQUAVIVA, A. Et al. Chili de l "Unité Populaire. Paris, les éditions sociales, 1971
- ALLENDE habla con DEBRAY (Prólogo y Entrevista), Punto Final 5 (126), Marzo, 1971, pp. 3-63
- ALLENDE, SALVADOR Nuestro camino al socialismo. La vía chilena, (selección de textos. Incluye el programa de la Unidad Popular), Buenos Aires, Ed. Papiro, 1971, - 185 p.
- ALLENDE, SALVADOR Su pensamiento político, Santiago, Quimantú, 1972, 416 p.
- ANDRADE, JOAQUIN Chile: El Enfrentamiento Inevitable. (Entrevista en Cuba a Carlos Altamirano), Punto Final (suplemento) (5), (120), Diciembre, 1970
- ANGELL, ALAN Chile: From: from christian democracy to marxism?, The Worl Today - (Londres), 26 (11): Noviembre, 1970, pp. 488-496
- AVELINO Avances y Tropiezos en la "vía chilena", Punto Final 6 (142), Octubre, 1971, pp. 26-29
- AYLWIN, PATRICIO Dos años de destrucción, Política y Espíritu 27, (336), Septiembre - 1972, pp.23-27
- BARAHONA, PABLO; CAMPOS MENENDEZ, ENRIQUE y otros Visión crítica de Chile, 2º edición, Santiago, Ediciones Portada, 1972, 344 p.
- BASSO, LELIO et al: Transición al socialismo y experiencia chilena, CESO - CEREN - PLA, Santiago, 1972, 191p.
- BOSC, R. Chili: noeveau jalon du socialisme, projet, N°50, décembre, 1970, pp. 1153 1157
- BOYE, OTTO Comienzos de la administración Allende, Mensaje, N° 195, Diciembre, - 1970, pp. 567-569
- BOYE, OTTO Los sesenta días que conmovieron a Chile, Mensaje, N° 194, Noviembre, 1970, pp. 503-505
- CABIESES, MANUEL Trágico resultado de una línea errónea , Punto Final, (6), 158, Mayo, 1972, pp. 2-5

- CADEMARTORI, JOSE El primer año del Gobierno popular, Principios, 30, (141-142) Septiembre-Diciembre, 1971, pp. 72-69
- Cambios en la situación política, Política y Espíritu, 27, (329), Enero, 1972, pp. 5-11
- CAMPOS M. ENRIQUE Chile vence al marxismo, Santiago, Ed. Portada, 1972, 67 p.
- CANIHUANTE, GUSTAVO La revolución chilena, Santiago, Biblioteca Popular Nacimiento, 1971, 280 p.
- CANONICA, MICHELE Y DEL BOCA, SANDRA Il viaggio di Fidel Castro in Chile, Problemi del Socialismo, 13, (5-6), Septiembre-Diciembre, 1971 pp. 918-923
- Las cartas están echadas: socialismo o fascismo para Chile, Punto Final, (6), 146, Dic. - 1971, pp. 2-5
- El caso Schneider. Operación Alfa, Santiago, Quimantú, 2ªed., 1972, 192 p.
- CASTRO, FIDEL Chile 1971 (discursos, Santiago, Ed. Universitaria, 1971, 301 p.
- CEDETIM (Centro Socialista de Documentación y de Estudios sobre los problemas del - Tercer Mundo, Francia), Chile 1970-1972, Boletín Bimestral de Cedetim (26): Febrero, 1973
- CERDA, CARLOS El Leninismo y la victoria popular, 3ª ed., Santiago, Quimantú, 1971, 276 p.
- Los comienzos del Gobierno de Allende, Política y Espíritu (Editorial) 26, (319), Marzo 1971, pp. 5-9
- CORDOVA CLAUDE, Ted ¿Chile sí? Los primeros 800 días, Buenos Aires, Ed. La Flor, 1972, 160 p.
- CORVALAN, LUIS Chile: The people take over. World Marxist Review, 13, (12), december, 1970, pp. 5-12
- CORVALAN, LUIS Camino de Victoria, Santiago, Imprenta Horizonte, 1971, 427 p.
- CORVALAN, LUIS Discurso en el Teatro Caupolicán, Principios, 33, (150) Marzo-Abril, 1973, pp. 6-26
- Crisis de Confianza, Mensaje (editorial), N° 214, Noviembre, 1972, pp. 630-633
- Cronología política del Gobierno U.P., Política y Espíritu, 28 (338), Noviembre, 1972, pp. 47-50

- ¿Chile al borde de la guerra civil? Este y Oeste, (París-Caracas), 10. (159), Junio, 1972, pp. 1-7
- Chile: El camino al socialismo: Editorial Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1970, 46 p.
- La lucha por el modelo para los cambios, Política y Espíritu, 27, (330), Febrero-Marzo, 1972, pp. 4-9
- CHONCHOL, JACQUES Elementos para una discusión sobre el camino chileno hacia el socialismo, Cuadernos de la Realidad Nacional, (7), Marzo, 1971, pp. 165-184
- DEBRAY, REGIS Entretien avec Allende sur la situation au Chili, París, F. Maspero, 1971, 176 p.
- La "Declaración de Diciembre", Punto Final, (suplemento), (6), 148, Enero, 1971, pp. 1-7
- DURAN N, JULIO Horas Chúcaras, Santiago, Ed. Universitaria, 1973, 149 p.
- ENRIQUEZ, MIGUEL La alternativa de Chile es Socialismo o facismo, Punto Final, (suplemento), 6, (143), Noviembre, 1971, pp. 1-7
- FALONY, ROBERT Chili: Les Débuts de l'expérience socialiste, Socialisme, 104, Marzo, 1971
- FEINBERG E., RICHARD The triumph of Allende. Chile's legal revolution, New American Library, 276 p.
- Fidel en Chile, Santiago, Quimantú, 1972, 336 p.
- FIDEL en Chile, Punto Final, (suplemento) (6), 144, Nov., 1971, 31 p.
- FOURNIAL, GEORGE Chili d'ou viennent les difficultés et qui les exploite?, France, Nouvelle, (1899), 5-11, Septiembre, 1972, pp. 22-24
- FOXLEY, ALEJANDRO et al. Chile: búsqueda de un nuevo socialismo, Ceplan, Ed. Nueva Universidad, Santiago, 1971, 266 p.
- FRANCIS, MICHAEL y VERA-GODOY, HERNAN Chile: Christian Democracy to Marxism, The review of politics, julio, 1971
- FREI, EDUARDO Mensaje de despedida al país del presidente Frei, Política y Espíritu, 25, (318), Diciembre, 1970, pp. 14-19
- GARCES, JOAN Estado Burgués y Gobierno popular, Cuadernos de la Realidad Nacional, (15), Diciembre, 1972, pp. 132-151

- GARCES, JOAN La problemática del desarrollo en Chile durante el gobierno Popular, Revista de la U.T.E., (11-12), Noviembre-Diciembre, 1972 y Enero-Febrero, - 1973, pp. 83-100
- GARCES, JOAN El proceso revolucionario chileno y la violencia física, Revista de la U.T.E., (7), Abril, 1972, pp. 51-66
- GARCES, JOAN 1970, La pugna política por la presidencia en Chile, Editorial Universitaria, Santiago, 1971, 128 p.
- GARCES, JOAN Revolución, Congreso y Constitución. El caso Tohá, Santiago, Quimantú, 1972, 413 p.
- GARCES, JOAN Vía insurreccional y vía política: dos tácticas, Revista de la U.T.E. (13-14) Marzo-Junio, 1973, p. 7-38
- GELLER, LUCIO Algunas preguntas sobre la construcción del socialismo en Chile, Cuadernos de la Realidad Nacional, (9), Septiembre, 1971, p. 101-118
- GLUSKSMANN, CHRISTINE Un an apres la victoire, La Nouvelle Critique (supplément), (47), 228, Octubre-Noviembre, 1971, pp. II-XVI
- HORNE, ALISTAIR Small earthquake in Chile, The Viking Press, 349 p.
- JARPA, SERGIO O Creo en Chile, Santiago, Sociedad Impresora de Chile, 1973, 272 p.
- JOHNSON, DAL The chilean road socialism (antología de documentos claves de la U.P.), Doubleday-Anchor, 546 p.
- JOXE, ALAIN Le Chili entre le freinage, et l'affrontement, Politique aujourd'hui, 7-8 Juillet-aout, 1972, pp. 71-95
- LABARCA, EDUARDO Chile al rojo, Reportaje a una revolución que nace, Santiago, Editorial de la Universidad Técnica del Estado, (2ª edición), 1971, 398 p.
- LABROUSSE, ALAIN L'expérience chilienne; Réformisme ou révolution?, París, Seuil, 1972, 397 p.
- LAMOUR, CATHERINE L'orientation socialiste du Chili, Politique aujourd'hui, Juillet Aout, 1971, pp. 71-87
- LAMOUR, CATHERINE Le pari chilien, París, Ed. Stock, 1972, 305 p.
- MAIRA, LUIS Chile: Dos años de Unidad Popular, Santiago, Quimantú, 1973, 302 p.

- MAIRA, LUIS De las elecciones a las jornadas de El Arrayán, Punto Final, (suplemento) (6), 152, Febrero, 1972, pp. 1-6
- MARTNER, GONZALO Las etapas del proceso revolucionario chileno, Punto Final, (6) 149, Enero, 1972, pp. 14-15
- MERCIER, LUIS Chile under Allende, Survey, 17, (2) Spring, 1971, 93-101
- MILLAS, ORLANDO Los acuerdos de "El Arrayán", Principios, 144, Marzo-Abril, 1972, pp. 60-81
- MORENO, FERNANDO Les limitations a "la voie chilienne vers le socialisme", Cultures et développement, vol. IV, N° 4, 1972, pp. 731-753
- MOREIRA A., MARCIO La gauche chilienne au pouvoir, Esprit, Mai, 1971, 1060-1084
- MOULIAN, TOMAS Y WORMALD, GUILLERMO Algunos problemas teóricos de la transición al socialismo en Chile, Cuadernos de la Realidad Nacional, (10), Diciembre, 1971, pp. 98-129
- Movimiento Revolucionario Manuel Rodríguez (M.R.-2) Por una revolución socialista, Punto Final, (5), 119, Diciembre, 1970, 8 p.
- MORRIS J., DAVID We must make haste slowly, Random, House, 307 p.
- MUNSTER, ARNO Le Chili entre l'unité populaire et l'affrontement de classes, les temps Modernes, 317, 1972, pp. 965-998
- MUSALEM, JOSE Crónica de un fracaso, Santiago, Ed. del Pacífico, 1973, 399 p.
- N.A.C.L.A. (North, American Congress on Latin American), "New Chile", (Documento), 208, p.
- NIEDERGANG, MARCEL Chili. Un printemps socialiste, Le Monde, 22, 23, 24, 26, Octubre, 1970
- No a los extremismos, Mensaje (Editorial) N° 206, Enero-Febrero, 1972, p. 11-16
- NOHLEN, DIETER El camino incierto de Salvador Allende, Política y Espíritu, 28, (338) Noviembre, 1972, pp. 63-64
- NOHLEN, DIETER, Chile-la experiencia socialista, Alemania Federal, Edición Hoffmann und Campe, 1973, ed. Alemana

- ORREGO, CLAUDIO Empezar de nuevo, Santiago, Editorial del Pacífico, 1972, -
238 p.
- ORREGO, CLAUDIO El Paro Nacional: vía chilena contra el totalitarismo, Santia-
go, Edit. del Pacífico, IDEP, 1972, 94 p.
- ORREGO, CLAUDIO Reflexiones para una tarea democrática, Política y Espíritu 28,
(341), Febrero-Marzo, 1973, pp. 16-23
- PALMA V., IGNACIO A raíz del mensaje presidencial, Política y Espíritu, 26, (322),
Junio, 1971, pp. 31-37
- PEREZ DE ARCE, HERMOGENES Comentarios escogidos, Santiago, Ediciones Portada,
1972, 432 p.
- PEREZ DE ARCE, HERMOGENES Por qué el socialismo democrático es irrealizable, Por-
tada, (24), Septiembre, 1971, pp. 11-20
- PETRAS, JAMES La transizione al socialismo in Chile, Problemi del socialismo, 4, -
Luglio-Agosto, 1971, pp. 547-575
- PETRAS? JAMES "The transition to socialism in Chile: perspectives and problems", -
Monthly Review, 23, (5), octubre, 1971, pp. 43-71
- PIZARRO, CRISOSTOMO Vía socialista y democracia socialista, Santiago, 68 p.
- Al pueblo no lo para nadie; ¡Avanzar sin transar!, Punto Final, (suplemento), 7, (179),
Marzo, 1973, pp. 1-15
- El pueblo apoya la Revolución socialista (discurso de Salvador Allende), Punto Final,
(suplemento), (6), 156, Abril, 1972, p. 12 p.
- PRADO, BENJAMIN Análisis de la actual situación política, Política y Espíritu, 26,
(322), 39-50, Junio, 1971, pp. 39-50
- PRAT, JORGE Las cuatro estrategias, Portada, (26), Diciembre, 1971, pp. 19-32
- El Primer Año del Gobierno Popular, (Documentos y posiciones del MAPU), Santiago,
Unidad Proletaria, 1972, 221 p.

- RAMOS, SERGIO La situación de transición: Características de la coyuntura chilena, Sociedad y Desarrollo, (1), Enero-Marzo, 1972
- Reflexiones sobre la visita de Fidel, Punto Final, (6), 144, Noviembre, 1971, pp. 2-5
- REYES CASTILLO, FIDEL Naufraga la Unidad Popular?, Santiago, editado por el autor, 1973, 135 p.
- RIBEIRO, DARCY Nuevos caminos de la Revolución Latinoamericana, Estudios Internacionales, 5, (18), Abril-Junio, 1972, pp. 3-28
- RONANDA, ROSSANA Chili, An I., Les temps Modernes, (28), 306, Janvier, 1972, pp. 1075-1104
- RUIZ-ESQUIDE, MARIANO El socialismo traicionado, Santiago, Ed. del Pacífico, IDEP, Febrero, 1973, 190 p.
- SAMANIEGO, AUGUSTO El Capitalismo de Estado y el camino al Socialismo, Principios, 139, Mayo-Junio, 1971, pp. 24-35
- SIGMUND, PAUL Dos años de Allende, Problemas internacionales (Washington), v. XX, Enero-Febrero, 1973, pp. 28-43
- SILVA S., JULIO Notas sobre la transición a la nueva sociedad, Revista de la U.T.E., (13-14), Marzo, Junio, 1973, pp. 39-54
- Tareas que plantea la U.P., (texto de los acuerdos de "El Arrayan"), Punto Final, (6), 152, Febrero, 1972, pp. 6-16
- TEITELBOIM, VOLODIA "La politique d'Unité Populaire au Chile", La Nouvelle Critique, 41, Febrero, 1971, pp. 24-25
- TEXIER, JORGE Chile: first year of popular government, World Marxist Review 14, (10), October, 1971, pp. 107-116
- TEXIER, JORGE Un an de pouvoir populaire au chili, La Nouvelle Revue Internationale, (11), 159, Noviembre, 1971, pp. 104-116

- TEXIER, JORGE Les révolutionnaires petits-bourgeois au Chili, La Nouvelle Revue Internationale, (8), 168, aout, 1972, pp. 127-138
- TEXIER, JORGE La transición al socialismo y el ultraizquierdismo, Principios, 145, Mayo-Junio, 1972, pp. 51-67
- 165 días de Vía Chilena, Revista Portada, N°25
- La vía chilena cumplió un año, pero sigue discutiéndose su viabilidad, Panorama Económico (editorial), (265), Noviembre-Diciembre, 1971, pp. 3-10
- VIAL C., GONZALO El retroceso de la revolución, Portada, (35), Ultimo trimestre, 1972, (N° Especial), pp. 7-15
- VIERA-GALLO, JOSE ANTONIO El segundo camino hacia el socialismo, Cuadernos de la Realidad Nacional, (15), Diciembre, 1972, pp. 152-190
- ZAMMIT, J. ANN (Ed.) The chilean road to socialism, Institute of Development Studies, University of Sussex (England), 1973, 465p.
2. El problema del poder
- ALTAMIRANO, CARLOS A la conquista del poder por los trabajadores, Punto Final, 7, (177), Febrero, 1973, pp. 1-6
- AMPUERO, RAUL El poder político y las fuerzas armadas, Punto Final, (suplemento) 7, (181), Abril, 1973, pp. 1-11
- BALART CONTRERAS, RENE Los militares y la seguridad nacional, Punto Final, (suplemento), N° 189, Julio, 1973, pp. 9-16
- CANTONI, WILSON Poder Popular en el agro chileno, Cuadernos de la Realidad Nacional, (11), Enero, 1972, pp. 80-103
- CANTERO, MANUEL Las Fuerzas Armadas en el Gabinete, Principios, 32, (147-148) Noviembre-Diciembre, 1972, pp. 36-50
- CARMONA, AUGUSTO El alto mando militar y la clase trabajadora, Punto Final, 7, (173), Diciembre, 1972, pp. 2-5

- CASTILLO, FERNANDO-ECHEVERRIA, RAFAEL y LARRAIN, JORGE Las masas, el Estado y el problema del poder en Chile, Cuadernos de la Realidad Nacional, (16), Abril, 1973, pp. 3-70
- FOURNIAL, GEORGES Faire pencher définitivement la balance, France Nouvelle, (1396), 15-21, aout, 1972, pp. 11-13
- INSUNZA B., JORGE La cuestión del poder: tarea de masas, Principios, N° 140, Agosto-Septiembre, 1971, pp. 14-37
- INSUNZA, JORGE Problemas del Estado en Chile, Principios, 138, Marzo-Abril 1971
- INSUNZA, SERGIO La reacción en el Parlamento, cómo atenta contra el pueblo, Principios, 33, (149), Enero-Febrero, 1973, pp. 42-60
- LARRAIN, HERNAN Militares en el Gabinete, Mensaje, N° 215, Diciembre, 1972, - pp. 689-691
- LARRAIN, JORGE y CASTILLO FERNANDO Poder obrero-campesino y transición al socialismo en Chile, Cuadernos de la Realidad Nacional, (10), Diciembre, 1971, pp. 161-198
- MAIRA, LUIS - BARBERIS, VICTOR et al. El poder popular y los comandos de trabajadores (Foro), Punto Final, (suplemento), 7, (175), Enero, 1973, pp. 1-22
- MARCELIN, JEAN Le peuple chilien a la conquete du pouvoir, La Nouvelle Critique, 45, Juin, 1971, pp. 24-29
- MIRES, FERNANDO Institucionalidad burguesa o poder proletario en la experiencia chilena, Punto Final, (suplemento), (7), 169, Octubre, 1972, pp. 9-16
- MUSALEM, JOSE Crisis global de Chile creada para la toma del poder, Política y Espíritu, 27, (335), Agosto, 1972, pp. 33-43
- "Que gobierne el Compañero Presidente", ed. Portada, 17, Diciembre, 1970, pp. 3-9
- QUEVEDO, SANTIAGO y SADER, EDER Algunas consideraciones en relación a las nuevas formas de poder popular en poblaciones, Eure, 3, (7), Abril, 1972, pp. 71-81

- RAMIEREZ, BERNARDO El burocratismo: freno contra-revolucionario, Principios, -
140, Agosto-Septiembre, 1971, pp. 90-98
- SANTA CRUZ, EDUARDO Comandos comunales: órganos de poder del pueblo, Punto
Final, (suplemento), N° 189, Julio, 1973, pp. 1-8
- SILVA, L., JORGE La participación: ¿Un peldaño hacia el poder?, Punto Final, -
(suplemento), (7), 168, Octubre, 1972, 15p.
- SUAREZ B., HECTOR Desarrollo del poder popular y burocratismo, Punto Final 7, (179)
Mayo, 1973, pp. 24-27
- Los trabajadores y el poder popular, Punto Final, (suplemento), 7, (183) Mayo, 1973,
pp. 1-16
- WETSON, H., AGOR The Chilean Senate, University of Texas, 1971
- ZORRILLA, AMERICO Un parlamento para la patria y la revolución, Principios, 32, -
(147-148), Noviembre-Diciembre, 1972, pp. 98-123
3. Clases y grupos sociales
- ALLENDE, SALVADOR Necesitamos un pueblo organizado y vigilante, Punto Final, -
(6), 148, Enero, 1972, pp. 8-16
- ALLENDE, SALVADOR Allende: Fortalecer la unidad revolucionaria del pueblo, Punto
Final, (suplemento) (5), 122, Enero, 1971, pp. 8-11
- ARREDONDO, JULIO Los grandes ausentes: obreros no organizados, Punto Final, 5, -
(134), Julio, 1971, pp. 16-19 y 21
- BAMBIRRA, VANIA Liberación de la mujer y lucha de clases, Punto Final, 151, Febre-
ro, 1972, pp. 10-15
- CABIESES, MANUEL En pos de las capas medias, Punto Final, (6), 151, Febrero, 1972,
pp. 16-18

- CABIESES D., MANUEL La insurrección de la burguesía, Punto Final, (7), 169, Octubre, 1972, pp. 2-5
- CASTELLS, MANUEL Clases sociales y aparatos político-ideológicos: su especificidad histórica en la sociedad chilena. II, CIDU - D.T. N° 55-A, Santiago, 1972 28 p.
- CASTELLS, MANUEL La estructura de clases en Chile, 1970 (I), CIDU - D.T. N° 55, Santiago, 1972, 98 p.
- CASTELLS, MANUEL La lucha económica de clases en el Chile de la Unidad Popular, CIDU - D.T. N° 59, Santiago, 1972, 99 p.
- CASTRO, C., Las masas recién se asoman al proceso, Punto Final, 6, (142), Oct., - 1971, pp. 12-15
- DIAZ, VICTOR La clase obrera y el nuevo gobierno, Principios, 30, (136) Oct., Dic., 1970, pp. 25-30
- DUQUE, J. y PASTRANA, E. La movilización reivindicativa urbana de los sectores populares en Chile: 1964-1972, Revista latinoamericana de Ciencias Sociales, (4), - Dic., 1972
- GALLEGUILLOS, VICTOR Por nuevos triunfos del pueblo chileno, Principios, 140, Agosto-Septiembre, 1971, pp. 114-120
- Los gremios patronales, Santiago, Quimantú, 1973, 160 p.
- MILLAS ORLANDO La clase obrera en las condiciones del gobierno popular, Principios, 145, Mayo-Junio, 1972, pp.16-50
- ROJAS, EDUARDO; FIGUEROA, LUIS y CALDERON, ROLANDO (Entrevista) Tres para la CUT, De frente, (suplemento), 1 (8), Abril-Mayo, 1972 pp. 1-17
- SEPULVEDA R., JULIO La clase media o "pequeña burguesía", Occidente, 28, (242), Noviembre 1972, pp. 8-10

TEITELBIOM, VOLODIA El pueblo y su Gobierno, Principios, (137), Enero-Febrero 1971, pp. 25-33

VALDES, JAIME La clase dorada de la U.P., Santiago, Editado por el autor, s.f., - 105 p.

ZAMORANO, MARIO La clase obrera y la unidad de acción, Principios (146), Julio-Agosto 1972, pp. 16-25

4. Partidos y grupos políticos

ALTAMIRANO, CARLOS Decisión revolucionaria (discursos), Santiago, Quimantú, - 1973, 191 p.

ALTAMIRANO, CARLOS El partido socialista y la Revolución chilena, Punto Final, (suplemento), (5), 121, Enero 1971, pp. 9-12

BALTRA, MIREYA et al. La izquierda hace su balance, Punto Final, (suplemento), 7, (172), Dic. 1972, pp. 21-48

CASANUEVA V., FERNANDO El partido socialista y la lucha de clases en Chile, Santiago, Quimantú, 1972, 149p.

Cile: La posizione del Movimento de acción popular unitaria, Problemi del Socialismo, 14 (7-8), gennaio-aprile 1972, pp. 201-208

Les Communistes et les masses. L'experience chilienne, (Entrevistas a dirigentes Comunistas), La Nouvelle Reveu Internationale, (10), 158, 1971, pp. 61-84

La crisis del Mapu. Cómo y de que manera se divide un partido de Izquierda, Punto Final, (suplemento), 7, (180), Mayo 1973, pp 1-16

DEBUYST, FREDERIC y GARCES, JOAN La opción chilena de 1970. Análisis de los tres programas electorales, Revista Latinoamericana de Ciencia Política, 2 (2), Agosto 1971, pp. 279-369

División Política-técnica del P.D.C. Bases de la plataforma política para las próximas elecciones (informes), Política y Espíritu, 28, (338), Noviembre 1972, pp. 26-34

- DOMIC, JURAK El Partido Comunista liquida la vía chilena hacia el socialismo, Portada, (38), Abril 1973, pp. 8-18
- ENRIQUEZ, MIGUEL La posición del MIR, Punto Final, (6), 157, Mayo 1972, pp. 11-16
- FUENTEALBA, RENAN Informe al plenario del Partido Demócratacristiano, (7,8 de abril de 1973), Portada (40), Junio 1973, pp. 22-34
- JOBERT, JULIO CESAR y CHELEN, ALEJANDRO Pensamiento teórico y político del partido socialista de Chile, Santiago, Quimantú, 1972, 566 p.
- LABARCA, EDUARDO Corvalán, 27 horas, Santiago, Quimantú, 1972, 240 p.
- LARRAIN, JORGE Orientaciones y actividades de la Confederación Democrática de Partidos durante la crisis de Octubre de 1972, Cuadernos de la Realidad Nacional, (16) Abril 1973, pp. 229-249
- LAUTARO La "ultra-izquierda": razones y sin razones de su gravitación actual, Panorama Económico, (270), Agosto 1972, pp. 3-10
- LEO Asegurar la Unidad Interna, Política y Espíritu, 26, (319), Marzo 1971, pp. 16-20
- LEO La Izquierda Cristiana: decantación ideológica, política y ética, Política y Espíritu 27, (330), Febrero-Marzo 1972, pp. 10-12
- LEO Opiniones en el debate interno, Política y Espíritu, 26, (320), Abril 1971, pp. 9-16
- MAIRA, LUIS Un método popular para hacer oposición, Política y Espíritu 26, (319), - Marzo 1971, pp. 35-38
- MAIRA, LUIS Chili. L'opinion du MAPU. La Nouvelle Critique, 54, Juin, 1972
- MALUENDA, MARIA TERESA y MORENO, ERNESTO Consecuencia programática de la Democracia Cristiana; la revolución chilena democrática y popular frente al gobierno de la UP. Política y Espíritu 27, (334), Julio 1972, pp. 30-39
- NAVARRO A., IVAN Algo más sobre un método para hacer oposición, Política y Espíritu 26, (320), Abril 1971, pp. 31-34

- NOVOA, EDUARDO L'union de la gauche au Chili, Politique Aujourd'hui, Marzo 1973
- ORREGO V., CLAUDIO Consecuencia y verdad de la estrategia demócratacristiana, Política y Espíritu (separata), Septiembre, 1972
- ORREGO V., CLAUDIO Las contradicciones ideológicas internas de la Unidad Popular Política y Espíritu 27, (330). Febrero-Marzo 1972. pp. 26-45
- ORREGO V., CLAUDIO La Democracia Cristiana y su estrategia programática: ¿la razón o la culpa?, Política y Espíritu 27, (333), Junio, 1972, pp. 9-21
- ORREGO V., CLAUDIO El papel estructural del PDC en el sistema político chileno, - Política y Espíritu 27, (334), Julio 1972, pp. 13-18
- OYARCE, JOSE Partido federado de la Unidad Popular, Principios 32, (147-148), Nov-Dic. 1972, pp. 51-63
- PRADO, BENJAMIN El papel decisivo del partido Demócrata-Cristiano después del acto electoral del 4 de septiembre, Política y Espíritu 25, (318), Diciembre 1970, - pp. 26-27
- RODRIGUEZ E., JOSE Mitología de la ultraizquierda, Principios (139), Mayo - Junio 1971, pp. 7-23
- VALENZUELA, ARTURO The scope of the Chilean Party System. A synchronic analysis, Comparative Politics, vol. 4, january 1972
- VUSKOVIC, SERGIO Pluripartidismo político, Principios 137, Enero-Febrero 1971, pp. 6-14
- ZAMORANO, MARIO Metas de desarrollo del partido en la clase obrera, Principios 139, Mayo-Junio, 1971, pp. 82-87
- ZAMORANO, MARIO Nuevas tareas de organización, Principios 144, Marzo-Abril -- 1972, pp. 116-128

5. Análisis electorales

- BIEHL, JOHN, ¿Quién ganó las elecciones de regidores?, Mensaje, 198, Mayo - 1971, pp. 131.132
- BIEHL, JOHN Salvador Allende ya no es candidato, Mensaje, 193, Octubre 1970, pp. 448-450
- BORON, ATILIO La evolución del régimen electoral y sus efectos en la representación de los intereses populares: El caso de Chile, Revista Latinoamericana de - Ciencias Políticas, Diciembre 1971, pp. 395-436
- La campaña presidencial y su resultado, Política y Espíritu (editorial) 25 (318), Diciembre 1970, pp. 5-9
- CASTILLO V., JAIME Causas de la derrota, Política y Espíritu, 25 (318), Diciembre 1970, pp. 10-13
- FRANCIS MICHAEL La victoria de Allende vista por un Norteamericano, Santiago, - Francisco de Aguirre 1972, 238 p.
- LAGOS V., TULLIO Comportamiento electoral y educación política de la mujer chilena, Occidente, 28 (244), Marzo 1973, pp. 40 - 43
- MULLER-PLANTENBERG, Urs La voz de las cifras; un análisis de las elecciones en Chile entre 1957 y 1971, Cuadernos de la Realidad Nacional, (14), Octubre 1972, pp. - 152-174
- NAZAL, JACINTO Notables avances en el campo, Principios, 33, (150), Marzo-abril- 1973, pp. 48-59
- ORREGO V., CLAUDIO La elección presidencial de 1970: aclarando responsabilidades y descubriendo estrategias, Política y Espíritu 27, (332), 1972, pp. 13-19
- ORTIZ, FERNANDO Elecciones en la U; Análisis y perspectivas, Principios, 145, Mayo- Junio 1972, pp. 124-139

PEDRAZA, ELENA El aporte de las mujeres al triunfo de marzo, Principios 33, (150),
Marzo-Abril 1973, pp. 27-35

PETRAS, JAMES La clase obrera chilena y la victoria electoral socialista de 1970, -
Punto Final, (5), 121, Enero 1971, pp. 2-5

RIOS, ALBERTO y ESPINDOLA, JOSE La juventud votó el 4 de marzo por Chile y su-
revolución, Principios 33, (150), Marzo-Abril 1973, pp. 36-47

SIGMUND, PAUL Las corrientes electorales en Chile, Problemas Internacionales --
(Washington), V. XIX, (1-2), Enero-Abril 1972, pp. 9-17

6. Relaciones exteriores

CABIESES D., MANUEL El jabonoso diálogo con el imperialismo, Punto Final, 7 --
(175), Enero 1973, pp. 26-32

COCKCROFT, JAMES et. al. Las compañías multinacionales y el Gobierno de Allende
Documentos secretos de la ITT., Santiago, Quimantú, (3ª edición), 1972, 189 p.

Documentos de la ITT reflexiones, Mensaje (editorial), 208, Mayo 1972, pp. 239-247

FAIVOVICH, JAIME El garrote imperialista contra Chile, Punto Final, (7), 167, Sep-
tiembre 1972, pp. 2-6

FAZIO, HUGO El bloqueo financiero, Revista de la U.T.E., (11-12), Nov.-Dic., -
1972 y Enero-Febrero 1973, pp. 69-82

FOURNIAL, GEORGES Douze ans apres Cuba. Le Chili dans le mouvement révolution-
naire de l'Amérique Latine, Cahiers du Communisme 1, Janvier, 1971, pp. 83-96

La gira de Chile Santiago, Quimantú, 1973, 143 p.

GUASTAVINO, LUIS Lecciones del affaire ITT, Principios, 146, Julio-Agosto, 1972,
pp. 38-56

LAGOS, GUSTAVO Chile frente al Pacto Andino y la ALALC, Mensaje, N° 215, Dic.
1972, pp. 692-695

- M.D.B. La ayuda extranjera inclinó la balanza en el seno del P.D.C., Punto Final, (7), 169, Octubre 1972., pp. 16-19
- OGELSBY, JHON Chile under Allende: auswärtige Beziehungen und innere Probleme (Chile bajo Allende: Relaciones exteriores y problemas internos), Europa Europa Archiv, 27, (16), Agosto 1972, pp. 581-588
- ORREGO V., FRANCISCO Estatización del Comercio exterior e integración económica, Santiago, Ediciones del Instituto Cultural de Providencia, 1972, 80 p.
- PETRAS, JAMES y LAPORTE, ROBERT La respuesta de los Estados Unidos al nacionalismo económico de Chile, Cuadernos de la Realidad Nacional, (13), Julio 1972, - pp. 3-38
- RODRIGUEZ E., JOSE "El cerco contra Chile", Principios, 145, Mayo-Junio 1972, pp. 68-87
- R.V. Bloque invisible y asistencia crediticia, Mensaje, Noviembre 1972, 214 pp. - 665-667;
- VIERA - GALLO, JOSE ANTONIO Allende Chile y el "time", Mensaje, N° 195 Diciembre 1970, pp. 598-603
7. Aspectos económicos generales
- BARDON, ALVARO et al. Itinerario de una crisis, Santiago, Edit. del Pacífico, 1972, 194 p.
- BARDON, ALVARO Nuevas reformas crediticias en el Banco Central: el control por el control, Política y Espíritu 27, (329), Enero 1972, pp. 43-45
- BARDON, ALVARO Panorama general de la situación económica, Panorama Económico, (272), Octubre 1972, pp. 16-20
- BITAR, SERGIO La coyuntura económica de 1972 y sus posibles implicancias políticas, - Panorama económico, (267), Abril 1972, pp. 22-27

- BITAR, SERGIO La estructura económica chilena y la transición al socialismo, Mensaje, 202-203, Sept.- Octubre 1971, pp. 404-412
- BITAR, SERGIO y MOYANO, EDUARDO Redistribución del consumo y transición al socialismo, Cuadernos de la Realidad Nacional, (11), Enero 1972, pp. 25-44
- BITAR, SERGIO La redistribución del ingreso, ¿conduce a una redistribución del consumo?, Mensaje, 214, Noviembre 1972, pp. 634-640
- CADEMARTORI, JOSE Perspectivas y tareas revolucionarias en el frente económico, - Revista de la U.T.E., (11-12), Nov-Dic., 1972 y Enero-Febrero 1973, pp. 101-118
- CAUAS, JORGE et al. Reforma, crítica y dudas sobre la política gubernativa: un examen desde tres ángulos (foro), Panorama Económico, (261), Abril-Mayo 1971, pp. 16-26
- CALVO M., PEDRO La política industrial de la Unidad Popular; Concepción de una política industrial, Política y Espíritu 28, (335), Noviembre 1972, pp. 57-61
- CASTRO C., La política económica del Gobierno en 1971, Punto Final, (6), 152, Febrero 1972, pp. 16-18
- C.I.A.P. Problemas y perspectivas de la economía chilena, Panorama Económico, (260), Febrero-Marzo 1971, pp. 25-40
- Departamento técnico del P.D.C. La economía chilena en el Gobierno de Allende, Política y Espíritu 27, (331), Abril 1972, pp. 37-56
- DUQUE, JOAQUIN y PASTRANA, ERNESTO La movilización reivindicativa urbana de los sectores populares en Chile: 1964-1972, Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, N° 4, Diciembre 1972, pp. 259-293
- La economía chilena en 1971 y sus perspectivas (editorial), Panorama Económico (266), Febrero 1972, pp. 5-14
- FAZIO, HUGO Las nuevas medidas económicas del Gobierno Popular, Principios 32, -

(146-148), Nov-Dic. 1972, pp. 64-84

FRENCH-DAVIS, RICARDO et al. ¿Cómo manejar una "sequía" de divisas?, (Foro Panorama Económico, (269), Junio 1972, pp. 16-27

FOXLEY, ALEJANDRO Convergencias y divergencias en los proyectos socialistas para Chile, Mensaje, 211, Agosto 1972, pp. 443-448

FOXLEY, ALEJANDRO La distribución del ingreso: Tendencias y perspectivas Mensaje, 218, Mayo 1973, pp. 169-177

GALILEA, SERGIO et al. Agentes políticos y reestructuración del espacio y la producción en una región de Chile, Eure 2, (4), Marzo 1972, pp. 67-82

GALLEGUILLOS, VICTOR Los Comunistas en la Industria, Principios 145, Mayo-Junio 1972, pp. 140-148

GARCIA, NORBERTO La economía chilena en 1971, Universidad de Chile, Instituto de Economía, Santiago, 1972

GARCIA, PIO La política Económica del Gobierno Popular: Consideraciones políticas, - Sociedad y Desarrollo (1), Enero-Marzo 1972

GAZMURI, JAIME Todo Chile contra los monopolios, (Discrudo en el 5º pleno del MAPU de Frente, (suplemento), 1, (10-11), Julio-Agosto 1972, 1-15

HINKELAMMERT, FRANZ Consideraciones sobre las alternativas del cambio de las estructuras económicas en Chile, Cuadernos de la Realidad Nacional, (14), Octubre 1972 pp. 175-185

LARRAGUIBEL F., FRANCISCO Cuatro comentarios al "mensaje económico", Portada, (22), junio 1971, pp. 8-12

LATASTE, ALBAN La política de inversiones del Gobierno Popular, Revista de la U.T.E. (13-14), Marzo-Junio 1973, pp. 283-297

LOPEZ, JULIO La Estrategia Económica del Gobierno de la Unidad Popular, Cuadernos

de la Realidad Nacional, (9), Septiembre 1971, pp. 69-86

LOPEZ, JULIO Sobre la construcción de la nueva economía, Cuadernos de la Realidad Nacional, (13), Julio 1972, pp. 39-53

LECHNER, NORBERT y FARIAS, VICTOR Por la socialización de la producción para una nueva institucionalidad, Cuadernos de la Realidad Nacional, (11), 199-209, Enero 1972

LUCSIK, ZARKO Programa de desarrollo económico y empleo durante la pequeña y mediana industria, Política y Espíritu 26, (319), Marzo 1971, pp. 39-46

MARTNER, GONZALO et al. Cuatro opiniones sobre el primer año de gestión económica del Gobierno de Allende, Panorama Económico, (266), Febrero 1972, pp. 15-28

MARTNER, GONZALO (Editor) El pensamiento económico del Gobierno de Allende, Ed. Universitaria, Santiago, 1971, 359 p.

MARTNER, GONZALO La planificación para la transición al socialismo: el caso de Chile, Revista de la U.T.E., (11-12), Nov.-Dic., 1972 y Enero-Febrero 1973, pp. 21-50

MENESES, AUGUSTO Las JAP, ¿servicio a la comunidad y control político? Mensaje, 219, Junio 1973, pp. 266-268

MILLAS, ORLANDO Hay que ganar la batalla en el terreno de la economía, Revista de la U.T.E., (11-12), Nov.-Dic., 1972 y Enero-Febrero 1973, pp. 7-20

MOLINA, SERGIO Ampliar la capacidad de producción: Tarea urgente, Mensaje, 211, Agosto, pp. 449-457

MOLINA, SERGIO La inflación, un enemigo rebelde y peligroso, Mensaje, 220, Julio 1973, pp. 291-298

MOLINA, SERGIO et al. La política de estabilización: prioridad y oportunidad (Foro), Panorama Económico (259), Diciembre 1970, Enero 1971, pp. 12-21

MULLER-PLATENBERG, Urs y HINKELAMMERT, FRANZ Condiciones y consecuencias de una política de Redistribución de Ingresos, Cuadernos de la Realidad Nacional, (16), Abril 1973, pp. 203-227

- MUSALEM, JOSE El paro Nacional un anticipo del futuro, Política y Espíritu 28, (338), Noviembre 1972, pp. 35-46
- NAZAL, JACINTO Las JAP: respuesta del pueblo a la especulación, Principios, - 145, Mayo-Junio 1972, pp. 105-123
- ORREGO V., FRANCISCO Estatización del comercio exterior e integración económica, Santiago, Ediciones del Instituto Cultural de Providencia, 1972, 80 p.
- ORREGO V., FRANCISCO Estatización del Comercio exterior: El precio que debe pagar Chile, Portada, (27), Enero 1972, pp. 7-16
- OVALLE, SERGIO La lucha inmediata por mejorar el abastecimiento, Principios, 33 (150), Marzo-Abril 1973, pp. 97-114
- PEREZ DE ARCE, HERMOGENES ¿Terminó la era Vuskovic?, Portada, (31), Junio 1972, pp. 29-31
- PEREZ DE ARCE, HERMOGENES Contenido y alcance de la "segunda fase", Portada - (32), Julio 1972, pp. 29-33
- El porqué y el cómo de las estatizaciones, Panorama Económico (editorial) (269), Febrero-Marzo 1971, pp. 3-7
- Presente y futuro económico, Portada (15), Octubre 1970, pp. 33-41
- RAMOS, SERGIO Chile Una economía en transición?, Santiago, PLA, 1972, 263 p.
- SAENZ, ORLANDO Un país en quiebra, Ediciones Portada, Santiago, s.f., 107 p.
- SANFUENTES V., EMILIO El Plan Zorrilla, Portada, (17), Diciembre 1970, pp. 10-20
- SOTO S., JORGE La batalla de la producción y la formación del personal, Occidente 27, (234), Marzo 1972, pp. 9-12
- SUAREZ B., HECTOR La distribución, ¿tarea de masas o de las F.F.A.A.? Punto Final, (suplemento), 7, (182), Abril 1973, pp. 1-16

- Universidad de Chile - Instituto de Economía - Taller de Coyuntura - Sede Occidente
Comentarios sobre la situación económica, 1º Semestre 1973, Santiago, 1973,
 266 p.
- VEGA H., HUMBERTO Problemas de dirección económica y planificación en Chile, -
 Cuadernos de la Realidad Nacional (15), Diciembre 1972, pp. 263-277
- VUSKOVIC, PEDRO Dos años de Política Económica del Gobierno Popular, Revista -
 de la U.T.E., (11-12), Noviembre-Diciembre 1972 y Enero-Febrero 1973, pp. -
 51-68
- VUSKOVIC, PEDRO La política económica de la transición al socialismo, Panorama E-
 conómico (260), Febrero-Marzo 1971, pp. 11-18
- ZABALA, JOSE LUIS Cómo se favorece una crisis económica, Política y Espíritu 27, -
 (323), Julio 1971, pp. 34-39
- ZALDIVAR, ANDRES Informe económico y financiero, Política y Espíritu, 25 (318), Di-
 ciembre 1970, pp. 20-25

8. El cobre su nacionalización

- BALTRA, ALBERTO La Nacionalización del Cobre en Chile, Problemas del Desarrollo,
 2, (9), Octubre-Diciembre 1971, pp. 5-8
- BARRERA, MANUEL El conflicto obrero en el enclave cuprífero, Santiago, Instituto
 de Economía y Planificación (Universidad de Chile), 1973, 110 p.
- CORREA I., CARLOS El cobre: Realidad y perspectivas frente a su nacionalización, -
 Portada, (34), Septiembre 1972, pp. 10-27
- FERNANDEZ, ENRIQUE La decisión política en la nacionalización, Punto Final, (5),
 123, Febrero 1971, pp. 30-31
- FERNANDEZ, ENRIQUE "El Teniente" por dentro y por fuera, Punto Final, (6), 150,
 Febrero 1972, pp. 30-32

- FERNANDEZ, ENRIQUE Las paradojas de Chuquicamata, Punto Final (6), 148, Enero 1972, pp. 26-29
- FIGUEROA, JOAQUIN El Cobre nacionalizado, Portada, (33), Agosto 1973, pp. 7-11
- FUENTEALBA, RENAN La Nacionalización del Cobre, Política y Espíritu, 27, (323), Julio 1971, pp. 40-45
- GUNDER F., ANDRE Y DIAZ, GLADYS Los ladrones quieren indemnización, Punto Final, (suplemento), 5, (135), Julio 1971, pp. 1-14
- NOVOA, EDUARDO La batalla por el Cobre, Santiago, Quimantú, 1972, 480 p.
- NOVOA, EDUARDO Cobre: el imperialismo al trasluz, Revista de la U.T.E., (10), Septiembre-Octubre 1972, pp. 5-26
- NOVOA, EDUARDO La nacionalización del cobre: aspectos jurídicos, Mensaje, 204, Noviembre 1971, pp. 513-515
- MOLINA, SERGIO El cobre: perspectivas y responsabilidades, Mensaje, 202, 203, - pp. 433-443
- MORAN, THEODORE Nuevo trato a las Materias Primas, Estudios Internacionales, 5 (19), Julio-Septiembre 1972, pp. 56-70
- VERA, MARIO Participación de los trabajadores en las empresas nacionalizadas del - Cobre: Criterios básicos para la discusión, Revista de la U.T.E., (11-12), Noviembre-Diciembre 1972 y Enero-Febrero 1973, pp. 219-230
- VERA, MARIO La soberanía no se transa (Chile no indemnizará a los monopolios del cobre), Punto Final, (suplemento), 6, (141), Oct. 1971, 12 p.
- ZAVALA MAZA, D.F. La nacionalización del cobre en Chile, problemas del desarrollo, 2, (9), Octubre-Diciembre 1971, pp. 8-12

9. Nacionalización de los bancos

- BARDON, ALVARO Los bancos deben ser de los trabajadores, Mensaje, 197, Marzo-Abril 1971, pp. 96-101
- FAZIO, HUGO La Nacionalización de los bancos, Principios 137, Enero-Febrero 1971, pp. 34-40
- FAZIO, HUGO Las tareas de la nueva banca, Principios 143, Enero-Febrero 1972, pp. 33-46
- LEIVA, JORGE y GUTIERREZ, ALEJANDRO Consideraciones acerca de la estatización de la banca, Mensaje, 197, Marzo-Abril 1971, pp. 91-95
- SANFUENTES V., EMILIO La estatización de la banca, Portada, (20), Abril 1971, - pp. 8-10

10. Las tres áreas de la economía y la participación

- BARRERA, MANUEL - ARANEDA, GUSTAVO y DIAZ, JORGE El cambio social en una empresa del área de propiedad social, Santiago, Universidad de Chile, Instituto de Economía 1972.
- BARRIA, LUIS La participación de los trabajadores, Principios 144, Marzo - Abril 1972, pp. 82-91
- COVARRUBIAS, ALVARO El sistema financiero en una economía de autogestión, Política y Espíritu 27, (336), Septiembre 1972, pp. 49-51
- DOWNEY, RAMON et al. La autogestión, Santiago, IDEP, 1971, 63 p.
- ESPINOSA, RAUL La requisición de los monopolios textiles y un fallo de la Corte Suprema, Revista de la U.T.E. (7), Abril 1972, pp. 89-100
- FERNANDEZ, CRISTIAN La Empresa de participación; una alternativa progresiva hacia la empresa de Trabajadores, Política y Espíritu 28, (341), Febrero-Marzo 1972, pp. --

- GARRETON, OSCAR GUILLERMO Concentración monopólica en Chile: participación del Estado y de los Trabajadores en la gestión económica, Cuadernos de la Realidad Nacional (7), Marzo de 1971, pp. 143-164
- GARRETON, OSCAR GUILLERMO et al. Desde las diversas trincheras se analiza el - problema de la participación (Foro), Panorama Económico (271), Septiembre 1972, pp. 16-32
- GARRETON, OSCAR GUILLERMO La importancia del área de propiedad social y la ley de definición de las áreas, Cuadernos de la Realidad Nacional, (11), Enero 1972 pp. 250-257
- GARRIDO, JOSE La estatización de la producción y distribución de alimentos, Portada (38), Abril 1973, pp. 19-29
- GARRIDO R., JOSE (compilador) Participación para una nueva sociedad, Santiago, Ediciones Portada, 1972
- GIUSTI, JORGE Participación y organización de los sectores populares en América Latina, los Casos de Chile y Perú, Revista Mexicana de Sociología, vol. XXXIV, N° 1, 1972
- GLAUSER, KALKI Areas de propiedad bajo el Gobierno U.P., Cuadernos de la Realidad Nacional, (11), Enero 1972, pp. 210-234
- GODOY, HUGO El área de propiedad social como instrumento de una política económica, Revista de la U.T.E., (11-12), Noviembre-Diciembre 1972 y Enero-Febrero - 1973, pp. 119-132
- GONZALEZ, ANTONIO La participación en el sector privado, Principios, 146, Julio Agosto 1972, pp. 69-83
- GUTIERREZ, RAUL Las dificultades del área de propiedad social, Panorama Económico (270), Agosto 1972, pp. 11-18
- JEANNERET, TERESA Sobre la Autogestión, Política y Espíritu 22, (324), Agosto 1971, pp. 48-51

- LOPEZ, JULIO El área de propiedad privada en la transición al socialismo, De Frente 1 (4), Diciembre 1971, pp. 21-24
- LORENZINI, SERGIO La propiedad en las empresas de trabajadores, Política y - Espíritu 27, (335), Agosto 1972, pp. 45-49
- MOLINA, SERGIO et al. Las fronteras del área de propiedad social (Foro) Panorama Económico (263), Agosto 1971, pp. 16-25
- PETRAS, JAMES Chile: nacionalización, transformaciones socioeconómicas y participación popular, Cuadernos de la Realidad Nacional, (11), Enero 1972, pp. 3-24
- PINCHEIRA, MANUEL El área de propiedad social: planificación y autofinanciamiento, Principios, 33, (149), Enero-Febrero 1973, pp. 61-77
- SANFUENTES, EMILIO Empresa de trabajadores, Portada, (32), Julio 1972, pp. 7-20
- VEGA, HECTOR Las empresas de trabajadores: nueva artimaña D.C., Punto Final, - (6), 158, Mayo 1972, pp. 22-23

11. Reforma Agraria

- ARROYO, GONZALO Después del latifundio, ¿qué?, Mensaje, 213, Octubre 1972, pp. 591-599
- BARRACLOUGH, SOLON Y AFFONSO, AMINO Diagnóstico de la Reforma Agraria chilena (noviembre 1970 - junio 1972), Cuadernos de la Realidad Nacional, (16), Abril 1973, pp. 71-123
- BARRACLOUGH, SOLON Reforma Agraria: Historia y Perspectivas, Cuadernos de la Realidad Nacional, (7), Marzo 1971, pp. 51-63
- BENGOA, JOSE Conciencia campesina y cambio social, Sociedad y desarrollo, 2, Abril-Junio 1972, pp. 127-145
- BENGOA, JOSE Movilización Campesina; análisis y perspectivas, Sociedad y Desarrollo, 3, Julio-Septiembre 1972, pp. 56-76

- BILLAZ, RENE y MAFFEI, EUGENIO La Reforma Agraria Chilena y el camino hacia el socialismo: Algunas consideraciones, Cuadernos de la Realidad Nacional, - (11), Enero 1972, pp. 45-79
- CASTELLS, MANUEL Reforma Agraria, lucha de clases y poder popular en el campo chileno, CIDU - D.T. N° 58, Santiago, 1972, 48 p.
- CHONCHOL, JACQUES et al. ¿Quién reemplaza al patrón de fundo? (Foro), Panorama Económico, (265), Noviembre-Diciembre 1971, pp. 24-32
- DIAZ O., HUGO Agricultura, problemas y soluciones, Principios, 33, (150), Marzo-Abril 1973, pp. 115-135
- ERRAZURIZ, MARGARITA M., Participación en el sector rural, Portada, (31), Junio 1972, pp. 17-24
- FIGUEROA, EDUARDO La política Agraria del Gobierno, Portada, (37), Marzo 1973, pp.14-23
- GIMENO, JOSE M. Agricultura Socialista. Chile y dieciseis países, Santiago, Edit. Universitaria, 1972, 155 p.
- GOMEZ, SERGIO El sector agrícola y la estructura de clases en Chile, Sociedad y - desarrollo, 3, Julio-Septiembre 1972, pp. 77-99
- GOUSSAULT, YVES La Réforme agraire au Chili a la veille du gouvernement d'Unité Populaire, Développement et civilisations, 44, Juin 1971, pp. 3-25
- HERNANDEZ, SILVIA El desarrollo capitalista en el campo chileno, Sociedad y Desarrollo, 3, Julio-Septiembre 1972, pp. 25-56
- KAUFMAN, ROBERT The politics of land reform in Chile, Harvard University Press, - 321 p.
- KAY, CRISTOBAL - WINN, PETER La reforma agraria en el gobierno de la U.P., Sociedad y Desarrollo, 3, Julio-Septiembre 1972, pp. 5-24

- LEHMAN, DAVID La agricultura chilena y el período de transición, sociedad y desarrollo, 3, Julio-Septiembre 1972, pp. 101-144
- LOCKE, JAMES Y GARRIDO, JOSE La situación de la agricultura y sus perspectivas, Portada, (28), Marzo 1972, pp. 7-14
- LOVEMAN, BRIAN El campesino chileno le escribe a su excelencia, ICIRA, Santiago, 1971
- LOVEMAN, BRIAN El mito de la marginalidad: participación y represión del campesinado chileno, ICIRA, mimeo, Santiago, 1971
- MAFFEI, EUGENIO y MARCHETTI, EMILIO Estructura Agraria y Consejos Comunales campesinos: situación actual, análisis y estrategia, Cuadernos de la Realidad Nacional, (14), Octubre 1972, pp. 126-150
- PETRAS, JAMES La reforma agraria en Chile, Problemas de desarrollo, 11, 6, Enero-Marzo 1971, pp. 87-102
- RIBEIRO, IVAN La transición hacia el socialismo en Chile y la planificación del sector agropecuario, Cuadernos de la Realidad Nacional, (12), Abril 1972, pp. 49-68
- RIVERA, OSVALDO Cautín: la derecha conspira para detener la Reforma Agraria, Punto Final, (suplemento), (5), 122, Enero 1971, pp. 1-7
- RIVERA, RIGOBERTO El campo chileno: ¿dónde va la Reforma?, Punto Final, (suplemento), (7), 167, Septiembre 1972, pp. 1-11
- SUAREZ B., HECTOR Alternativas de la lucha por la tierra, Punto Final, (6), 154, Marzo 1972, pp. 16-18
- ZEMELMAN H., y PETRAS, J. Proyección de la Reforma Agraria, Santiago, Quimantú 1972, 152 p.

12. Vivienda y campamentos

- ALVARADO, LUIS et al. Movilización social en torno al problema de la vivienda, -
Eure, 3, (7), Abril 1973, pp. 36-70

- CASTELLS, MANUEL Movimiento de pobladores y lucha de clases en Chile, Eure, 3, (7), Abril 1973, pp. 9-35
- CASTELLS, MANUEL et al. Reivindicación Urbana y lucha política: los campamentos de pobladores En Santiago de Chile, Eure, 2, (6), Noviembre 1972, pp. 55-82
- FIORI, JOSE LUIS A propósito del movimiento poblacional, CIDU - D.T. N° 66, Santiago, 1973, 29 p.
- PORTALES, PABLO Comunidades llamadas campamentos, Mensaje, 221, Agosto 1973, pp. 375-378
- SANTA MARIA, IGNACIO El desarrollo urbano mediante los "asentamientos espontáneos: El caso de los "Campamentos" chilenos, Eure, 3, (7), Abril 1973, pp. -- 103-112
- VANDERSCHUEREN, F, Mobilisation politique et lutte pour le logement au Chili, Espaces et sociétés, (5), Avril 1972

13. Aspectos jurídicos

- CIDU Pobladores y administración de justicia, Eure, 3, (5), Julio 1972, pp. 135-148
- CUELLAR, OSCAR et al. Experiencias de justicia popular en poblaciones, Cuadernos de la Realidad Nacional, (7), Marzo 1971, pp. 153-172
- CUMPLIDO, FRANCISCO Constitución política de 1925: Hoy crisis de las Instituciones Políticas Chilenas, Cuadernos de la Realidad Nacional, (5), Septiembre 1970, pp. 25-40
- FIORI, JORGE Campamento nueva la Habana: Estudio de una experiencia de autoadministración de Justicia, Eure, 3, (7), Abril 1972, pp. 83-101
- LARRAIN F., HERNAN Y BRUNA C., GUILLERMO Estado del régimen de derecho en Chile, Portada, (40), Junio 1973, pp. 35-39

- La legalidad sobrepasada, Política y Espíritu, (editorial), 27, (331), Abril 1972, pp. 3-9
- LECHNER, NORBERT Contra la ilusión del Estado Social de Derecho, Cuadernos de la Realidad Nacional, (10), Diciembre 1971, pp. 130-160
- LECHNER, NORBERT La problemática actual del Estado y del Derecho en Chile, Cuadernos de la Realidad Nacional, (15), Diciembre 1972, pp. 15-56
- NOVOA, EDUARDO El difícil camino de la legalidad, Revista de la U.T.E., (7), Abril 1972, pp. 9-34
- NOVOA, EDUARDO Vías legales para avanzar hacia el socialismo, Mensaje, 197, Marzo-Abril 1971, pp. 84-90
- PASCUAL, DANA Radiografía de la Reforma Constitucional, Punto Final, (6), 154, Marzo 1972, pp. 26-32
- PRADO, BENJAMIN Revolución y Legalidad (documento), Política y Espíritu 28, (340), Enero 1973, pp. 33-41
- RIBEIRO, LUIS FELIPE Sobre la justicia en Chile, CEREN - Ed. Universitarias de Valparaíso. Valparaíso, 1973, 165 p.
- RODRIGUEZ A., JOSE Chile: La Revolución y la ley, Principios 143, Enero-Febrero 1972, pp. 56-74
- RODRIGUEZ E., JOSE Hacia la conquista del derecho popular, Cuadernos de la Realidad Nacional, (15), Diciembre 1972, pp. 191-202
- SAUL, MARIA EUGENIA Reportaje al Estado de Derecha. La justicia momia, Punto Final, (suplemento), (6), 163, Agosto 1972, pp. 1-14

- SILVA B., ALEJANDRO La vigencia del derecho un valor que defender, Portada, (32), Julio 1972, pp. 37-41
- TAMAYO, JUAN Parlamento: El complot de la legalidad burguesa, Punto Final, 5, (137), Agosto 1971, pp. 22-24
- VIERA-GALLO, JOSE ANTONIO y VILLELA, HUGO Consideraciones preliminares para el estudio del estado de Derecho en Chile, Cuadernos de la Realidad Nacional, (5), Septiembre 1970, pp. 3-24
- VIERA _ GALLO, ANTONIO et GADEY, EMMANUEL Chili. Une justice pour le - peuple?, Politique aujourd'hui, 4-5, avril-mai 1972, pp. 115-127
- VIERA - GALLO, JOSE ANTONIO Derecho y transición al socialismo, Mensaje 217, Marzo-Abril 1973, pp. 140-142
- VIERA - GALLO, JOSE ANTONIO Sobre la legislación que define las tres áreas de - la economía, Cuadernos de la Realidad Nacional, (11), Enero 1972, pp. 193-198
- VILLA, RAUL Le Chili entre la legalité bourgeoise et la révolution socialiste, Les Temps Modernes, (29), 310, Mai 1972, pp. 1828-1861
- VON BRUNN, REINHARD Chile: ¿Con leyes tradicionales hacia una nueva economía?, Santiago, ILDIS, 1972, 154 p.

14. Aspectos ideológicos

- AYLWIN, PATRICIO et al. El socialismo visto por los comunitarios, Santiago, IDEP, 1971, 67 p.
- CASTILLO, JAIME Compromiso y tolerancia, Política y Espíritu, 28 (337), Octubre 1972, pp. 12-14
- CASTILLO, MIGUEL Los cristianos y el proceso revolucionario, Principios, 144, Mayo Abril 1972, pp. 37-59

- CERDA, CARLOS Libertad y democracia en el Gobierno Popular, Principios, 144, Marzo-Abril 1972, pp. 15-36
- El compromiso político de los cristianos, Fundación Manuel Larraín, Talca, 1971, 21 p.
- COX, RICARDO La situación chilena ante la doctrina marxista, Portada, (30), Abril 1972, pp. 9-13
- Cristianos por el socialismo: Primer encuentro latinoamericano, Santiago, Ed. Mundo Nuevo, 1972, 302 p.
- Cristianos por el Socialismo. ¿Consecuencia cristiana o alienación política?, Santiago, publicaciones IDEP, Agosto 1972, 438 p.
- CHONCHOL, JAQUES Chili: les chrétiens et l'unité populaire, La Nouvelle Critique, (40), 229, décembre 1971, pp. 42-45
- ECHEVERRIA, RAFAEL - CASTILLO, FERNANDO y LARRAIN, JORGE Etapas y perspectivas de la lucha ideológica en Chile, Cuadernos de la Realidad Nacional, (13), Julio 1972, pp. 114-152
- FONTAINE, ARTURO Ideas Nacionalistas chilenas, Portada, (29), Abril 1972, pp. 8-13
- HUNNEUS, PABLO et al. Chile: el costo social de la dependencia ideológica, Santiago, Editorial del Pacífico, 1973, 255 p.
- J.C.M. El sórdido mundo del fascismo, Punto Final (suplemento), (7) 169, Octubre 1972, pp. 1-8
- J.C.V. Una impostura ideológica, Política y Espíritu, 27 (324), Agosto 1971, pp. 13-24

- LLONA, CRISTIAN Cristianos y Socialismos, Política y Espíritu, 27, (332), Mayo 1972, pp. 33-41
- MILLAS, ORLANDO La lucha ideológica en el Chile de hoy, Principios, 141-142, Octubre-Diciembre 1971
- MUTCHLER, DAVID E. The church as a Political Factor in Latin America: with Particular Reference to Colombia and Chile, New York, Praeger Publishers, 1971, 460 p.
- OSSA, JUAN LUIS Nacionalismo hoy, Santiago, Ed, Portada, s.f., 61 p.
- OBISPOS DE CHILE Evangelio, política y socialismos. Documento de trabajo, Santiago, Secretariado del CECH, 1971, 94 p.
- PARKER, DICK La nueva cara del fascismo, 2ª ed., Santiago, Quimantú, 1972, 176 p.
- PEREZ DE ARCE, HERMOGENES Tras la palabra, un pensamiento, Portada, (36), Enero-Febrero, 1973, pp. 26-30
- RODRIGUEZ, PABLO Entre la democracia y la tiranía, Santiago, Editado por el autor, 1972, 215 p.
- ROJAS, RODRIGO El fascismo: de septiembre de 1970 a Mayo de 1973, Principios, 33, (151), Mayo-Junio 1973, pp. 13-29
- SEGUNDO, JUAN LUIS La Iglesia chilena ante el socialismo, Fundación Manuel Larráin, Talca, 1971, 25 p.
- SILVA HENRIQUEZ, CARDENAL La misión social del cristiano. Conflicto de clases o solidaridad cristiana, Santiago, Ed. Paulinas, 1973, 126 p.
- VUSKOVIC, SERGIO De la incapacidad del sectarismo, Principios, 146, Julio-Agosto 1972, pp. 26-37

VUSKOVIC, SERGIO Pluralismo ideológico, Principios, 140, Agosto - Septiembre 1971, pp. 43-52

ZAÑARTU, MARIO Crisis de Banderas, Acciones y Actitudes, Política y Espíritu - 27 (323), Julio 1971, pp. 21-24

ZAÑARTU MARIO y ORREGO, CLAUDIO Socialismos, propietarismo y liberación del pueblo, Santiago, IDEP, 1971, 103 p.

15. Educación y Cultura

- AVALOS BEATRICE Educación y transformación social, Cuadernos de la Realidad Nacional, (11), Enero 1972, pp. 150-167
- BAZIN, MAURICE La Ciencia "pura" instrumentos del Imperialismo cultural - El caso chileno, Comunicación y cultura, (1), julio 1973, pp. 74-88
- BIEDMA, PATRICIO La lucha ideológica en torno a la prensa en Chile, Comunicación y Cultura, (1), Julio 1973, pp. 22-48
- CARIOLA PATRICIO La Escuela Nacional Unificada: lectura de un informe, mensaje, 218 Mayo 1973, pp. 193-198
- CARIOLA, PATRICIO Y GARCIA-HUIDOBRO, EDUARDO Nuevas políticas de la educación particular y el programa de la Unidad Popular, Mensaje, 193, Octubre 1970, pp. 456-62
- Democratización de la Educación, Principios, 33, (150), Marzo-Abril 1973, pp. 64-96
- DURAN, CLAUDIO y RUIZ CARLOS Ideología de "El Mercurio" y la política de oposición, Revista de la U.T.E., (13-14), Marzo-Junio 1973, pp. 137-166
- La Escuela Nacional Unificada, Mensaje, (editorial), 218, mayo 1973, pp. 164-168
- HUNNEUS, CARLOS La Reforma en la Universidad de Chile, Santiago, Corporación de Promoción Universitaria, 1973, 500 p.
- INSUNZA, MARIO La Contrarrevolución en los medios de la comunicación de masas. Principios, 33, (151), Mayo-Junio 1973, pp. 30-50
- LABARCA, EDUARDO Los medios de comunicación de masas ante la actual etapa revolucionaria, Principios 139, Mayo-Junio 1971, pp. 62-74
- LIHN, ENRIQUE et al. La cultura en la vía chilena al socialismo, Santiago, Ed. Universitaria, 1971, 133 p.

- Mc. HALE, TOMAS El frente de la libertad de expresión, Santiago, Ediciones por-tada, 1972, 231 p.
- MALDONADO, CARLOS El proceso cultural como incentivador de la praxis, Cuadernos de la Realidad Nacional, (12) Abril 1972, pag. 69-84
- MATTELART, ARMAND Lucha de clases, cultura socialista y medios de comunicación masivos, Cuadernos de la Realidad Nacional, (7), Marzo 1971, pp. 173-222
- MATTELART, MICHELE Y PICCINI, MABEL La prensa burguesa, ¿No será más que un tigre de papel?; Los medios de comunicación de la oposición durante la crisis - de Octubre de 1972, Cuadernos de la Realidad Nacional, Abril 1973, pp. 250-262
- MATTELART, ARMAND y MICHELE Ruptura y continuidad en la comunicación: puntos - para una polémica, Cuadernos de la Realidad Nacional, (12), Abril 1972, pp. 100-143
- OSSA, CARLOS Conciencia, Ideología y cultura en el actual proceso chileno, Cuadernos de la Realidad Nacional, (12), Abril 1972, pp. 85-99
- OTANO, RAFAEL La campaña electoral: baile de máscaras, Mensaje, N°217, Marzo-Abril 1973, pp. 96-101
- PALACIOS, SERGIO 24 meses de cultura militante, Política y Espíritu 28, (338), Noviembre 1972, pp. 51-56
- La revolución chilena y los problemas de la cultura (Documentos de la Asamblea Nacional de Trabajadores de la Cultura del Partido Comunista), Santiago, s. ed., 1971, - 117 p.
- SANCHEZ, AGUSTIN Una reforma educacional en Chile, Pensamiento y acción, (7), - Abril 1973, pp. 9-17
- SANTELICES, ROMULO et al. La ENU: ¿control de las conciencias o educación liberadora?, Fundación Manuel Larraín, Talca, 1973, 51 p.

- SOTO, HERNAN El aporte de la intelectualidad científica, Principios, 140, Agosto-Septiembre 1971, pp. 70-89
- TEITELBOIM, VOLODIA, MALDONADO, CARLOS y ATIAS, WALDO La revolución chilena y los problemas de la cultura, Santiago, Ed. Austral, 1971,
- VALDES, HERNAN ¿Prudencia o desorientación para formular las bases de una política cultural?, Cuadernos de la Realidad Nacional, (7), Marzo 1971, pp. 254-265
- VASCONI, T.A. y RECA, I.C. Universidad y poder: 1966-1972 (Un capítulo de la lucha ideológica en Chile), Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, (4), Diciembre 1972
- MATTELART, ARMAND ¿Hacia una cultura de la movilización cotidiana? Cuadernos de la Realidad Nacional, (10), Diciembre 1971, pp. 49-97